Legajo OGA N°16748, caratulado "ETCHEVEHERE DOLORES - TABOADA ERNESTO FACUNDO S/ USURPACION".-
Legajo de Fiscalía Nro. 16614 - 16730

SENTENCIA: En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los 24 días del mes de abril de 2025, se constituye en el Salón de Audiencias el Señor Vocal N°5 del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, **DOCTOR GERVASIO PABLO LABRIOLA**, a los fines de deliberar y dictar sentencia en el Legajo **N°16748** del registro de O.G.A., caratulado "**ETCHEVEHERE DOLORES - TABOADA ERNESTO FACUNDO S/ USURPACION**" por el delito que se le sigue a: *Dolores ETCHEVEHERE, DNI N° 20.189.984, sin apodo, de 55 años de edad, nacionalidad argentina, de estado civil separada de hecho, que sabe leer y escribir, domiciliada en Guido N° 1894, piso 6°, de Capital Federal, tiene estudios universitarios incompletos, se dedica al cuidado de sus cuatro hijos, no tiene situación de consumo, que ha nacido en Paraná, el día 06/04/1969, que no ha sido condenada; hija de Leonor Barbero MARCIAL (V) y Luis Félix ETCHEVEHERE (F); y Ernesto Facundo TABOADA, DNI N° 26.568.174, sin apodo, de 47 años de edad, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión abogado, ejerce la profesión, domiciliado en Chacabubo 689 (casa) de la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires, que ha nacido en Capital Federal el día 15/04/1978, que no ha sido condenado, hijo de Luis Taboada (f), y de María Cristina Guisito (V), no ha tenido ni tiene situaciones de consumo de sustancias.-*

Han actuado en el debate por parte de la Fiscalía, el **Dr. FACUNDO BARBOSA** por la Querrela Particular, el Dr. **RUBÉN PAGLIOTTO** y los encartados **DOLORES ETCHEVEHERE** -asistida por los Dres. **PATRICIO COZZI** y **DANIELA VERÓN**, y **ERNESTO FACUNDO TABOADA**, -conectado vía jitsi meet -asistido por el Dr. **Patricio COZZI**.-

Conforme a de la remisión a juicio, se le atribuyó a **DOLORES ETCHEVEERE y a ERNESTO FACUNDO TABOADA** el siguiente **hecho**: "*En fecha 15 de octubre de 2020, siendo las 11 horas aproximadamente, DOLORES ETCHEVEHERE y FACUNDO TABOADA, ingresaron -junto a un grupo de cuarenta personas aproximadamente-, al Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva -sito en zona rural del Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, con ingreso por Ruta Provincial N° 48-; quienes una vez en el interior del perímetro del Casco de dicho establecimiento, se dirigieron a la empleada Ramona Rodríguez, exigiendo la entrega de las llaves de las puertas de ingreso de la casa principal, amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma,*

habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Angel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos. Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.".-

En primer término, se le solicitó a las partes que formulen los correspondientes **alegatos de apertura**. Así, por parte de la Fiscalía, se procedió a la lectura del hecho imputado y la calificación legal escogida, se mencionaron las evidencias de las cuales pretendían valerse. Expresó que se acreditará que la posesión del predio rural donde funcionaba el establecimiento agropecuario la Casa Nueva, era ejercido al momento de los hechos por la entidad Las Margaritas SA, y que para ello se íban a valer fundamentalmente de las declaraciones de Magdalena Barbero Marcial, Luis y Diego Etchevehere y el ingeniero Mariano Rubeolo. También se dijo que se acreditaría que el ejercicio de esa posesión se ha visto interrumpido en octubre de 2020 con motivo de la irrupción de los imputados acompañados de un grupo de aproximadamente 40 personas. Refirió al despojo de la posesión y que a través de diversos testigos, en particular el escribano Zuffiaurre, se hará una reseña histórica de la situación domiñal del fundo donde funcionaba el establecimiento agropecuario Casa Nueva como del devenir de la firma social Las Margaritas. Indicó que va a acreditarse eo proceso de desalojo llevado a cabo por la policía provincial ordenado por la Dra. Castagno y que permitió acreditar la presencia en el fundo de los acusados y el acompañamiento de aquellas personas que le permitieron concretar la usurpación.-

A continuación se concedió la palabra al Querellante Particular, quien sostuvo que la base acusatoria estuvo claramente expuesta por el Dr. Barbosa. Refirió a la teoría del caso y que el hecho típico acaecido el 15 de octubre de 2020 en el fundo rústico donde funciona un establecimiento rural, Casa Nueva, y que forma parte de los activos que tiene la SA que gira como Las Margaritas se produce un entrusamiento o la usurpación por despojo. Refirió que es un caso simple, pero que tuvo trascendencia inédita; destacó que se produjo la acción típica del art. 181 del CP, que el bien jurídico protegido es la posesión y argumentó al respecto. También refirió a la prueba de que se iban a valer y por la cual iban a sostener la acusación. Expuso que acompañará la pena que solicite el fiscal.-

Acto seguido se concedió la palabra a la Defensa a fin de que formule su

alegato de apertura. Así, comenzó el Dr. Patricio Cozzi diciendo que la acusación no puede extralimitarse del marco limitativo del hecho intimado, hizo referencia al sistema acusatorio, al derecho de defensa y habló sobre el hecho intimado. Compartió que el bien jurídico es la posesión. Se refirió a que la acusación era poco clara, y que van a probar que no hubo amenaza. Asimismo tomó la palabra la Dra. Daniela Verón quien refirió que van a demostrar que la investigación fue llevada a cabo sin perspectiva de género y argumentó al respecto. Dijo también que van a demostrar la inequidad, el trato desigual hacia su defendida, dando sus fundamentos, y dijo que se trata de una acusación discriminatoria.-

Habiéndose declarado abierto el debate y resuelto las cuestiones preliminares planteadas, se hizo conocer a los **imputados** el derecho de declarar o de abstenerse de hacerlo sin que ello implicara presunción alguna en su contra, a lo que los mismos hicieron uso de su derecho de abstención en un primer momento.-

Seguidamente se dispuso recibir la prueba admitida, y en primer término se recibieron las diferentes declaraciones **testimoniales**, cuyo contenido se encuentra a resguardo en los registros fílmicos del debate:

- Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL, DNI N° 4.531.465;
- Ramona Magdalena Rodríguez, DNI N° 18.239.652;
- Ángel Roberto MARTINEZ, DNI N° 22.690.261;
- Juan Diego ETCHEVEHERE, DNI N° 24.264.829;
- Luis Miguel ETCHEVEHERE, DNI N° 14.718.347;
- Stella Maris Denis, DNI N° 35.715.377;
- Gimena María Macarena Velazquez, DNI N° 37.921.288;
- José Luis Zufiaurre, DNI N° 12.251.035;
- Guillermo Javier Fritz, DNI N° 24.264.822;
- Gustavo Horacio MASLEIN, DNI N° 17.186.522;
- Annelise Maria Anahir Dieterle, DNI N° 34.121.483;
- Mariano Hernán Rubiolo, DNI N° 24.456.753;
- Alberto Javier Genre Bert, DNI N° 28.796.803;
- María Mercedes Bolognini, DNI N° 35.063.882;
- Laura Mónica Cantore, DNI N° 13.487.796;
- José Nicolás Caropresi, DNI N° 31.081.276;
- Gabriela Diana Carpineti Rebola, DNI N° 31.652.528; y
- Érica María Evelina Kloster, DNI N° 35.444.111;

Terminada la recepción de la prueba testimonial, los **imputados** hicieron uso del derecho a declarar, cuyo contenido se encuentra a resguardo en los registros fílmicos del debate.-

Asimismo se procedió a la incorporación del **resto de la prueba**

oportunamente admitida. Al respecto, se incorporó por el **MINISTERIO PUBLICO FISCAL**:

A.- POR CONVENCIÓN PROBATORIA:

1) Las partes acuerdan que no van a discutir la capacidad de culpabilidad de Dolores Etchevehere y de Ernesto Facundo Taboada.-

B.- DOCUMENTAL:

- Denuncia de fecha 15/10/2020 de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, como Presidenta de la Sociedad Anónima "Las Margaritas S.A.", presentada vía e-mail por parte del Dr. Rubén Pagliotto, abogado de la Sra. Marcial Barbero.

- Ampliación de Denuncia de fecha 17/10/2020, realizada por Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, como presidenta de la sociedad Anónima "Las Margaritas" S.A., remitida vía e mail, por su abogado el Dr. Ruben Pagliotto.

- Acta de Constatación de fecha 16 de Octubre de 2020, del Establecimiento Rural "Casa Nueva", Ruta acceso a Santa Elena por Mandamiento N° 1516, emanado del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, con la firma de la Oficial Stella Maris Denis, y testigos civiles.

- Acta de Constatación de fecha 17 de octubre de 2020, del Establecimiento Rural "Casa Nueva" a la vera de la Ruta Provincial N° 48 del Dpto. La Paz, E.R., con la firma de la Oficial Sub Inspector Annelise Dieterle, y testigos civiles.-

- Informe N° 2.349, de fecha 19 de octubre de 2020, con la rúbrica de Mario Ceferino SILVETTI, Jefe de la División Publicidad Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de La Paz, E.R., junto a copias (en 4 fojas) de descripción y matrículas de Inmuebles.

- Copias certificadas de Audiencia de Asamblea General Extraordinaria de Las Margaritas S.A. de fecha 14/09/2018.

- Copias certificadas de Acta de asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de junio de 2019, de Las Margaritas S.A.

- Acuerdo Privado de Adjudicación y Partición de bienes de fecha 31/08/2018, en copia certificada por Escribano Actuante, José Zuffiaurre.

- Copia Certificada del Libro de Registro de Actuaciones N° 40-Acta N° 47, de fecha 31/08/2018, con firma del Escribano José Luis ZUFFIAURRE.

- Informe I0487 del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos N° I0487, de fecha 22/10/2020, con la Rubrica del Ingeniero Guillermo Fritz, detallando las operaciones realizadas desde el día 20/10/2020, sobre el sitio Web "<https://www.proyectoartigas.ar/etchevehere>." de donde fueron extraídos y resguardados documentos, URL's, así como videograbaciones que se encuentran en aquel sitio, referido tanto al "proyecto Artigas", como a la ocupación del Establecimiento "Casa Nueva", en particular un video que se encuentra en Youtube titulado "Testimonio de Dolores Etchevehere", cuya información es visible publicamente y se ha resguardado en un DVD rotulado

DVD-I0487-16614.

- Informe de Elevación Nota DILP 208/20, de fecha 26 de octubre de 2020, con la rúbrica de la Oficial Inspector de PER, Gimena Velazquez, Constatando el egreso en fecha 23/10/2020, del Establecimiento Rural "Casa Nueva" de personas y automóviles, quienes se encontraban alojados en el interior del mencionado establecimiento, con sus datos filiatorios, con su correspondiente soporte magnetico DVD.

- Informe sugido del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos N° I0491, de fecha 02/11/2020, con la Rubrica del Ingeniero Guillermo Fritz, detallando las operaciones realizadas el día 02/11/2020, sobre el sitio Web "[https://www.proyectoartigas.ar/etchevehere.](https://www.proyectoartigas.ar/etchevehere)" de donde fueron extraídos y resguardados documentos, URL's, así como videograbaciones que se encuentran en aquel sitio, referido tanto al "proyecto Artigas", como a la ocupación del Establecimiento "Casa Nueva", en particular los agregados (a la fecha de referencia en la pagina Web) de "Denuncia por amenazas y solicitud de protección", "Nuestra Estrategia Legal" y "Escritura cesión de herencia parcial", así como "Modelo Agrario Sostenible, Libre de Agrotóxicos y Explotación" en particular un video que se encuentra en Youtube titulado "Testimonio de Dolores Etchevehere", cuya información es visible publicamente, y se ha resguardado en su correspondiente DVD, rotulado DVD-I0491-16614.

- Informe y Elevación de Novedades, de fecha 29 de Octubre de 2020, con la rúbrica de la Oficial Principal María Mercedes BOLOGNINI.

- Copia Certificada de Acta de Procedimiento, rubricada por el Oficial Principal Lonardo G. Gastón SOSA, de fecha 29/10/2020.

C.- DOCUMENTAL ESTANDARIZADA (art. 447 C.P.P.)

- Informe del Registro Nacional de Reincidencia en relación a los antecedentes de la imputada, Sra. Dolores ETCHEVEHERE de fecha 03 de junio de 2021.

- Informe nominativo del Imputado Facundo Ernesto TABOADA de fecha 04 de junio de 2021.

- Incorpora además Siete (7) DVD's, remitidos por la División Tóxicos de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, conteniendo las imágenes del procedimiento de Desalojo del Establecimiento "casa Nueva" de fecha 29/10/2020, prueba enumerada en el punto 28 del auto de remisión a juicio.

Por parte del **QUERELLANTE PARTICULAR**, Dr. Rubén Pagliotto, se adhirió a la totalidad de la prueba ofrecida por la Fiscalía, y acompañó además las siguientes pruebas:

- Fotocopia de ACUERDO PRIVADO DE CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS suscripto en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2.018, entre MIRUS

S.A., y DOLORES ETCHEVEHERE y;

- Fotocopia de dos Escrituras Públicas de Mutuos en dinero dólar, de fechas 07/11/2017 y 28/11/2017, respectivamente.-

La **DEFENSA TÉCNICA** de los imputados incorporó como prueba documental:

- Informe realizado, como testigos expertos, por la Dra. Laura Cantore y Lic. Enrique Stola, respecto a la perspectiva de género a aplicar al caso concreto.-

Finalmente el Sr. Presidente concedió sucesivamente la palabra a las partes para que formulen sus correspondientes **alegatos de clausura**. Así, en la discusión final hizo uso de la palabra por el **Ministerio Público Fiscal** el Dr. **Facundo BARBOSA** quien procedió a relatar el hecho investigado, calificación legal escogida, el bien jurídico tutelado, y analiza la prueba producida en el debate. Afirmó que se encuentra acreditado el hecho. Refirió a los medios comisivos enumerados en el art. 181, inc. 1 del CP. Expresó que se debe tener presente no solo la violencia física sino también la moral y al medio comisivo de amenaza. Indicó que el hecho se ha acreditado a través de la prueba producida siendo sus autores Dolores Etchevehere y Facundo Taboada, subsumido en el art. 181, inc 1 del CP, expresó que no se avizora circunstancia fáctica que configure causa de justificación. Y en cuanto a la pena, refirió a la falta de antecedentes penales de los imputados, también aludió a la existencia de agravantes, y solicitó la aplicación a los imputados de la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional y costas.-

A continuación se concedió la palabra a la **Querella Particular, Dr. Rubén PAGLIOTTO** expresó que fue muy claro y fundamentado el alegato final del fiscal, no obstante lo cual por imperio del magisterio que representa, acusatorio particular, y frente a las declaraciones recibidas por los imputados da sus argumentos. Realizó valoración de la prueba vertida en juicio. Manifestó que adhiere a la pena solicitada por el fiscal respecto de Dolores Etchevehere. En cuanto a Facundo Taboada, solicitó la aplicación del mínimo de la pena, con cumplimiento condicional. Realizó reserva de recurrir en casación e introdujo la cuestión federal.-

A continuación se concedió la palabra a la **Defensa**, ejerciendo la palabra el **Dr. Patricio Cozzi**, quien para empezar se preguntó si el hecho tiene relevancia penal, se refirió a los medios comisivos que se emplearon para configurar el hecho, en particular a la amenaza; distinguió entre violencia física y moral, cuestionó y argumentó la falta de precisión en la acusación, en particular respecto del medio comisivo. Refirió que no se produjo despojo con amenaza. Aludió al delito de amenaza aduciendo que no se configura, dando sus fundamentos. Destacó lo dicho por la querella respecto de Facundo Taboada cuando solicitó una pena menor a la de Dolores Etchevehere. Solicitó la absolución de Dolores

Etchevehere y Facundo Taboada en función de no configurarse el tipo penal, concretamente no se configuró la amenaza; e hizo reserva de recurrir en casación y del caso federal.-

Tomó la palabra la **Dra. Daniela Verón** a fin de dar su **alegato de clausura**, y expresó que medió una acusación discriminatoria hacia Dolores Etchevehere, explayándose al respecto.-

Asimismo, antes de cerrar el debate, a modo de **últimas palabras**, la encartada DOLORES ETCHEVEHERE manifestó: "*Deseo solicitarle que alguna vez, y con todo lo que he escuchado, se alique la ley, nada mas.*".-

A su turno, el encartado FACUNDO TABOADA dijo: "*Yo no tengo nada para agregar*".-

A la hora de emitir opinión, y para un adecuado tratamiento del tema, este juzgador se planteó las siguientes cuestiones para resolver:

PRIMERA: ¿Qué corresponde resolver sobre el planteo de afectación del principio de congruencia formulado por la Defensa Técnica de las personas acusadas?

SEGUNDA: ¿Existieron los hechos materia de acusación? De ser esto así ¿son las personas acusadas sus autoras?

TERCERA: Si ello es así: ¿en qué normas penales se encuadra su accionar?; ¿pueden responder penalmente y dentro de qué límites?

CUARTA: Siempre en su caso ¿qué pena corresponde aplicar las personas acusadas? y ¿qué corresponde resolver sobre las restantes cuestiones de forma?

A la PRIMERA CUESTION el Dr. LABRIOLA DIJO:

i.- Para un mejor orden, comenzaré por transcribir cuál es el hecho atribuido a Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA, el cual se mantuvo sin variaciones durante el debate oral y público, y que -en cuanto a plataforma fáctica- adquiriera firmeza por resolución de la Sala Penal del STJ al rechazar el recurso de Queja en fecha 18/09/2023, ante un planteo de la Defensa Técnica de las personas imputadas en el presente proceso.-

Así, tal como surge del auto de remisión a juicio, se les atribuye:

"En fecha 15 de octubre de 2020, siendo las 11 horas aproximadamente, DOLORES ETCHEVEHERE y FACUNDO TABOADA, ingresaron -junto a un grupo de cuarenta personas aproximadamente-, al Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva -sito en zona rural del Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, con ingreso por Ruta Provincial N° 48-; quienes una vez en el interior del perímetro del Casco de dicho establecimiento, se dirigieron a la empleada Ramona Rodríguez, exigiendo la entrega de las llaves de las puertas de ingreso de la casa principal, amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que

había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto - sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos. Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A."

He resuelto comenzar con la transcripción del hecho, ya que la Defensa Técnica advirtió, tanto en su alegato de apertura como en el de clausura, que había batallado hasta obtener una decisión de la sala Penal del STJ, denunciando ciertas imprecisiones en su formulación, de tal entidad como para afectar el principio de congruencia y como derivación suya las garantías del derecho de defensa y el debido proceso legal que le asisten a las personas imputadas en esta causa.-

En efecto, la Sala Penal del STJ al expedirse en relación a ese planteo lo desechó, sin embargo realizó algunas precisiones que resultan relevantes a la hora de determinar cuál es el marco dentro del cual las partes debieron litigar sus teorías del caso, de manera de que con la descripción precisa y circunstanciada del segmento fáctico intimado resulte posible cumplir con la función de "comunicación eficaz" garantizando así que sus destinatarios tengan cabal y efectivo conocimiento de qué defenderse a la hora de contrarrestar la hipótesis acusatoria.-

En dicho pronunciamiento, en lo que aquí interesa, del voto de la Dra. Mizawak surge que: *"IV.- Contrariamente de lo que expresa la defensa, el hecho expresamente menciona que el medio comisivo para producir el despojo fue la amenaza; siendo la acusación lo suficientemente clara y precisa, describiendo acabadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De allí que no se advierte ningún óbice para que los imputados puedan ejercer cabalmente su derecho de defensa durante el contradictorio oral.*

Será justamente en el debate, donde el Ministerio Público Fiscal deberá demostrar si la amenaza existió y si el contenido de la misma tiene entidad suficiente para considerarse una conducta de intimidación; en definitiva, si el hecho efectivamente sucedió tal como ha sido descrito y si es pasible de ser subsumido en la figura delictiva seleccionada.

(...) V.- "...Insisto, los defectos a los que alude la parte recurrente no tienen entidad para lesionar el derecho de defensa. Por el contrario, se encuentra

asegurado su eficaz ejercicio, lo cual exige que el individuo sometido a un proceso penal pueda por sí (defensa material) o a través de su defensor (defensa técnica) contestar la imputación que en su contra se formula.

Entiendo que la intimación satisface lo recaudos legales que el código ritual consagra y se le ha garantizado a los imputados su derecho a conocer acabadamente cuál es el hecho que se le atribuye; motivo por el cual ni los imputados ni su defensa se encuentran con esa alegada falta o mengua de certidumbre.- ("ETCHEVEHERE, DOLORES- TABOADA FACUNDO S-USURPACIÓN S RECURSO DE CASACIÓN S/RECURSO DE QUEJA", Expte. N° 5333. (18/09/2023).-

Delimitado ello, a mayor abundamiento, haré algunas consideraciones referidas al principio de congruencia como garantía emanada del derecho de defensa en juicio de toda persona sometida a proceso.-

Como es sabido, para que se configure una vulneración al principio de congruencia debe existir una correlación entre el hecho intimado -entendido en su sentido global- en la etapa intermedia, durante el debate y en la sentencia. Ahora bien, esa correlación a mi criterio no significa que deba -en todos los casos- existir una identidad formal o literal -absoluta- en su redacción, pues razonar en tal sentido implicaría abonar una concepción del principio de congruencia de índole formal o literal que no se condice con el contenido material en el que se cimenta esta garantía procesal. Es decir, quien alega su vulneración, debe demostrar, en cada caso concreto, que la discordancia o variación en el hecho intimado ha sido de tal entidad o relevancia como para provocar una sorpresa o desbaratamiento de su estrategia defensiva, y consecuentemente afectar su derecho de defensa en juicio.-

En este orden de ideas, entiendo -insisto- que una concepción material o sustantiva del principio de congruencia no necesariamente exige que exista una identidad total y absoluta de la literalidad de los términos en que fuera redactado el hecho en cuestión, sino que por el contrario lo que se requiere es que el sentido en que se encuentra formulado permita a toda persona acusada ejercer sin cortapisas ni sorpresas su derecho de defensa en juicio.-

En este orden de ideas, sostiene RUSCONI: "*Los problemas más relevantes del proceso penal deben ser analizados a la luz de la garantía constitucional o principio fundamental que está en juego. Desde este ángulo, el respeto a la garantía del derecho de defensa en el proceso requiere que haya correspondencia entre imputación y decisión. El principio de congruencia ha sido interpretado por la opinión dominante y por la jurisprudencia de un modo muy restringido. Sin embargo, esa correspondencia se lesiona cuando la decisión produce un cambio relevante, tanto en los hechos como en las normas, con relación a la imputación. La garantía del derecho de defensa debe proteger frente a cambios sorpresivos que impliquen una lesión a la estrategia defensiva o una*

defensa ciega.

(...) por la propia dinámica del desarrollo de la logística de la audiencia del juicio oral, el acusado y su defensor se defienden y desarrollan su estrategia a partir de la imputación (tanto normativa como fáctica) que guía la atribución del Fiscal, por lo que un cambio brusco de la calificación normativa por parte del Tribunal dejaría descolocados sorpresivamente a los planteos defensistas, violando de ese modo el respeto a la garantía del derecho de defensa en juicio (tanto en su faz formal como material)." (Maximiliano RUSCONI, "lura novit curia y congruencia: la garantía del derecho de defensa entre hechos y normas", Boletín Semestral GLIPGö No. 5 (Enero-Junio 2013) pág. 5 y ss).-

En el mismo orden de ideas, he de hacer mención a los precedentes de la Cámara de Casación Penal de esta ciudad "QUIROZ", sent. del 05/04/17; "MARTÍNEZ", sent. del 20/09/17; "GONZÁLEZ", sent. del 15/06/15; y "GÓMEZ", sent. del 04/04/2018; en los que también se cita otra obra de Maximiliano RUSCONI, quien hablando de la necesidad de preservar el principio de congruencia como manifestación de la garantía del derecho de defensa -en *El sistema penal desde las garantías constitucionales*. Hammurabi, Bs. As., 2013- explica que para garantizar el derecho de defensa es necesario que se comprenda la frontera entre hechos y normas, pero sobre todo, es relevante la forma en que se comprende esta relación del mundo fáctico y mundo jurídico a la luz de las funciones del proceso penal. Citando a Baumann, en tanto éste refiere que, considerados en forma aislada, el hecho o la situación de hecho concreta no puede ser objeto del proceso, nos dice que la mera descripción del hecho cumple una función diagnosticadora pero no esencialmente comunicadora. *"El supuesto de hecho no puede ser contemplado aisladamente, sino en el marco del recorte del mundo fáctico que realiza una norma jurídico penal... En realidad, los hechos no se imputan, sino que se describen. La imputación como tal representa un fenómeno en gran medida cultural que conlleva un juicio de valor que sólo se expresa cuando el hecho se apodera de la norma. Por otro lado, la organización del camino probatorio no está indicado de ningún modo en el mero hecho, sino que viene organizado por aquellos segmentos del hecho que le dan contorno a la acción como un comportamiento desvalorado..."*.-

En consonancia con ello, en el fallo "GOMEZ" ya citado, se afirma que: *"...Esta valoración normativa debe estar ínsita, claro está, dentro de los límites del hecho que se le imputara a Gómez. Si se piensa en lo que usualmente se cita como "plataforma fáctica" como una fotografía del hecho, o como un film que reproduzca perfectamente, y a manera de copia exacta, el hecho histórico acontecido -que se atribuye como delito- es claro que se podrán encontrar frecuentemente, en casi todos los juicios penales, asimetrías en sus detalles respecto de la prueba producida. Pero aún cuando la correspondencia fuera*

perfecta, todavía no tendríamos por sí garantizado el derecho de defensa si no estuviera referido a un recorte normativo que le dé sentido en una imputación.".-

En similar sentido, puede leerse en autos "*RAMIREZ ERNESTO JUSTO - ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE DOBLEMENTE AGRAVADO S/ RECURSO DE CASACION*" (Causa Nº 87/14 - sent. del 04/11/2014): "*...Así las cosas, estimo que la crítica recursiva direccionada a la conculcación del derecho de defensa por afectación del principio de congruencia, resulta insostenible, porque lo que verdaderamente importa a los fines de la garantía en examen (esto es, la esencia que inspira el principio de congruencia) es el asegurar al imputado la posibilidad de defenderse en plenitud, excluyendo cualquier cambio que, por sorpresivo, le impida al inculpado elaborar su estrategia defensiva.- (ver VÉLEZ MARICONDE, con cita de MANZINI en su Trat. de Der. Proc. Penal).- (del voto del Dr. PEROTTI).*"-

Así las cosas, coincidentemente con lo resuelto por la Sala Penal del STJ en fecha 18/09/2023, entiendo que en el caso el hecho intimado reúne aquellos requisito que MAIER refiere como configuradores de lo que él denomina una "correcta imputación", en los siguientes términos: "*...la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de sus elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal a la que, se pretende, conduce o, de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, guían también a evitar la consecuencia o reducirla. Pero, para que la posibilidad de ser oído sea un medio eficiente de ejercitar la "defensa", ella no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción, acudiendo al nombre de la infracción, sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento -que se supone real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos -temporal y espacialmente- y le proporcionen su materialidad concreta (...)" (Maier Julio B. J. "Derecho Procesal Penal", Tomo I, Fundamentos, 2ª ed., Editores del Puerto S.R.L, Buenos Aires , 1999, p. 553).-*

Aplicado ello al caso concreto, de la simple lectura de la descripción fáctica que contiene la hipótesis imputativa surge que la misma contiene suficientes precisiones circunstanciadas relativas a personas, tiempo, modo y lugar de su acaecimiento. Tales extremos redactados en términos claros y fácilmente entendibles hacen que, como correlato suyo, las personas imputadas hayan tenido efectivamente la posibilidad de resistir la imputación, y en efecto así lo hicieron al declarar en la instancia de debate.-

Dicho lo mismo en otros términos, se les ha garantizado el derecho a obtener una comunicación eficaz del hecho intimado, el cual ha sido comprendido por sus destinatarios, y en consecuencia se han encontrado desde entonces en condiciones de refutar la acusación y controvertirla sin restricciones durante el presente proceso penal.-

Por tales fundamentos, resulta forzoso concluir que en la medida en que las pruebas rendidas sean merituadas teniendo como referencia la descripción que contiene el hecho atribuido (y no elementos que le son extraños, como por ejemplo distintas modalidades comisivas que prevé el legislador pero que no han sido intimadas en este caso, sea clandestinidad, engaño, abuso de confianza) no habrá afectación al principio de congruencia en el caso concreto.-

Así voto.-

A la SEGUNDA CUESTION el Dr. LABRIOLA dijo:

I.- Para responder a la segunda cuestión planteada -a los fines de un mejor orden- considero adecuado comenzar en primer término por despejar aquellas cuestiones que no han sido objeto de controversia, para luego entrar a considerar el nudo central de la controversia en base a los fundamentos esgrimidos por las partes en la discusión final como ejes de valoración de la prueba producida e incorporada.-

Cabe recordar que para valorar la prueba producida, es menester recurrir al sistema de la "libre convicción razonada", donde el juzgador debe apreciar las pruebas de acuerdo a su libre convencimiento, pero éste debe valerse y limitarse también por las reglas de la sana crítica racional, las cuales sabemos son: la lógica, los conocimientos aportados por la ciencia y las máximas de experiencia, para así arribar a su conclusión en la sentencia, que debe ser racionalmente motivada, para ser reputada como acto jurisdiccional válido, como todo acto de un gobierno republicano (art. 1 C.N.).-

En este sistema no existen reglas legales predeterminadas como ocurre en el antiguo sistema de la prueba tasada, que dejaba al juez muy escaso margen para decidir y le impedía en muchos casos establecer la "verdad", aspiración del proceso penal.-

Siguiendo a Jorge E. VÁZQUEZ ROSSI ("Curso de Derecho Procesal Penal", Ed. Rubinzal- Culzoni, T. II, págs. 229/239), es acertado advertir que "*Lo que el proceso penal alcanza es una declaración aproximativa de la verdad convencionalmente aceptable en la medida en que cumple con requisitos normativamente establecidos y a los que dota de plausibilidad jurídica por la invocación explícita de ciertas constancias e implícitas por el convencimiento subjetivo de los juzgadores. Esa reconstrucción efectuada mediante una actividad oficial sujeta a reglas no es una auténtica indagación de la realidad, sino la búsqueda de una plausibilidad social y jurídica. Pero cabe insistir en que esto es*

todo lo que pueda alcanzar el proceso, una verdad de índole procesal, sujeta a reglas de juego que son en definitiva, garantías...".

En esta labor, de acuerdo al contenido del auto de remisión de la causa a juicio y del modo en que han quedado fijadas las respectivas posturas de las partes a tenor de sus alegatos en la etapa de discusión final, es posible puntualizar una serie de extremos fácticos que no han sido controvertidos y que giran en torno al contexto de comisión del hecho que ha sido atribuido, los que - independientemente de ello- se encuentran plenamente acreditados con los elementos de prueba, a saber:

a- Que del Informe del Registro de Propiedad de La Paz, que la titular registral del inmueble rural identificado como "Casa Nueva", sito en zona rural - ruta 48- del Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, es "Las Margaritas" S.A. y que en efecto dicho inmueble integra el patrimonio de esa persona de existencia ideal.

b- Que la presidencia del directorio de dicha S.A. a la fecha la ostenta la denunciante, Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL de ETCHEVEHERE, conforme surge del libro de Acta de Asambleas de "Las Margaritas" S.A., Acta de fecha 05/06/2019, donde entre otros puntos se elige el directorio y se distribuyen los cargos, en especial, la presidencia de la Sociedad y del Directorio de "Las Margaritas" S.A., en la persona de la nombrada.-

c- Que del *acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes* del 31/08/2018 surge que en el marco del expediente sucesorio en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de esta capital, a cargo del Dr. Martín FURMAN, Dolores ETCHEVEHERE es declarada heredera del causante Luis Félix ETCHEVEHERE junto a sus hermanos y madre.-

d- Del *acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes*, suscripto por los cinco (5) herederos en fecha 31/08/2018, con firmas certificadas ante notario José Luis ZUFFIAURRE, surge que Dolores ETCHEVEHERE manifiesta que se la han exhibido todas las documentaciones bancarias, contables, existencia de bienes en el sucesorio y en la sociedad "Las Margaritas" S.A., los balances y rendición de cuentas a los cuales ella le presta plena conformidad, y entiende que no hay ninguna razón jurídica, económica, ni moral, para proseguir con el trámite en sede penal en calidad de querellante o denunciante, por lo que en instrumento separado procederá a desistir en tal calidad a los fines de su presentación en el juzgado que instruye la misma.-

En tal sentido en el punto 8 del acuerdo, Dolores ETCHEVEHERE renuncia y desiste de cualquier tipo de reclamo presente y futuro (penal, civil y/o comercial), que existiere vinculado a los presentes proceso judiciales o que de ellos pudieran llegar a derivarse. En ese mismo acuerdo se deja constancia de que Dolores ETCHEVEHERE, con el presente asesoramiento de su abogado Santiago Roque

YOFRE SOLANET y por el 12,5% que le corresponde en las acciones de "Las Margaritas" S.A. sobre el total del patrimonio de la misma, les cede a sus coherederos parte de los bienes (inmuebles, automotores, semovientes inventariados en el acervo sucesorio), y a cambio recibe dinero en moneda dólar estadounidenses las sumas de US\$24.000 en efectivo y de US\$35.000 a abonarse en tres pagarés de igual importe cada uno; y por otra proporción de sus acciones se le adjudicaron dos (2) parcelas rurales, una de 387,29 ha. (del campo denominado "Los Cachorros") y otras fracciones rurales sin mejoras pertenecientes al campo denominado "Casa Nueva" por un total de 129 ha.-

Asimismo, en el citado convenio las partes acuerdan iniciar un proceso de escisión o separación societaria de Dolores ETCHEVEHERE como socia de la sociedad "Las Margaritas" S.A. de conformidad a lo que las partes definan de común acuerdo con posterioridad.-

e- Que tal acuerdo fue refrendado en Asamblea General Extraordinaria de "Las Margaritas" S.A., del día 14-09-2018, conforme surge de las copias certificadas del libro de Actas de Asambleas N° 2 de "Las Margaritas" S.A. rubricado y, que en dicho acto estuvo presente en representación de Dolores ETCHEVEHERE, el Dr. Santiago YOFRE SOLANET, quien votó en idéntica forma al resto de los accionistas, por lo cual se aprueba el acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes de "Las Margaritas S.A" habiéndose votado por unanimidad.-

f- Que en fecha 16/10/2018 Dolores ETCHEVEHERE le notifica (en los términos del art. 215 de la Ley 19.550) a la Presidenta de "Las Margaritas" S.A., que procedió a ceder la totalidad de su tenencia accionaria conformada por 22.875 acciones nominales, a favor de "MIRUS" S.A. CUIT 30-71484075-0, con domicilio en Barrio La Peregrina, Lote 153, sito en Calles Rivadavia y San Mateo, Localidad de Derqui, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, cuya firma fue certificada ante el notario José Luis ZUFFIAURRE.-

g- Que en fecha 15/11/2028 se suscribió el *acuerdo privado de cesión de acciones y derechos* en la ciudad de Buenos Aires, entre "MIRUS S.A.", y Dolores ETCHEVEHERE, mediante el cual ésta manifiesta que en fecha 16-10-2018 cedió a MIRUS S.A. la totalidad de sus acciones en la entidad "Las Margaritas" S.A. y los derechos y obligaciones surgidos en el Convenio (*acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes y de Escisión Societaria*, de fecha 31-8-2018), cuyas firmas se encuentran certificadas por la Escribana Sandra V. IAMPOLSKY , Matrícula 4709 - Registro 1326 de la C.A.B.A. .

h- Que Dolores ETCHEVEHERE celebró contratos de mutuo en dólares estadounidenses con "MIRUS S.A." según surge de las escrituras públicas N° 271 de fecha 07-11-2017 autorizada por la Escribana IAMPOLSKY de C.A.B.A., mediante el cual "MIRUS S.A." otorga en préstamo a Dolores ETCHEVEHERE la suma de u\$s 54.000.- a devolver a los dos años, con una tasa del 8% anual y N°

267 de fecha 28-11-2.017, autorizada por el Escribano Nicolás CAMPITELLI de C.A.B.A., mediante el cual "MIRUS S.A." otorga en préstamo a Dolores ETCHEVEHERE la suma de u\$s 314.880.- en dinero efectivo, al 8% anual, para devolver en dos años.-

Hasta aquí he enunciado aquellos extremos relacionados con los antecedentes de los distintos actos jurídicos y patrimoniales que involucraron a los cinco sucesores de Luis Félix ETCHEVEHERE desde la fecha de su fallecimiento (6/9/2009), que si bien resultan ajenos al eje de la controversia en la presente causa, igualmente resultan útiles para contextualizar el marco en el cual tuvo lugar el acontecimiento del 15/10/2020 que es, en definitiva, el hecho atribuido a Dolores ETCHEVEHERE y Facundo Ernesto TABOADA.-

Y lo anteriormente reseñado lo es sin perjuicio de cuál es el estado actual del **conflicto familiar subyacente a la presente causa**, me refiero a la elongada, enmarañada y ríspida disputa que existe entre -por un lado- Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL y sus tres hijos varones Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego ETCHEVEHERE, y -por el otro- su hija menor Dolores ETCHEVEHERE- que es de público conocimiento e involucra una **serie de expedientes judiciales en trámite** -denuncias recíprocas- que determinan que la cuestión referida a la titularidad de los derechos y a la distribución de los distintos bienes sucesorios que conforman el patrimonio del acervo sucesorio aún se encuentre lejos de ser definitivamente resuelta (me refiero, concretamente, al expediente sucesorio radicado en el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná a cargo de Martín FURMAN, a la acción de nulidad iniciada por Dolores ETCHEVEHERE a fines de dejar sin efecto el *acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes y escisión societaria* del 31/08/2018, a la causa N° 8173/2020 Secretaría N° 5 iniciada en el fuero federal ante el juzgado de Daniel RAFECAS por extorsión y violencia económica por denuncia de Dolores ETCHEVEHERE contra sus hermanos y su madre (luego remitida al Juzgado Federal de Paraná por incompetencia) -quien expuso que su voluntad se encontraba viciada, afectada y condicionada al momento de suscribir los convenios propuestos denunciando que dicho acto jurídico es producto de una extorsión- a la causa de estafa caratulada "L.E. N° 522/2 ETCHEVEHERE, LUIS MIGUEL; ETCHEVEHERE, ARTURO SEBASTIAN; ETCHEVEHERE, JUAN DIEGO; BARBERO MARCIAL, LEONOR; BARBERO MARCIAL Y OTROS S/ESTAFA (Denuncia de DOLORES ETCHEVEHERE)" -donde los hermanos varones y la madre de Dolores ETCHEVEHERE han sido procesados- radicada en la Sala 1 de la Cámara del Crimen de esta ciudad, en trámite actualmente ante la Cámara de Casación Sala 1 donde se están sustanciando los recursos contra el auto de procesamiento confirmado por el Tribunal de segunda instancia, donde Dolores ETCHEVEHERE reviste la calidad de denunciante y querellante. En este último expediente judicial, intervino como integrante el tribunal colegiado que

confirmó dicho procesamiento por resolución de fecha 31/05/2024, intervención que en modo alguno compromete mi imparcialidad en la resolución del presente caso).-

Como vengo diciendo, entiendo que tales antecedentes resultan útiles para contextualizar el hecho ocurrido el 15/10/2020, aunque no son relevantes a la hora de determinar la tipicidad de la conducta enrostrada, pues como es sabido la figura penal de usurpación protege la relación de hecho o fáctica entre una persona -sea de existencia ideal o humana- y un bien inmueble, más allá de las características del derecho que se invoca para mantenerse en relación efectiva con la cosa (dominio, usufructo, posesión, cuasiposesión, tenencia, sean legítimas o ilegítimas) y, en tal sentido, lo que en definitiva interesa es determinar quién detentaba ese poder de hecho sobre el inmueble en cuestión -el campo "Casa Nueva"- para el día 15/10/2020 que es el momento en que Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA se hicieron presentes en ese predio rural.-

En función de ello, debo sí advertir que no encuentro explicación alguna al hecho de que la Fiscalía incorporara la frase inicial que se encuentra en el último párrafo de la descripción del hecho intimado, pues ello no hace más que aportar confusión a lo que debería estar claro desde un comienzo. Vale recordar que la primera parte de ese párrafo final contenido en el hecho enrostrado consigna: *"Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva..."* pues a mi modo de ver el conocimiento que las personas imputadas tuvieran o no sobre tal extremo resulta, a todas luces, irrelevante en miras al delito enrostrado.-

Aclarado ello, continuando con los extremos no discutidos y probados en el presente caso, tenemos que:

i) Para el día 15/10/2020 "Las Margaritas" S.A. ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, del Establecimiento Rural "Casa Nueva", siendo oportuno recordar que para ese entonces Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL ejercía la presidencia y Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego ETCHEVEHERE revestían la calidad de socios integrantes del directorio de la sociedad.-

j) Que en los hechos, dicha relación de posesión del inmueble era ejercida por la sociedad anónima a través de los empleados que estaban a cargo del mantenimiento del establecimiento rural y de llevar a cabo las actividades productivas que se desarrollaban en "Casa Nueva", me refiero concretamente a *Angel Roberto MARTINEZ* -capataz o encargado que en ese rol recibía órdenes del Administrador Juan Diego ETCHEVEHERE- quien además recibía a proveedores, profesionales (veterinarios, aplicadores, etc.), coordinaba las labores junto con otros empleados y se encargaba de comunicar a sus superiores todo aquello relativo a la marcha de las actividades productivas, quien vivía en un puesto

dentro del predio rural junto con su mujer *Miriam*; a *Ramona RODRIGUEZ* y *Osmar BARRETO*, quienes eran los "caseros" del establecimiento, siendo la primera quien se ocupaba de la limpieza y mantenimiento en general del casco y de las demás dependencias que lo integraban, mientras que el segundo realizaba tareas de mantenimiento del parque y de sus alrededores. Además, también trabajaba en el tambo del establecimiento un empleado de apellido *LENCINA*.-

ii.- Delimitados así los extremos no discutidos y además acreditados por un lado, así como el contexto de judicialización y conflicto vigente desde el fallecimiento de Luis Félix ETCHEVEHERE, que involucra y tiene como protagonistas a sus cinco derechohabientes y en el marco del cual se inscribe el hecho acaecido el día 15/10/2020 en el Establecimiento agrícola y ganadero "Casa Nueva", corresponde ahora realizar una serie de consideraciones relacionadas con el hecho de que Dolores ETCHEVEHERE ha venido denunciando, no solo en la presente causa, haber sido víctima -sistemáticamente y desde su temprana edad- de **discriminación por razones de género** por parte de su madre y de sus hermanos varones, y que dicho trato desigual y discriminatorio hacia su persona -basado en su condición de hija menor y de mujer- ha provocado que sea excluida del seno familiar (que funcionó siempre bajo una dinámica patriarcal y de estereotipos según los cuales la administración, disposición y el manejo de asuntos patrimoniales era una cuestión reservada exclusivamente a los varones de la familia y donde las mujeres no debían inmiscuirse) y de todo cuanto se encontrara relacionado con la cuestión patrimonial de la familia ETCHEVEHERE.-

Ante la situación invocada, no es admisible que como operadores del sistema judicial y funcionarios públicos hagamos caso omiso -deliberadamente- a esta cuestión, pues -como es sabido- existe un deber positivo convencional, constitucional y legal de juzgar los casos con perspectiva de género y de obrar con la debida diligencia reforzada. Digo esto pues, me llama poderosamente la atención, el hecho de que ni la Fiscalía ni la Querrela se ocuparan de dar tratamiento al asunto durante el debate, siendo una cuestión que fuera introducida expresamente por Dolores ETCHEVEHERE y su Defensa Técnica a la hora de ventilar y litigar su teoría del caso (sin dejar de mencionar que ya había sido planteado ello durante el trámite de la investigación penal preparatoria). Esta omisión de dar tratamiento a la situación de violencia de género denunciada, insisto resulta inadmisibles, a la vez que refuerza el tratamiento desigual y discriminatorio que ha venido padeciendo Dolores ETCHEVEHERE a lo largo del presente proceso.-

iii.- Entonces, corresponde realizar algunas consideraciones sobre el enfoque o perspectiva de género que debe guiar las prácticas y las decisiones jurisdiccionales, atento a que el tratamiento de esta cuestión resulta insoslayable

dadas las especiales circunstancias del caso concreto.-

En el caso concreto, como dije anteriormente, la Defensa Técnica -y material- de Dolores ETCHEVEHERE se ha cimentado sobre el argumento consistente en que desde sus primeros años de vida y hasta la actualidad, se ha visto violentada por parte de un sistema familiar de índole patriarcal, que la posicionó -por su condición de hermana menor y la única mujer- en una relación desigual de poder respecto de sus hermanos varones Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, como consecuencia de lo cual fue sistemáticamente excluida del manejo, participación e intervención en los negocios familiares, y en todo aquello concerniente a la administración, gestión y disposición del patrimonio del grupo familiar, a la vez que se le denegó el acceso a la información necesaria para adoptar decisiones relacionadas con tales asuntos.- Dolores ha referido, al declarar en este debate, que se ha encontrado sumida en un contexto de sometimiento y de exclusión, caracterizado por actos violentos -explícitos e implícitos- de carácter crónico y sistemático que simbolizan y reproducen un patrón de discriminación hacia su persona por su condición de mujer, ejerciendo los demás miembros de su grupo familiar (concretamente su madre y sus tres hermanos varones) sobre su persona un dominio prototípico de los patrones culturales patriarcales y estereotipados que aún se encuentran arraigados en nuestra sociedad.-

Al mismo tiempo la Defensa Técnica ha cuestionado la actividad de los funcionarios intervinientes (fiscales, jueces) durante el trámite del presente proceso penal, por considerar que su representada ha sido objeto de innumerables actos y prácticas de violencia institucional basados en la discriminación por su condición de género, que en los hechos se tradujo en actos y omisiones que revelan un tratamiento procesal discriminatorio, desigual y sesgado en perjuicio de su asistida.-

En efecto, la Defensa Técnica ha denunciado que el poder punitivo del Estado ejercido contra su asistida durante la Investigación Penal Preparatoria ha estado pura exclusivamente fundamentando en tales estereotipos y preconcepciones, y que por tal motivo se ha omitido deliberadamente investigar los hechos del caso de manera objetiva, diligente y eficaz (como lo imponen las Leyes y Tratados Internacionales vigentes) a la luz de las circunstancias esgrimidas por Dolores ETCHEVEHERE.-

En consecuencia, entiendo que se debe relativizar la circunstancia referida a la posición que le toca ocupar a Dolores ETCHEVEHERE en el presente proceso (me refiero a su calidad de imputada y no -estrictamente- de víctima o denunciante, a diferencia de lo que ocurre en algunas de las restantes causas judiciales en trámite que involucran a los mismos protagonistas del conflicto, en las que los roles están invertidos) porque esta diferencia se diluye desde el

momento mismo en que Dolores alega en su defensa ser víctima de violencia de género, y es a partir de ahí que los integrantes del Poder Judicial debemos cumplir con los deberes positivos que la Argentina ha asumido (en el orden convencional regional e internacional y también en el ordenamiento normativo interno nacional y provincial) y poner en marcha la aplicación de las normas y prácticas adecuadas para garantizar el cabal y eficaz cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por nuestro país en torno esta temática en particular.-

Claro está que no por ello desconozco que -como imputada- Dolores ETCHEVEHERE no tiene el deber de decir verdad, pues las circunstancias alegadas -haber sido excluida del seno familiar como hija, tanto en lo afectivo como en lo patrimonial- lo han sido en el marco del ejercicio de su defensa material. Ahora bien, hecha esta salvedad, considero que su relato debe ser valorado e interpretado a la luz de los mismos parámetros de análisis y desde idéntica perspectiva -y con las mismas herramientas- que caracterizan el abordaje de toda mujer que denuncia ser víctima de violencia de género, descartando así todos los prejuicios y estereotipos socialmente construidos en derredor a aquello que tradicionalmente se espera -o no- de una "víctima ideal" o de una "mujer estándar" en determinadas circunstancias.-

Como vengo diciendo, **aplicar la perspectiva de género es un deber positivo que nos incumbe** en cuanto funcionarios públicos integrantes de uno de los poderes del Estado, pues nuestro país ha asumido distintos compromisos y obligaciones -tanto en el orden normativo interno como en el regional e internacional- que imponen en cabeza de quienes ejercemos funciones estatales el desempeño de nuestra labor desde esta óptica de abordaje.-

Concretamente, tales deberes positivos surgen de manera explícita de las previsiones contenidas en los siguientes instrumentos normativos:

-Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada por Ley N° 23.179 en su art. 2° inc. b), c), d) y e) , art. 5° incisos a) y b), art. 15° inc. 2);

-Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará" aprobada por Ley 24.632 art. 7° incisos a), b) , e), f) g) y h);

-Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada por Ley N° 23.054 en su art. 8° incisos 1) y 2) -Garantías Judiciales- y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por Ley N° 23.313 en su art. 14°;

-Ley Nacional N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales en su art. 1°, art. 2° en todos sus incisos, art. 3° incisos a), c), d), i), j), k), art. 7° en todos sus incisos, art. 16° (ratificada por la nuestra

provincia por Ley N° 10.058).-

Considero conveniente traer a colación aquí el concepto de la denominada perspectiva de género que nos brinda Carlos PARMA (en "Valoración de la prueba en los delitos sexuales y de género", Revista de Derecho Penal y Criminología AÑO X - Nº 03 -ABRIL 2020, Thomson Reuters - La Ley, pág. 175 y ss.): *"La llamada perspectiva de género se refiere a las formas, procedimientos, metodologías y mecanismos que permiten visibilizar, identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas que se han argumentado históricamente entre hombres y mujeres.*

Una vez identificada la herramienta se ponen en funcionamiento las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. En un lenguaje claro sería "una mirada distinta" que realza la igualdad.

Desde otro ángulo se puede afirmar que "la perspectiva de género establece una teoría social que trata de explicar las características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y sin desigualdades."

En esta misma línea, nuestro máximo Tribunal Provincial se ha expedido destacando la importancia de analizar la resolución de los casos judiciales mediante un enfoque o perspectiva de género en autos "GALARZA, Nahir Mariana - Homicidio Calificado por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja - S/IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA" (sent. del 04/03/2020), en los siguiente términos: *"...En lo atinente al agravio esgrimido por entender la parte recurrente que se ha efectuado un juzgamiento sin perspectiva de género al haberse soslayado, según su mirada, las reglas elementales básicas, llevándose a cabo un análisis sexista, cabe anotar que, por el contrario, el decisorio impugnado trató con solidez dicha cuestión, destacando que el Tribunal de mérito ha dedicado extensas consideraciones acerca de dicho tópico, referenciando el marco normativo local e internacional que guía la resolución de casos en que se invoque tal situación y efectuando valoraciones respecto de la prueba en ese contexto, para luego de ello, descartar la estrategia del caso de la defensa al respecto, no implicando per se una resolución arbitraria ni sexista, recalando que el Tribunal de Juicio valoró correctamente las evidencias existentes para decidir al respecto, como así también las diferentes mutaciones que fue produciendo la encartada a lo largo del proceso, adaptando sus declaraciones a sus propios intereses, y si bien la imputada no estaba conminada a manifestar una verdad, el Juez analizó sus dichos a la luz de una perspectiva de*

género, evaluando una serie de episodios, los que no pudo tener por acreditados (...)

Dable es resaltar que, sin perjuicio del abstracto planteo efectuado por la defensa acerca de la conjeturada violencia de género padecida por Galarza, a lo largo de todo el proceso se puede advertir que se han valorado todas las circunstancias que rodean la presente causa con una verdadera perspectiva de género, habiendo permitido ello un abordaje íntimamente vinculado con la tutela judicial efectiva, visibilizándose dicha pauta hermenéutica incluida transversalmente como se debe hacer con cualquier derecho humano trascendente que se ha tenido en cuenta durante el transcurrir procesal, que no merece reproche alguno desde dicha óptica tuitiva.-" (Del voto del Dr. CARUBIA).-

Cabe tener además presente que expertos en la materia se han dedicado al tratamiento de aquellas herramientas conceptuales y metodológicas que nos conducen a conceptualizar a la perspectiva de género como una categoría de análisis tendiente a identificar los estereotipos culturales que se encuentran impregnados en los procesos judiciales así como el sesgo de género del derecho.-

En este sentido, sostienen que la perspectiva de género como categoría de análisis nos permite evaluar en cuanto al acceso a la justicia en qué medida las normas, los procedimientos, las prácticas y las instituciones incluyen las vivencias y necesidades de las mujeres.-

Como ya referí, dicho enfoque se encuentra incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por vía legal, convencional y jurisprudencialmente a través de numerosos organismos internacionales, como un mandato de aquellos Estados que son parte de Tratados Internacionales elevados a rango constitucional (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, CEDAW, Convención Belém do Pará, citando además, distintos precedentes jurisprudenciales en el ámbito regional y las recomendaciones N° 33 y 35 del Comité de la CEDAW).-

En esta línea de análisis, se suele destacar que los procesos y prácticas discriminatorias pueden advertirse en dos fenómenos muy específicos identificados en la jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos y plasmado en leyes locales y tratados internacionales, que tienen que ver con la persistencia de *estereotipos y roles estereotipados* que están latentes en la sociedad y que se impregnan en los procesos judiciales (muchas veces incluso de forma tácita), por lo que hoy los operadores debemos prestar especial atención para detectar el estereotipo en una dirección en la investigación, en una decisión de investigar o no hacerlo, en el razonamiento judicial, en la valoración de la prueba, etcétera. Ello ha sido reconocido por el Comité de la CEDAW, que en la Recomendación General N°33 expresa que los estereotipos aparecen permeados en todas las instancias judiciales, desde la investigación hasta en la sentencia.

Y por otro lado, el segundo fenómeno es lo que se conoce como el *sesgo de género del derecho*, y lo que se señala es que el derecho pretende ser objetivo, universal y neutral, pero sin embargo fue pensado por y para derechos de los varones, dejando de lado las necesidades y vivencias más específicas de las mujeres, lo que redundaría en un resultado discriminatorio.-

Entonces, metodológicamente, una vez identificados tales estereotipos, prácticas y sesgos discriminatorios (en base a las distintas herramientas de trabajo y análisis), resulta imprescindible erradicarlos para resolver el caso sometido a la decisión judicial libre de tales prejuicios y preconcepciones. También se suele hacer referencia a la importancia que reviste para la resolución de casos como el bajo examen el hecho de llevar a cabo un minucioso análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos.-

En efecto, a la luz de tales parámetros y herramientas conceptuales, corresponderá analizar las pruebas arrimadas teniendo siempre en miras el relato que brindó Dolores ETCHEVEHERE, despojando el razonamiento judicial de todo tipo de interferencia basada en prejuicios, preconcepciones y prácticas discriminatorias basadas en la condición de género de la imputada.-

En concordancia con tales conceptos y herramientas, Carlos PARMA (obra citada, pág. 178) nos brinda un concepto de violencia contra la mujer en los siguientes términos:

"La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación que encuentra sus raíces en las relaciones de poder desiguales existentes entre hombres y mujeres, resultado de una construcción sociocultural. Hay que derribar el mito de que la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, son problemas de índole privada, sino que compete a la sociedad entera su solución y al Estado promover políticas públicas de amparo, prevención y asistencia y en especial al Poder Judicial dar el correspondiente derecho de acceso a la justicia, otorgar el debido enfoque de género y materializar un sistema de protección a las víctimas. Estos malos tratos físicos, sexuales, psicológicos y económicos, basados en relaciones inequitativas responden a prejuicios que deben ser superados con un nuevo paradigma con base centralmente en la igualdad, comprensión, empatía, protección, equidad, etc.

Sobre el tema debe estarse a la "Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer", la "Convención Interamericana para sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra la mujer" (Belem do Pará) y la Plataforma de acción de Beijing..."

Y la normativa vigente en la materia también nos permite identificar las distintas manifestaciones de la violencia de género que puede ejercer el hombre contra la mujer por su condición de género (art. 1° de la CEDAW, art. 1° y 2° de la Convención Belem do Pará, arts. 4° y 5° de la Ley N° 26.485).-

En igual sentido, considero de gran interés y utilidad las herramientas conceptuales y metodológicas que en sintonía con lo anteriormente desarrollado nos brinda la autora Laura CLÉRICO (en "Derecho constitucional y derechos humanos: haciendo manejable el análisis de estereotipos" disponible en <https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/4250>).

Sostiene la autora que el objetivo de su artículo es explorar el análisis de estereotipos como herramienta metodológica dirigida a operadores jurídicos que trabajan en la justicia y deben mantener la alerta interpretativa de no incurrir en el uso de estereotipos o que tienen la obligación de desarmar los estereotipos que se enmascaran en las formalidades de las presentaciones jurídicas o en la naturalización de los hechos del caso.-

Seguidamente, nos proporciona el siguiente concepto: *"Los estereotipos operan de manera inconsciente cada vez que adscribimos a una persona atributos, características o roles sólo en razón de su pertenencia o supuesta pertenencia a un determinado grupo social. Reforzamos y perpetuamos estereotipos cuando los aceptamos acríticamente en lugar de cuestionarlos"*

Tomando la caracterización de estereotipos que ha realizado Verónica Undurraga, la autora cita la siguiente definición: *"Los estereotipos de género son creencias sobre los atributos de mujeres y hombres, que cubren desde rasgos de personalidad (las mujeres son más subjetivas y emocionales, los hombres son objetivos y racionales), comportamientos (las mujeres son más pasivas sexualmente, los hombres son más agresivos en ese plano), roles (las mujeres deben asumir las tareas de cuidado y el hombre ser el proveedor), características físicas (las mujeres son más débiles que los hombres), y de apariencia (los hombres deben ser masculinos), ocupaciones (las carreras de armas no son para las mujeres, los hombres no pueden ser parvularios) y supuestos de orientación sexual (las lesbianas son egoístas y no priorizan el interés de sus niños; los gays son promiscuos)."*

Para finalmente, traer a colación lo que ha dicho al respecto la Corte IDH en "Campo Algodonero" y en "Gutiérrez Hernández c. Guatemala": *"...el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible de asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y lenguaje de las autoridades estatales".-*

De igual manera, la normativa convencional e internacional nos impone

desterrar los estereotipos de género (Cfr. CEDAW art. 5° incisos a) y b), Convención "Belem do Pará" arts. 6° y 8° incisos a) y b)).-

Resulta también muy útil para analizar con profundidad la temática en cuestión, y aplicado todo ello a las circunstancias del caso concreto, el Informe de los expertos Dra. Laura CANTORE y Dr. Enrique STOLA, que fuera acompañado como prueba a la causa por la Defensa Técnica, cuyas consideraciones fueron ampliadas y ratificadas en un todo al prestar declaración testimonial durante el juicio la Dra. CANTORE.-

En base a estas premisas conceptuales y metodológicas, resulta imprescindible aplicar tales herramientas a los fines de desenmascarar y erradicar los prejuicios y estereotipos de género para excluirlos y apartarlos del razonamiento que guíe la decisión judicial del presente caso.-

iv.- Aclarado lo anterior, en lo que sigue dedicaré unos párrafos para tratar aquellos aspectos relacionados con las reglas y criterios generales de valoración de la prueba, y en particular del relato de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia de género.-

Es sabido que nuestro sistema procesal establece un único sistema de valoración de la prueba que es el de la sana crítica racional, bajo cuyas reglas debe ser analizado todo el material probatorio reunido -art. 254 C.P.P.E.R.- incluido, claro está, la declaración de la acusada con el fin de establecer su credibilidad.-

Además, dicho criterio rector debe ser complementado en el caso con las previsiones que al respecto establece la Ley N° 26.485, al consagrar la amplitud probatoria para casos en los que se ventilen cuestiones relacionadas a la violencia de género denunciada por la mujer (Cfr. arts. 16° i) y 31° de la norma citada).-

En efecto, dadas las especiales características de los extremos denunciados por la imputada (hechos que normalmente acontecen en el marco de la intimidad, lo que repercute probatoriamente en la ausencia de testigos presenciales, en la falta de prueba documental o de rastros, lo cual conlleva que la declaración de la supuesta víctima constituya la única prueba de cargo o la de mayor incidencia) el relato de Dolores ETCHEVEHERE requiere de un máximo rigor interpretativo máxime en situaciones como la del caso bajo análisis, en las que su alegación se orienta a operar como una eximente del reproche penal.-

Por ello la doctrina y jurisprudencia han elaborado, a fin de conceder o no relevancia probatoria a la declaración de la víctima, pautas objetivas de análisis de sus dichos, las cuales en mi opinión resultan aplicables al caso para evaluar los dichos de Dolores ETCHEVEHERE.-

Dichos criterios, cuya finalidad estriba en superar las sospechas que se ciernen sobre la credibilidad de las víctimas, han sido expuestos por una vasta doctrina y jurisprudencia, de las que se puede extractar: "...La declaración de la

víctima tiene el valor característico de una prueba testifical y, siempre que se practique con las debidas garantías, puede servir como prueba capaz de desvirtuar por sí misma la presunción constitucional de inocencia... No es prueba indiciaria, sino prueba directa y, como tal, queda sometida a la intermediación del Tribunal ante el que se presta... dicha prueba no es inhábil a los efectos de poder ser valorada como una prueba más por el tribunal sentenciador, el cual obviamente debe aplicar a la valoración del conjunto del acervo probatorio los habituales criterios de razonabilidad, añadiendo otros que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba, de modo específico o particularmente relevante en aquellos delitos que, por las circunstancias en que se cometen, no suelen contar con la presencia de otros testigos. (STS. 6398/2013)..., criterios o reglas de valoración tales como: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, b) Verosimilitud,... y,...c) Persistencia y firmeza del testimonio..." (STS 2733/2013) ... (STS 024/2013)".-

En síntesis, en esta línea argumental, la declaración de la imputada, podrá tener entidad para avalar su teoría del caso en este punto, siempre y cuando no se adviertan en ella razones objetivas que invaliden las afirmaciones que realiza.-

Estas razones objetivas o criterios valorativos que se tienen en cuenta para evaluar la declaración de la víctima en hechos de violencia de género sometidos a juzgamiento, resultan aplicables para analizar en el caso los dichos de la imputada, y pueden resumirse en tres grupos:

a) ausencia de incredibilidad subjetiva: la cual se verifica cuando, teniendo en cuenta entre otros baremos la personalidad del declarante, su madurez, edad, nivel de comprensión, etcétera, se pueda afirmar, que no existen razones de peso que lleven a pensar que existe entre la víctima y el victimario una relación basada en el odio, el resentimiento, la enemistad, la revancha, los celos, la venganza o cualquier otra, que hagan dudar sobre la imparcialidad de la declaración, es decir, que le nieguen aptitud para generar credibilidad.-

b) La verosimilitud de la declaración: lo cual significa que ésta no resulte fantasiosa, increíble, no ajustada a las reglas de la lógica o la experiencia, que no presente vaguedades, que sea coherente; y, fundamentalmente, que sea factible de corroboración, es decir, que los hechos narrados puedan ser avalados por otros hechos, datos, o circunstancias externas e independientes de la propia declaración.-

c) Persistencia en la acusación: lo cual significa que ésta se debe mantener en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades, lo cual significa que la declaración debe ser concreta, precisa, narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de narrar, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes, y

persistente en lo sustancial a través de los sucesivos relatos.-

Vale aclarar que **todo lo anteriormente reseñado resultará también, a la postre, aplicable a la hora de analizar la situación del co-imputado Ernesto Facundo TABOADA**, pues, como ha sido acreditado, éste se hizo presente el 15/10/2020 en el establecimiento rural "Casa Nueva" en su carácter de abogado, asesor y representante de Dolores ETCHEVEHERE, con quien previamente había mantenido contacto y además había estudiado los antecedentes y documentación relativa al conflicto familiar y a las causas judiciales en trámite, extremo que determina que dichas circunstancias resulten extensivas a la hora de abordar la situación del co-imputado.-

v.- Finalmente, en relación al punto que vengo tratando, no puedo dejar de considerar que **existen decisiones judiciales, adoptadas tanto en el marco de la presente causa como en otras vinculadas con la misma problemática, que sí le han dado el tratamiento adecuado a la cuestión de género invocada.-**

a- En este sentido, tenemos en primer lugar el auto de procesamiento dictado en el expediente L.E. Nº 55212, caratulado "ETCHEVEHERE LUIS MIGUEL; ETCHEVEHERE, ARTURO SEBASTIÁN; ETCHEVEHERE, JUAN DIEGO Y BARBERO MARCIAL DE ETCHEVEHERE, LEONOR MARÍA MAGDALENA Y OTROS S/ ESTAFA (Dcia. de DOLORES ETCHEVEHERE)" en fecha **24/11/2022** (cuyas consideraciones comparto, pues como antes referí integré el tribunal de alzada que confirmó dicha resolución en fecha 31/05/2024), donde al respecto la Dra. BACALUZZO sostuvo:

"No obstante ello, no resulta factible excluir como damnificada a la denunciante Dolores Etchevehere, ya que "Cuando la administración desleal es cometida en perjuicio de una sociedad comercial, toda vez que se lesiona el patrimonio de la persona jurídica, también se afecta el derecho de los socios a percibir utilidades, ya que el daño incide sobre el monto que se podrá distribuir en caso de liquidación. Es para esos supuestos que se sugiere distinguir esos damnificados del sujeto pasivo, denominación que se reserva para la persona jurídica cuyo patrimonio ha sido lesionado. .." (Righi, pág. 112).

En efecto, si bien a lo largo de esta investigación se ha discutido la calidad de víctima del delito de Dolores Etchevehere e incluso existe en trámite un incidente de cese de su intervención como querellante particular, lo cierto es que la señora Etchevehere formuló una denuncia -en el fuero federal- contra su madre y hermanos por la comisión del delito de extorsión, producto de la violación a los derechos protegidos y garantizados en la ley 26.485, habiéndose ejercido, en su contra, violencia psicológica y económica. Sostiene que sus hermanos y su madre urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas con el objetivo de despojarla de sus derechos hereditarios mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y

económica.

Afirma que, encontrándose en un estado de indefensión, doblegaron su voluntad para que, el 31 de agosto de 2018, firmara un acuerdo privado de adjudicación y partición de herencia y que fuera cuestionado en el expediente sucesorio.

Expone que existe una maquinaria mafiosa que opera extorsionando y ejerciendo toda clase de violencia en su contra: económica y psicológica y que está encabezada por su hermano Luis Miguel quien se valió del poder político y económico y sus influencias para lograr desapoderarla de todos sus bienes producto del acervo hereditario de su padre, por medio de la extorsión, aprovechándose de su condición de mujer sola.

En las constancias remitidas por el Juzgado Federal de Paraná- organismo en el que actualmente está radicada la causa- (cfme. fs. 2762) obra agregada copia de la resolución de fecha 12 de marzo de 2021 - suscripta por el Juez Federal, Dr. Daniel Eduardo Rafecas- donde se destaca que la fiscalía actuante solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las mujeres de la Procuración General de la Nación y las profesionales intervinientes refieren a lo manifestado durante la entrevista por la denunciante y concluyen que "la investigación debe atender a los mandatos legales, tanto del orden nacional como internacional, que fueron desarrollados en materia de derechos de las mujeres. Al haberse alegado manifestaciones de violencia por razones de género que están involucradas en las maniobras denunciadas, la actividad probatoria y procesal debe cumplir con los estándares de debida diligencia reforzada, asegurar la perspectiva de género en cada una de las decisiones que se adopten, ser llevada adelante con proactividad y oficiosidad y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante, tras once años de derrotero judicial".

Además, se resalta que el informe de la DOVIC precisa que "se podría identificar que en las oportunidades en las que ha tenido que "elegir" en el marco de este conflicto, sus decisiones han sido tomadas en un contexto complejo, con opciones propuestas por los denunciados y que para ella representaban decidir el mal menor. Estas conductas podrían entonces no estar basadas en una real autonomía..." de Dolores Etchevehere.

El Dr. Rafecas - más allá de resolver la incompetencia del Tribunal a su cargo y remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Paraná- considera que los hechos denunciados encuadran en las previsiones del art. 168 del C.Penal y que esa infracción se encuentra cometida en función de lo dispuesto por la ley 26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales", que en su artículo 5° prevé como tipo de violencia contra la mujer la económica y patrimonial.

Asimismo, destaca el magistrado que de la prueba producida surgen importantes indicios que sugieren el accionar conjunto de los denunciados en perjuicio de Dolores Etchevehere y que ha motivado el pedido de indagatoria formulado por el Fiscal Dr. Delgado, quien dictaminó que se trató de disuadir a Dolores de su reclamo, prolongando su asfixia económica, lo que se tradujo en "un poder asimétrico dirigido a conseguir un acuerdo sucesorio a medida de los imputados...La fuente de esas vicisitudes es su familia de sangre...Tales prácticas en su conjunto constituyen un mecanismo de disciplinamiento que persigue el objetivo de torcer su voluntad para que acepte acuerdos que, desde una posición de asimetría, diseñada por su familia de sangre y que implica un menoscabo de sus derechos hereditarios...Frente al fracaso de las instancias institucionales y la prolongación de la situación de precariedad económica, la alternativa es suscribir acuerdos que afectan sus derechos...".

Resultan de suma trascendencia las conclusiones transcritas en torno a un contexto de violencia de género que denunció Dolores Etchevehere y que no se circunscribe a un solo acto de subyugación y asimetría de poder, sino que parecerían indicar la existencia de numerosas maniobras que persiguen despojarla de sus derechos hereditarios en tanto fue declarada legítima heredera de Luis Felix Etchevehere en fecha 19 de febrero de 2010.

Cabe tener en cuenta que Ley N° 26.485 en su art. 5.4) dispone que un tipo de violencia contra la mujer es aquella que se dirige a ocasionarle un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales a través de: "a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna.

Esta particulares aristas del conflicto familiar entre Dolores Etchevehere por un lado y sus hermanos y su madre por el otro hacen aplicable el especial marco de protección pergeñado a nivel convencional y constitucional para los delitos cometidos en un contexto de violencia de género. En estos supuestos, las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos se complementan y refuerzan con las obligaciones derivadas de la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

De tal modo, ante un acto de violencia de género, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de

brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección (C.I.D.H., "Rosendo Cantú y otra Vs. México", sent. del 31/8/2010).-

El Estado Argentino tiene un deber de prevención y protección diferenciado o "reforzado" -estándar de "debida diligencia reforzada"- en razón de su posición de garante frente a patrones de violencia que afectan a ciertos grupos vulnerables. Es central en estos casos la producción de prueba y su valoración sin prejuicios ni estereotipos para garantizar el acceso a justicia de las víctimas. Si las leyes y prácticas judiciales no se releen desde la perspectiva de género, existe el peligro de ofrecer respuestas estandarizadas que no contemplen las necesidades, realidades y dificultades que enfrentan las mujeres que viven la violencia y solicitan auxilio en el sistema penal.

En este contexto, debe advertirse que el juzgamiento de casos de violencia contra la mujer con perspectiva de género requiere que se efectúe un análisis dinámico, que tenga en cuenta el carácter evolutivo de los derechos humanos, para coadyuvar a superar la discriminación y a evitar la revictimización de quienes denuncian ser víctimas de violencia de género y la perpetuación de la asimetría de género.

Si bien la denuncia de Dolores Etchevehere por Extorsión en un contexto de violencia de género económica y patrimonial está siendo tramitada en el fuero federal y se refiere a hechos diferentes al aquí investigado, se advierten indicios de que la misma ha sido víctima de violencia de género económica y patrimonial y es factible que existan maniobras realizadas por sus hermanos y su madre que persiguen despojarla de sus derechos hereditarios. Este puntal aspecto de la controversia familiar no puede ser dejado de lado en el presente auto de mérito, toda vez que puede impactar en todos los acuerdos y actos jurídicos realizados entre Dolores, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere y su madre Leonor Barbero Marcial.

Por tanto, no es posible receptar sin más la simplificada lógica que pregona la defensa de los aquí imputados, que se circunscribe al texto expreso de la escritura de Cesión de acciones de Dolores Etchevehere a su madre, efectuada el 25 de agosto de 2010 (agregada a fs. 662/vta) para concluir que Dolores Etchevehere no es damnificada por la presunta maniobra defraudatoria que se endilga a sus hermanos y a su madre y que perjudicó a SAER.

Más bien este puntal extremo deberá ser objeto de un análisis integral, profundo y conglobado de todas las singulares vertientes judiciales y privadas que se han suscitado entre los herederos de Luis Félix Etchevehere, pero teniendo especialmente en cuenta que la violencia de género denunciada por Dolores activa la obligación de juzgar con perspectiva de género, que "implica hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del

quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder. Una sociedad democrática demanda impartidores e impartidoras de justicia comprometidas con el derecho a la igualdad y, por tanto, investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas a la constitución, a los derechos humanos y a los tratados internacionales que los consagran. Al aplicar la perspectiva de género quienes juzgan generan precedentes que coadyuvan a la construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos.....”(cfrt. voto de la Dra. Mizawak en el precedente "BORDIGIÓN", Sala en lo Penal, STJER, sentencia del 11 de febrero de 2021).

Ello es así porque la violencia de género es una trágica realidad que impone al Poder Judicial el deber de generar una profunda reflexión acerca de la forma en que debe abordarse el tema y asumir un rol activo y positivo como actor capaz de hacer un aporte efectivo a la erradicación de la violencia contra las mujeres, juzgando estos especiales casos con perspectiva de género (cfme.: prólogo del Protocolo de trabajo en talleres sobre violencia doméstica elaborado por la Oficina de la Mujer de la C.S.J.N.+, la Dra. Elena I. Highton de Nolasco), contribuyendo así a la transformación de la sociedad para hacer realidad el ideal de igualdad y paridad entre hombre y mujeres, asegurando el derecho a la tutela judicial efectiva de las mujeres víctimas de violencia, lo que exige que los jueces como rectores del proceso dirijan y encaucen el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003).-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que “En consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y con la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, los actos de violencia de género contra las mujeres deben ser investigados en forma conjunta a fin de cumplir, con determinación y eficacia, el deber del Estado de investigar, sancionar, reparar y prevenir tales hechos así como a fin de procurar un adecuado acceso a la justicia por parte de las víctimas”- CSJN, Fallos: 339:652, Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.-

En definitiva, “Sin un enfoque de género, las citas de normas y precedentes referidos a violencia y discriminación contra las mujeres se transforman en clichés vacíos que no representan avances suficientes para promover el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia ni discriminación” (Hopp, Cecilia Marcela. “Buena madre”, “buena esposa”, “buena mujer”: abstracciones y estereotipos en la imputación penal. Publicado en “Género y Justicia penal”. Compiladora Julieta Di Corleto, Ediciones Didot, año 2019, Pág 43) y este aspecto deberá ser tenido especialmente en cuenta al juzgar de manera definitiva los

numerosos episodios de la controversia familiar ventilada en este y otros expedientes."

b- Algunos meses antes, el **25/07/2022** el Dr. CARBALLO, juez de garantías que intervino en este mismo proceso, dictó el auto de remisión de la causa a juicio y en esa instancia sobreseyó a Dolores ETCHEVEHERE por el delito de desobediencia judicial que se le había intimado por haberse resistido a ser desalojada del predio rural "Casa Nueva" en fecha 29/10/2020, fundando tal resolución en un contexto de violencia de género del cual fue víctima. Entre sus consideraciones, puede leerse cuanto sigue:

"f.5. Que la denuncia de usurpación la habría realizado la Presidenta de "Las Margaritas S.A.", y no los hermanos de la Sra. Dolores Etchevehere, y esto es importante decirlo porque no es una denuncia de Usurpación de los hermanos de Dolores Etchevehere contra ella sino de "Las Margaritas S.A. contra ella y su abogado el Dr. Taboada. No obstante esto, lo cierto que en los hechos que acontecieron, los hermanos de la imputada habrían puesto doble cadena y llave en el candado de la tranquera de ingreso, aparentemente para impedir la salida de la Sra. Dolores Etchevehere, su abogado y el grupo de personas que la habría acompañado y que se habrían constituido del lado de afuera de la tranquera del predio identificado como "Casa Nueva", convocando a una concentración de ruralistas en ese lugar, pese a que el 23/10/2020 se dispuso una medida judicial de no acercamiento, habiendo supuestamente desafiado a la autoridad expresando que no se iban a retirar del lugar y que querían conocer quien sería el que los iba a sacar de ese lugar, no formalizándose frente a este supuesto hecho - desde la Fiscalía- ninguna acción penal o acusación ante esta supuesta desobediencia judicial, ni habiendo tampoco detenciones, cuestión que sí sucedió con la Sra. Dolores Etchevehere y que consta en la presente causa. En suma, a todas estas cuestiones analizadas, se puede advertir que al menos que en el supuesto hecho con relevancia penal válido de usurpación, ha existido y que las personas a las que se las ha imputado habrían participado en el mismo, resultando congruente ese hecho con la calificación legal asignada, con lo cual no resulta atípico como sostiene y pretende que se declare la defensa, adelantando desde ya que no haré lugar al sobreseimiento con fundamento en las razones ya expuestas.

f.6. Que en base a lo dicho anteriormente, cabe continuar con el análisis de si el hecho de la presunta usurpación fue investigado con una perspectiva de género o no, frente a lo cual considero que el ingreso de la Sra. Dolores Etchevehere, más allá de si le asistió o no derecho, y si constituye o no usurpación, se presentó en un contexto, en una escena en donde los hermanos de la Sra. Dolores Etchevehere junto a los ruralistas que habrían convocado habrían tenido la intención -con su convocatoria a ruralistas y su amplia

superioridad numérica- de demostrar lo que conformaría en términos de violencia de género y se conoce como una “relación de poder” frente a su hermana que se encontraba junto a un grupo reducido –en comparación- que se encontraba dentro del predio, entendiéndose que de este modo se da lo que se considera violencia de género, definiéndose por la doctrina, como la “...restricción arbitraria y sin justificación, en el goce de los derechos de la mujer” (Medina Graciela, “Protección Integral a las Mujeres”, Ley 26.485 comentada, pág.56, Ed. Rubinzal Culzoni) ejerciendo sus hermanos contra la Sra. Dolores Etchevehere, “violencia de género” al imponerse en la tranquera del predio, ejerciendo al menos “violencia psíquica”, mediante la sola presencia y las supuestas manifestaciones en los medios que “no iban a permitir que permanezcan en el predio Casa Nueva, la Sra. Dolores Etchevehere, el Sr. Taboada y el grupo de personas que la acompañaban, omitiendo así junto a los otros ruralistas que los acompañaban –y que se encontraban sobre el ingreso al predio en cuestión y no en la intersección de la ruta provincial 48 y la ruta nacional 12 (pto. I, apartado 2 de la resolución), que era la distancia que había ordenado el Juez Subrogante, Dr. Raúl D. Flores, el día 23.10.2021, en el marco de la causa: “Etchevehere Dolores s/su denuncia, extorsión en contexto de violencia de género”, Legajo s/n° y Legajo I.P.P N°1932-O. Frente a esta situación de desobediencia, según lo manifestado por la Defensa y no contradicho por la Fiscalía, no habrían sido imputados por “desobediencia judicial”, pese a que habrían incumplido la orden judicial, lo que demostraría –en ese contexto de violencia de género- una situación de “desigualdad de trato procesal en la acusación” desde la Fiscalía actuante, e inclusive -a nivel comparativo- frente a una desobediencia judicial que al menos en apariencia sería más grave, dándose así por ende una falta de perspectiva de género al imputar, detener e investigar la supuesta desobediencia judicial de la Sra. Dolores Etchevehere, producida al momento que se la quiso notificar y hacer firmar la notificación de la resolución dictada por la Dra. Castagno.

f.7. Que no se puede saber con exactitud qué pasó, ni la razón por la cual la Sra. Dolores Etchevehere supuestamente se habría rehusado a ello y manifestado verbalmente que no se iba a retirar del lugar, siendo que aparentemente después de esta situación -de supuestamente rehusarse a firmar porque no se le explicaba la desigualdad de trato frente a la resolución dictada por el Dr. Flores, sin ningún tipo de resistencia física y en forma pacífica, pero en carácter de detenida, habría sido trasladada a la Fiscalía de La Paz, alrededor de las 22 hs. del día 29.10.2021. Esta falta de claridad, que no se logrará despejar en el debate ni se podrá aportar mayores pruebas para esclarecerlo, forma parte de la duda insuperable a la que haré mención más adelante.

f.8. Que en relación a la desobediencia judicial imputada, solo a la Sra. Dolores Etchevehere, cabe tomar en cuenta lo expresado en el análisis del hecho

principal imputado de aparente usurpación. Y en este sentido, desde una perspectiva de género, resulta desigual, discriminatorio, inequitativo e injusto, sostener la imputación de una desobediencia judicial por una mera reticencia de la imputada de retirarse del predio de titularidad de una sociedad comercial, cuyo directorio se encuentra mayoritariamente integrado por su madre y sus hermanos, cuando a la luz de lo sucedido durante la supuesta usurpación, la situación que habrían producido sus hermanos al no mantener la distancia que se le había ordenado, lejos del predio, en el contexto de los hechos, no habría sido pasible de ninguna imputación ni detención, dejándoselos en la tranquera del predio, en donde ejercían presión sobre su hermana y a riesgo que se hubieren podido desatar conflictos de otra naturaleza que peligrara la integridad física de las personas que allí se encontraban.

f.9. Que el hecho de no obedecer en un primer momento a la orden judicial de la Vocal de Cámara que le quiso notificar la policía -en apariencia exigiéndole que firme la notificación, a lo cual se negó la imputada porque no se le explicó porque no se había cumplido la resolución de Flores y si se le daba cumplimiento a la dictada por la Dra. Castagno- e inclusive considerando que supuestamente se habría negado inclusive a retirarse enseguida, se debe analizar con perspectiva de género, teniendo en cuenta que la Sra. Dolores Etchevehere, en su carácter de mujer frente a sus hermanos varones, que se habrían presentado en el predio Casa Nueva convocando a ruralistas contra ella y contra quienes la acompañaban, lo habrían realizado desde una posición de fuerza y/o poder, desde un "patrón sociocultural de superioridad", con un enfoque machista, lo cual constituye claramente un contexto de violencia de género, y al rehusarse a cumplir la orden del Juez, habrían seguido ejerciendo presión para hacerle sentir a la Sra. Dolores Etchevehere su superioridad de poder, y en ese marco, de violencia de género ejercido y vivido durante días-, se configura también la "discriminación" hacia ella, definiéndose por tal -desde lo expresado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer-, que dice: "toda distinción, exclusión, o restricción, basado en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la desigualdad del hombre y la mujer, de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social cultural y civil o en cualquier otra esfera"; y esto, más allá de su razón en la elección del modo en que consideró que debería defender sus derechos, equivocada o no, no se tuvo que haber permitido que eso sucediera, y sus hermanos tendrían que haber obedecido las medidas judiciales que se le habían impuesto, y esperar a que la Jueza, en la audiencia del Recurso de Apelación, resuelva. Sumado a esto, se la trató también a la Sra. Dolores Etchevehere -aparte de la falta de perspectiva de

género en la investigación-, desigualmente desde la Fiscalía, al imputarla y detenerla solo a ella y no hacer lo mismo con sus hermanos que habrían incumplido una orden judicial; o podría el Fiscal, haber no imputado a ella ni a sus hermanos por desobediencia judicial, pero lo que no podría haber hecho nunca es imputarla sólo a ella desde ese contexto. Esto también genera en esta judicatura un "estado de duda insuperable" al momento de la notificación, que no podrá aclararse, sumándose a lo ya expuesto, que no se podrá determinar si la reticencia a retirarse del lugar de la Sra. Dolores Etchevehere obedeció a que la habrían querido obligar a firmar la notificación sin explicarle nada y ahí ella manifestó que no se iba a retirar o simplemente no quería obedecer la orden. (...)

f.12. Que por estas razones, considerando que se configuró violencia de género de los hermanos de la Sra. Dolores Etchevehere hacia ella y la falta de perspectiva de género y la desigualdad de trato procesal por parte de la Fiscalía, quien mantuvo la situación fáctica de presión que habrían pretendido ejercer sus hermanos y los ruralistas que los acompañaban, cometiendo con su incumplimiento -durante 5 días-, reiteradas desobediencias judiciales, que no fueron motivo de análisis, ni imputación ni detención, con lo cual se habría legitimado la posición de poder que habrían pretendido sus hermanos frente a la ella, por ser mujer. Por todo esto, concluyo, que debe sobreseerse -por el delito de desobediencia judicial a la Sra. Dolores Etchevehere, cuyo hecho se le ha imputado solo a ella, y en ese sentido me expediré, por los fundamentos aquí vertidos.-

c- Por su parte, el Juez Civil y Comercial N° 7 de esta ciudad Martín FURMAN -quien tiene a su cargo el trámite del juicio sucesorio- también tuvo oportunidad de expedirse sobre esta cuestión, al momento de adoptar dos decisiones relacionadas con la pretensión de Dolores ETCHEVEHERE orientada a que se le atribuyera una de las viviendas que el grupo familiar posee en calle Los Vascos de esta ciudad. Veamos.

Estas resoluciones se adoptaron el marco de la causa caratulada "PROCESO RESERVADO S-MEDIDA CAUTELAR S/ INCIDENTES (CIVIL) (Atribución de vivienda)" (N° 21145).

La primera de ella es de fecha **23/12/2020** (exactamente dos meses después de que el Juez FLORES dictara las medidas de protección a favor de Dolores ETCHEVEHERE a causa del hostigamiento y la intimidación que recibía desde el exterior del predio "Casa Nueva") y en su parte pertinente reza:

(...) Superada entonces -y pese a lo dicho- la admisibilidad de la petición, examinada la mencionada cláusula en el marco de la -ahora denunciada violencia de género y, con la debida perspectiva de género, considero que existe la suficiente verosimilitud en el derecho para hacer lugar a la pretensión cautelar de atribución de una vivienda para la peticionaria en la ciudad de Paraná.

La Ley Nacional de Protección de las Mujeres N° 26.485, en adelante, Lnpm, dispone: ARTICULO 4º Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. (Artículo sustituido por art. 2º de la Ley N° 27.533 B.O. 20/12/2019).

Por lo expuesto,

RESUELVO:

1) Atribuir con carácter cautelar, a Dolores ETCHEVEHERE, para vivienda de ella y de sus hijos, el inmueble ubicado en calle Los Vascos N° 839 de la ciudad de Paraná, Plano de Mensura N° 44094, Matrícula N° 137406 hasta tanto se dicte sentencia en el juicio principal que iniciará.

2) Líbrar Mandamiento de Constatación del inmueble sito en calle LOS VASCOS N° 839 de la ciudad de Paraná, el que se diligenciará por intermedio de la Oficina Central de Notificaciones y Mandamientos del STJ, con habilitación de días y de horas. El o la oficial de justicia a cargo, deberá constatar el estado de ocupación del inmueble y para el caso que se encuentre deshabitado, se pondrá en inmediata posesión a Dolores ETCHEVEHERE.

3) Cuando la peticionaria se encuentre en posesión de la vivienda, líbrese oficio a la Jefatura Departamental de Policía, a fin de que por intermedio de la comisaría que por jurisdicción corresponda (o de cualquier otra dependencia policial que el Sr. Jefe designe), se le brinde custodia permanente en la puerta del domicilio. La actora deberá informar al Juzgado si habitará el inmueble de manera permanente. De no ser así, indicará días y/u horarios, a fin de informar ello a la autoridad policial." (...)

Entonces, hasta aquí tenemos una decisión judicial adoptada con perspectiva de género, fundada en la verificación de la verosimilitud de los extremos invocados por la peticionante (violencia de género), que ordenó la atribución de la vivienda en cuestión, previa constatación, y asignó una custodia policial permanente para proteger a Dolores ETCHEVEHERE.-

Ahora bien, la situación cambió el día **26/12/2020**, porque -como se verá a continuación- el mismo magistrado dejó sin efecto la anterior resolución por los fundamentos que siguen.-

"...CONSIDERANDO que:

1. El día de hoy se llevó a cabo la diligencia que dispuse en fecha 23/12/2020; un mandamiento de constatación y toma de posesión, por parte de Dolores ETCHEVEHERE, de un inmueble ubicado en calle Los Vascos N° 839.

Era condición que el inmueble se hallase desocupado y lo resolví fundado en la ley 26485 y en lo que ella había relatado: que tenía necesidad imperiosa de contar con una vivienda que ocupar junto con sus hijos, en esta ciudad. Fue ella la que, en el escrito ampliatorio ofreció ese inmueble.

2. El oficial de justicia corroboró que el inmueble estaba "en aparente estado de desocupación" (cfr. acta confeccionada el día de hoy). Acto seguido **procedió a otorgar la posesión a Dolores ETCHEVEHERE.**

3. Se comunicó con la secretaria del Juzgado, y posteriormente conmigo, el Jefe de la Comisaría N° 17 (que asistió al acto de diligencia) y nos informó lo siguiente: "le informo para su conocimiento que dentro de la vivienda Osinalde 839 se encuentra la Sra Dolores Etchevere, de la cual le hago saber que desde la calle tienen una única entrada, y en el interior no hay delimitación perimetral con el resto de las viviendas" (transcripción textual del mensaje de texto recibido por la secretaria).

Cabe aclarar que "el resto de las viviendas" es habitado por sus coherederos y sus respectivos grupos familiares (a quienes Dolores les endilga la comisión de los actos de violencia de género). Asimismo, **el policía le dijo a la secretaria que corría riesgo la integridad de la señora Dolores.**

4. Ante esto, de inmediato, oficié a la Comisaría y dije que atento a lo informado telefónicamente por el oficial a cargo y **a efectos de no poner en riesgo la integridad de Dolores ETCHEVEHERE, dejaba sin efecto lo ordenado.**

5. Seguidamente, el abogado de Dolores se contactó con la secretaria y le hizo saber que ella no quería retirarse de la vivienda y solicitó que me constituyese personalmente en el lugar. Así lo hice, aproximadamente a la hora 15. También se hizo presente la señora secretaria.

6. Ya en el lugar constaté que, efectivamente, no existe ninguna limitación para circular entre los distintos inmuebles linderos a través de un patio común a todos ellos y que existe una pileta en uso por los denunciados y sus respectivos grupos familiares. Asimismo, que la casa de la que Dolores tomó posesión no cuenta con electricidad y se encuentra en regular estado de conservación.

También corroboramos que **los coherederos y sus grupos familiares asumieron una actitud de exaltación y verbosidad, tanto hacia Dolores, como hacia mí, la policía, los letrados de la señora ETCHEVEHERE, escalando en las manifestaciones violentas a medida que transcurría el acto.**

7. Reunidos en la casa, quien suscribe y los letrados de cada una de las

partes (me refiero a los Dres. Lisandro MOBILIA, Patricio COZZI, Daniela VERÓN, patrocinantes de Dolores y Guillermo BRUNNER y Rubén PAGLIOTTO, por el resto de los herederos), la Secretaria del Juzgado y efectivos policiales, surgieron distintas propuestas; entre ellas, los coherederos ofrecieron pagar el alquiler de una vivienda, en esta ciudad, a elección de Dolores, hasta tanto se mantenga la medida. Esto no fue aceptado por Dolores, quien alegó que vuelve a ser victimizada al contar con una medida judicial que se incumple por los violentos.

Sus letrados propusieron hacer un cerco (de madera u otro material que permita una rápida construcción), a fin de separar las viviendas.

Durante esta reunión tomó la palabra el jefe de la Comisaría y expresó que no se cuenta con la cantidad de efectivos necesarios para evitar todo tipo de contacto entre Dolores y el resto de las personas que habitan las viviendas lindantes, durante las 24 horas.

8. Que es mi deber, como ya lo expresé, resguardar la integridad (física, psíquica, emocional) de la mujer que ha denunciado situaciones de violencia por su género y la medida, **tal como la dispuso el día 23/12/2020 no condice con dicha obligación, según las características del inmueble que he referido más arriba y el grado de conflictividad constatados hoy.** Además, el estado del inmueble (en el que permanecí aproximadamente tres horas, con una temperatura que superó los 32 grados centígrados, sin electricidad) -tal como está- lo torna inadecuado para que una mujer y su hija adolescente lo habiten permanentemente.

9. **El cercamiento propuesto, a mi entender, es insuficiente para garantizar que Dolores no vuelva a ser víctima de actos violentos y, en cuestiones de vulnerabilidad por género, la prevención debe ser primordial** (antes que una eventual denuncia por incumplimiento de la orden judicial, que, de por sí, ya sería tardía).

Subrayo que no dejo sin efecto la orden de atribución de la vivienda por la violencia verbal que hoy he padecido, sino mirando pura y exclusivamente el principio rector en la materia: la protección de la mujer violentada. Todo lo anterior no son más que situaciones que trae aparejada mi función de juez; ahora estoy mirando y pensando en la víctima.

10. En el entendimiento de que lo mejor para Dolores (para la preservación de su integridad y salud) es que no permanezca en la vivienda de calle Los Vascos N° 839, ordenaré a los demás herederos que cumplan con su propuesta: pagar el alquiler de una vivienda que Dolores seleccione, dentro de esta ciudad, mientras dure la medida cautelar. Deberán, a tal fin, ofrecer las garantías, pagos, depósitos que sean necesarios para que ella pueda mudarse a la brevedad con sus hijos.

11. Por otra parte, **por el delito de incumplimiento de la orden judicial**

del 23/12/2020, corresponde que le dé intervención al fiscal en turno. Considero que no es óbice el hecho de que estoy dejando sin efecto la medida, puesto que uno de los motivos de esto ha sido, justamente, dicho incumplimiento, que no ha quedado purgado, porque -insisto- hoy debo proteger a la denunciante.

Por todo lo expuesto y las normas de los arts. 31, 158, ss. y cs. del CPCCER, 3 del CCyC, 26485, ss. y cs.

RESUELVO:

I. Reiterar que dejo sin efecto la medida de atribución de la vivienda de calle Los Vascos N° 839, como lo dispuse por oficio del día de hoy (dirigido a la Cría N° 17).

II. Ordenar que Juan Diego ETCHEVEHERE, Luis Miguel ETCHEVEHERE, Arturo Sebastián ETCHEVEHERE y Leonor BARBERO MARCIAL, solidariamente, abonen la suma de PESOS CUARENTA y CINCO MIL (\$45.000,00) a favor de Dolores ETCHEVEHERE, a efectos de que ella pueda alquilar la vivienda que seleccione, dentro de esta ciudad y mientras dure la medida cautelar. Pagarán ese monto mensualmente. La primera vez dentro de los tres días de notificados de la presente. La notificación se producirá en la persona de su letrado Guillermo BRUNNER, mediante whatsapp, para agilizar el acto.

Depositarán el dinero en la cuenta bancaria que para este expediente ordenará abrir la señora secretaria el próximo lunes 28/12/2020. Cuando se cuente con número y CBU se les informará, al efecto.

Deberán, asimismo, ofrecer las garantías, depósitos, etc. que sean necesarios para que ella pueda mudarse a la brevedad con sus hijos.

III. Remítanse testimonios al Agente Fiscal en turno, por el delito de desobediencia a la orden judicial...." (el resaltado es mío).-

En resumidas cuentas, el mismo magistrado que tres días antes había atribuido la vivienda a Dolores ETCHEVEHERE dejó sin efecto la medida, con motivo -"entre otros"- en la violencia ejercida por los restantes coherederos tanto hacia la víctima como hacia los funcionarios policiales y judiciales allí presentes, a tal punto que el propio Juez decide remitir testimonios a la fiscalía en turno por el delito de desobediencia judicial. Respecto de esto último, desconozco cuál es el trámite que el Ministerio Público Fiscal le imprimió a una denuncia de estas características, pero, no me consta que los agresores hayan sido formalmente imputados o, aunque sea, convocados para designar un abogado defensor.-

d- Finalmente, tenemos la **Resolución del Juez Federal Daniel Eduardo RAFECAS** en la causa CFP N° 8173/2020 Secretaría N° 5 del Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal N° 3 **del 12/03/2021**, compartiendo consideraciones del Fiscal DELGADO, donde luego de dar mérito a la denuncia y analizar las pruebas producidas dispone remitir la causa al Juzgado Federal de

Paraná por incompetencia.-

Transcribiré sus partes pertinentes:

"I) Génesis de las presentes actuaciones

Se inician las presentes actuaciones a raíz de la denuncia formulada por Dolores Etchevehere contra Luis Miguel, Arturo Sebastián, Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial por la comisión del delito de extorsión (artículo 168 del Código Penal de la Nación), producto de la violación a los derechos protegidos y garantizados en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, habiéndose ejercido, en su contra, violencia psicológica y económica (artículo 5 inciso 2 y 4 de dicho texto).

Expresó la denunciante, sus hermanos y su madre urdieron diversas maniobras defraudatorias y extorsivas con el objetivo de despojarla de sus derechos hereditarios, mediante la utilización de actos intimidatorios, abuso de poder, tráfico de influencias y violencia psicológica y económica. En particular señaló a Luis Miguel Etchevehere porque, según ella, tales hechos los cometió abusando del cargo que por entonces desempeñó como Ministro de Agroindustria de la Nación, "aprovechando los beneficios, ventajas y capacidad de influenciar sobre personas, organismos y medios de comunicación que ese lugar privilegiado de poder y dinero le otorgaba y aún le otorgan". Agregó que desde que falleció su padre no recibió dinero ni bienes y describió la maniobra como un ahogo financiero en su contra. Afirmó que, encontrándose en estado de indefensión, doblegaron su voluntad para que, el 31 de agosto de 2018, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, firmara un acuerdo privado de adjudicación y partición de la herencia, el cual calificó como "absurdo, leonino, abusivo". El acuerdo fue cuestionado en el expediente n° 15407/2009 caratulado "Etchevehere, Luis Félix s/sucesión ab intestato".

Finalmente definió la situación como "la existencia de una maquinaria mafiosa, que opera extorsionando y ejerciendo toda clase de violencia, en mi caso, económica, psicológica principalmente, que está encabezada por mi hermano Luis Miguel Etchevehere quien se valió del poder político y económico e influencias durante su estadía permanente en Buenos Aires desde el año 2017, periodo en que yo también residía en la misma ciudad, y utilizando para ello las facultades jurídicas del cargo de Presidente de la Sociedad Rural y de Ministro de Agroindustria de la Nación, y con la intención en mi caso, de desapoderarme de todos mis bienes producto del acervo hereditario de mi padre por medio de la extorsión aprovechándose de mi condición de mujer sola.". Además, la denunciante indicó que, para arribar a tal fin, Luis Miguel Etchevehere utilizó recursos estatales, desde infraestructura (oficinas de ministerios, teléfonos) hasta beneficios (asignación de recursos públicos, influencias para los ascensos de jueces y fiscales en el poder judicial, negocios con el ejecutivo local, entre otros).

II) De la prueba producida durante el trámite de las presentes actuaciones

II a.) Declaración testimonial de Dolores Etchevehere

Recibida la denuncia en esta sede, se dispuso la delegación de la instrucción en cabeza del Sr. Agente Fiscal Dr. Federico Delgado, a cargo de la Fiscalía Federal n° 6, quien en ese marco dispuso la realización de diversas medidas de prueba.

En primer lugar, se recibió declaración testimonial a la denunciante, a través de la plataforma Zoom, ocasión en la que Dolores Etchevehere indicó que, luego del fallecimiento de Luis Félix Etchevehere y una vez iniciado el proceso sucesorio, tomó conocimiento de la falsificación de la firma del nombrado - circunstancia que aconteció días previos a su fallecimiento- en un acta de directorio que refiere que aquél "le cede la administración a Leonor Barbero Marcial de todos los campos".

La denunciante hizo hincapié en la fecha en que habría sido firmado ese documento, sobre todo porque tanto ella como su padre se encontraban en Buenos Aires -el documento señalado se celebró en Paraná- y, por último, que aquél permaneció en terapia intensiva e intubado hasta su deceso. Agregó que luego del fallecimiento de su padre encontró un documento a través del cual sus hermanos y su madre, solicitaron al juez la administración de la sucesión. El mismo llevaba inserta su firma falsificada. Concluyó que aquellos "tomaron de facto la administración de la sucesión". Por otra parte, afirmó que sufre una estrategia sostenida sistemáticamente desde entonces por sus hermanos y su madre, Leonor Barbero Marcial, para despojarla de sus derechos hereditarios mediante una serie de actos que convergen, básicamente, en su asfixia económica. Expresó que en ciertos momentos no tuvo dinero para darle de comer a sus hijos ni para realizarse una intervención médica en el año 2010. Explicó que nunca estuvo bancarizada, que nunca recibió dividendos de las empresas familiares ni venta de los campos.

Luego de prestar declaración, la denunciante aportó a la Fiscalía una serie de documentos para probar el maltrato y la violencia sistemática sufridos, y asimismo los intentos de disuadirla de realizar peticiones que ella creía convenientes. Entre los mismos se destaca una nota que le entregó su ex marido, Salvador Guiraldes, y fue escrita por su madre Barbero Marcial, que refiere "En momentos como el presente, se infiere la racionalidad. Habría que comenzar por el diálogo sin intermediaciones. Es lógico y sano. Yo siempre estoy dispuesta. Las agresiones son sinónimo de inseguridad y mueren en sí mismas. Llegar a un acuerdo, es lo permanente. Eres lo suficientemente inteligente como para pensarlo"; a lo que se suman capturas de mensajes de conversaciones mantenidas entre Dolores Etchevehere y Salvador Guiraldes, y mensajes de

Dolores Etchevehere a su abogado Santiago Yofre respecto de amenazas que recibió por parte de su madre -estos últimos extraídos del teléfono celular de la denunciante por personal del Departamento de Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, en el marco de una pericial dispuesta por la Fiscalía- (v. fs. 6/7 del dictamen fiscal del 4 de marzo ppdo.).

Asimismo, la denunciante expresó en autos que acudió a las oficinas del Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, en virtud de todas las irregularidades que estaban sucediendo en torno a la sucesión de su padre y a los negocios vinculados con sus hermanos. Dijo que aquel estaba al tanto de las instancias previas al acuerdo marco y que tenía una relación personal e íntima con sus hermanos y también con sus abogados, Julio Federik y Leopoldo Lambrusquini. Expresó que en dicho encuentro, García tenía un expediente que estaba por debajo de su palma derecha y lo golpeaba a la par que le decía "tranquila chiquita, tranquila"; ese expediente contenía muchas de las pruebas que dan cuenta del accionar desplegado por los hermanos Etchevehere y Leonor Barbero Marcial con posterioridad al fallecimiento de Luis Félix Etchevehere, y que el hecho que la causa no avanzara era un claro favorecimiento por parte de la justicia hacia (Luis Miguel) Etchevehere en virtud de su cargo de ministro.

En relación al acuerdo marco, dijo que le manifestó a su entonces abogado, Santiago Yofre, que de ninguna manera iba a refrendar ese documento, pues no sólo ese acuerdo era producto de una extorsión, sino que además ella no había recibido nada de lo allí manifestado. Ante la posibilidad de que aquella brindara declaración testimonial y contara su verdad de los hechos, Yofre presentó por decisión propia ante el juez de la causa un escrito solicitando se suspendiera la audiencia, acompañando un certificado médico firmado por Martín Solanet, profesional al que ella nunca conoció. Agregó que, en la escribanía Zuffiaurre en Paraná, uno de los abogados que se encontraban con Santiago Yofre y Mario Iglesias, le refirió "la primera firma duele, después te acostumbras".

También, agregó que recibió un llamado de Pedro Báez, entonces Ministro de Cultura y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, quien la invitó a tomar un café en un bar ubicado en el interior del supermercado Jumbo en la avenida Int. Bullrich y avenida Cerviño de esta ciudad. Una vez allí, Dolores Etchevehere se encontró con Báez, pero además con Julio César Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de Entre Ríos. Este último, entre otras cosas, le hizo saber que conocía a su hermano de chico dado que había ido al colegio con él. Según la denunciante, el fiscal viajó de Entre Ríos a Buenos Aires para desactivar la denuncia de la PROCELAC.

Finalmente, la denunciante y su abogado el Dr. Facundo Taboada, aportaron un escrito en el cual refirió "... como siempre señalo e insisto, esta megaestafa

debe ser analizada en su totalidad no solo por lo que señalan puntualmente los Etchevehere corruptos. El papel que los demandados plantan para zafar es el que induce a pensar que yo cedí mis acciones de Las Margaritas SA a Mirus. Falso. Ocurrió lo siguiente: el 6 de noviembre de 2018 (...) es decir, dos meses después de haber firmado el <<acuerdo marco>> (como lo señala el escribano José Zufiaurre en un chat que hizo público en los últimos días mientras yo estaba en Casa Nueva) Fernando Martínez, uno de los abogados <<que me representaba...>> me llama para informarme sobre la existencia de un embargo trabado por mi anterior abogado Enrique Vicente del Carril.

Este último, del Carril, renuncia luego de no haber conseguido nada a partir de su actuación en este conflicto. Renuncia y me embarga (...) El estaba muy nervioso. Me dice, entre otras cosas, que así -con el embargo de Del Carril atravesado- no se puede concretar el <<acuerdo marco>> celebrado el 31 de agosto de 2018. También Yofre me dice que si o si, de cualquier forma, hay que concretar el <<acuerdo marco>> porque yo le debo a él plata y los intereses corren (...) Ya parados sobre la fecha 7 de noviembre de 2018 (...) Yofre me informa que el escribano José Zufiaurre <<Tiene fecha 16>>, haciendo referencia al 16 de octubre de 2018, es decir fecha del papel donde me imponen desistir de mis acciones: Una fecha antedatada en el libro de actas notariales de Zufiaurre. ¿Para qué? Para antedatar la imposición de Yofre de ceder las acciones antes de la fecha del embargo. Además, esos abogados me presionaban diciéndome que los intereses de la plata que me había dado Yofre corrían. Esto, ya de por sí inconcebible, significaba que me corrían intereses no sólo de lo que me dio a mí sino también respecto de lo que ellos cobraron por adelantado por honorarios y por todos los gastos que se generaban durante el proceso. Es decir, una estafa, y otro tanto de arena en el desierto que los aquí identificados crearon, que es el proceso de desgaste emocional y asfixiamiento económico..."

Asimismo, expresó que el 16 de octubre de 2018 tanto ella como Santiago Yofre -entonces su abogado- se encontraban en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en Paraná donde se llevó a cabo la firma del documento, aportando capturas de mensajes que lo demuestran. Por tal razón, la Fiscalía solicitó a la empresa de telefonía celular Claro SA, el listado de llamadas entrantes y salientes correspondientes al día 16 de octubre de 2018, del cual se determinó que a las 08.56 horas se encontraba en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

IIb. Expedientes judiciales relacionados con el objeto procesal de autos

La Fiscalía asimismo procedió a certificar tanto la causa principal de la sucesión de Luis Félix Etchevehere, como así también aquellos expedientes judiciales que se suscitaron producto de los conflictos familiares que entre la

denunciante y su grupo familiar devinieron con el correr de los años.

Así, obra en autos la certificación del expediente n° **15407/2009** caratulado "**Etchevehere, Luis Félix s/sucesión ab intestato**" que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial n° 7 de la ciudad de Paraná, Prov. de Entre Ríos, en el que consta que a la fecha, la sucesión de Luis Félix Etchevehere aún se encuentra indivisa. Se encuentran agregados, entre la documentación remitida por ese Juzgado a la Fiscalía, los acuerdos privado y global de fecha 31 de agosto de 2018 que, entre los integrantes de la familia Etchevehere, los cuales fueron firmados en aquella provincia. Asimismo, dicho magistrado informó que "no se han librado fondos en favor de ninguno de los herederos declarados (...)" y consta que Dolores Etchevehere no integra el grupo de personas que administra los bienes sucesorios que aún no se distribuyeron.

También se certificó la causa n° **55212/2013** caratulada "**Etchevehere, Luis Miguel y otros s/estafa**" iniciada en el mes de diciembre de 2013 y actualmente se en trámite ante el Juzgado de Transición n° 1 de Paraná a cargo del Dr. Carlos Ríos. Allí se investigan a los hermanos Etchevehere por el delito de estafa, en relación a créditos otorgados por el Banco Itaú a la firma Las Margaritas SA por U\$S 200.000 y U\$S 50.000, respectivamente, a tasa subsidiada y destinados a actividades productivas, dinero que se habría distribuido entre los socios de la firma de mención, Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, sin destinarlos al objetivo para el que fue tomado.

Asimismo, se certificaron otras causas mencionadas por la denunciante. Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2, Secretaría n° 3, tramitó la causa n° **CFP 7497/2014** caratulada "**Mba Lazard Sociedad de Bolsa SA y otros s/infracción artículo 303 y encubrimiento**" por el delito de lavado de activos, la cual se archivó con fecha 5 de junio de 2019; en tanto, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 12, Secretaría n° 23, tramitó la causa n° **CFP 17334/2016** caratulada "**Melconian, Carlos Alberto y otros s/negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta**" iniciada por denuncia de Alejandro Sánchez Kalbermatten, a través de la cual se señaló una resolución del Banco Central de la República Argentina que benefició económicamente a la empresa Las Margaritas SA, propiedad de Etchevehere. Dicha causa fue archivada el 15 de noviembre de 2017, momento en el que quedaron firmes los sobreseimientos de Carlos Melconian, Luis Etchevehere, Juan Etchevehere, Arturo Etchevehere y Leonor Barbero.

Consta en autos la certificación de la causa n° **8150/2015** en trámite ante el Juzgado Federal 1 de Paraná, Secretaría Penal n° 1, iniciada a raíz de la Investigación Preliminar n° 669 de la PROCELAC como consecuencia de la denuncia penal formulada por Dolores Etchevehere. Expresó que, en su carácter

de socia minoritaria de Las Margaritas SA y Entre Ríos SA, habría tomado conocimiento de la existencia de actividades delictivas llevadas a cabo por Leonor Barbero Marcial, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, las que podrían encuadrarse en alguno de los delitos previstos por la ley 24.769 y/o algunos de los supuestos previstos por el régimen penal cambiario. Dichas actuaciones a la fecha se encuentran en pleno trámite, encontrándose delegada la instrucción en la Fiscalía del Dr. Mario Osvaldo Silva.

Fueron requeridas a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la CSJN, copias de la denuncia penal presentada con fecha 21 de junio de 2019 por Dolores Etchevehere, por los delitos de amenazas y extorsión por parte de sus hermanos y su madre, y contra Salvador Guiraldes, su ex marido y padre de sus hijos, por violencia psicológica, insultos, descalificaciones, sentimientos de impunidad, desentendimiento de sus responsabilidades parentales, posición machista y asimetría y maltrato físico, que se sucederían alrededor de una vez al mes. Además, puso en conocimiento de la recepción de una serie de mensajes intimidatorios recibidos, hechos denunciados en la Comisaría 17° de la Policía de la Ciudad.

En dicha oportunidad, la OVD calificó su situación como de "alto riesgo, al momento de la entrevista en relación a la situación en que se encuentra inmersa la dicente".

A raíz de ello, se iniciaron dos causas, la **n° 25256/2019**, que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial n° 9 de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de los hechos denunciados en relación a Salvador Guiraldes; y la causa n° **44143/2019** caratulada "**Etchevehere, Luis Miguel y otros s/denuncia por violencia familiar**" del registro del Juzgado Criminal Correccional no 57, Secretaría no 61, cuyo titular dispuso una prohibición de acercamiento a Dolores Etchevehere por parte de los denunciados y la entrega de un botón antipánico.

En éste último expediente prestó declaración testimonial a Dolores Etchevehere, con el acompañamiento de personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación. En la ocasión manifestó que, el 31 de agosto de 2018, la convocaron a la escribanía de José Zufiaurre en Paraná y que, previo a ello, el 22 de junio de ese año, se hizo presente ante la escribana Sandra V. Llampsky en esta ciudad, donde dejó asentado en un documento que su voluntad se encontraba viciada, afectada y condicionada a aceptar lo que sus hermanos y su madre le propusieran; que finalmente se concretó la reunión con sus hermanos y su madre, quienes, en ese contexto, le propusieron hacer un acuerdo extrajudicial consistente en adquirirle a un precio vil el componente de sus derechos hereditarios a cambio de que desista de continuar con el trámite de las causas penales, además de hacerse cargo de los pasivos, que en el contrato

además figuraba una cláusula de confidencialidad con una multa de 50 mil dólares si hablaba del asunto y que su abogado intentó convencerla de que firme; que un día después del acuerdo, vio en las noticias que el entonces Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, estaba libre de todos los conflictos familiares; que el acuerdo tenía fecha de vencimiento a 60 días para concretarse la escritura pública, hecho que no sucedió en tanto faltaba documentación en regla -puntualmente, los balances aprobados-; que recibió un audio de WhatsApp de parte de Segundo Salvador María Guiraldes, su ex marido y usuario de la línea 11-5717- 7936. quien manifestó que hablaba en nombre de Leonor Barbero y que "se podía quedar en el departamento -en referencia al que habita- si deja de denostarla tanto a ella como a sus otros hijos en público porque si no iban a tener un problema judicial con el departamento".

Declaró asimismo en la causa Salvador Guiraldes quien afirmó que "Leonor Barbero como sus hijos se complotaron en contra de Dolores por motivos económicos y que pretenden darle una parte devaluada de la herencia, que no se corresponde con la realidad del valor de esos bienes en el mercado"

La denunciante aportó una copia de la denuncia penal formulada en el Juzgado en lo Penal Ordinario n° 2 de Paraná, a cargo de María Paola Firpo, en el cual se resolvió sobreseer a Leonor Barbero Marcial y los hermanos Etchevehere, en la inteligencia que las manifestaciones vertidas a la denunciante no se adecuaban al tipo previsto en el segundo párrafo del art. 149 bis del C.P.

La Fiscalía también certificó la existencia del legajo **n°16614/2020** caratulado "**Etchevehere, Leonor s/denuncia**" en trámite ante la Unidad Fiscal de la Paz, provincia de Entre Ríos, iniciado luego de que Dolores Etchevehere, junto con integrantes y dirigentes de movimientos sociales, ingresara y ocupara el establecimiento denominado Casa Nueva. En dicha causa consta que la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, ordenó el desalojo pacífico de la estancia Casa Nueva en tanto, a su criterio, los ocupantes, que accionaron de manera inconsulta y clandestina, invadieron el terreno en cuestión. En la causa declararon varias personas en forma testimonial, cuyas actas pese al requerimiento de la Fiscalía, a la fecha no han sido remitidas.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción remitió a la fiscalía actuante, copias de las actuaciones iniciadas de oficio con el fin de analizar la situación de Luis Miguel Etchevehere, quien en el mes de noviembre de 2017 fue designado Ministro de Agroindustria de la Nación, y su derrotero como directivo de varias firmas y entidades privadas, luego de lo cual se le hizo saber, a título preventivo, que se encontraba impedido de ejercer funciones o actividades incompatibles con su cargo ministerial. Asimismo, al hacerse público que Etchevehere había percibido en el mes de diciembre de 2017, un bono de \$500.000.- por su cargo como presidente de la Sociedad Rural Argentina, la O.A. actuó nuevamente de

oficio y, luego de que en el mes de marzo de 2018 el entonces funcionario devolviera dicho dinero, se le hizo saber que tal percepción no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas de ética pública y que debía abstenerse de intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con la S.R.A. y obrar con el deber de prudencia. Finalmente, previo a archivar las actuaciones, el 15 de enero de 2018, se remitieron copias de lo actuado a la causa **n°20781/2017** que tramitó ante el Juzgado Federal n°5, Secretaría n°10, expediente en el cual el magistrado interviniente resolvió el sobreseimiento de Etchevehere.

IIc.) Informes elaborados por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación; y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración General de la Nación

La Fiscalía actuante solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación, con el fin de analizar el caso en cuestión

Las profesionales refirieron que "situar la violencia en razón del género en este contexto más específico permite comprender la reacción frente a la decisión de Dolores de no acatar el rol de pasividad y obediencia tradicionalmente asignado a las mujeres, y la hostilidad que provocó su decisión de hacer público un conflicto que, de no ser por ella, jamás habría trascendido la esfera privada". A la par, mencionaron que la elección de la denunciante de hacer públicos los hechos de violencia psicológica y económica ejercida por parte de su entramado familiar más cercano, "desenmascara el carácter ideológico de la división entre la esfera pública y privada, que suele pasar desapercibido".

Concluyeron que "a criterio de esta Unidad Fiscal la presente investigación atender especialmente los mandatos legales, tanto del orden nacional como internacional, que fueron desarrollados en materia de derechos de las mujeres.

Al haberse alegado manifestaciones de violencia por razones de género que están involucradas en las maniobras denunciadas, la actividad probatoria y procesal debe cumplir con los estándares de debida diligencia reforzada, asegurar la perspectiva de género en cada una de las decisiones que se adopten, ser llevada adelante con proactividad y oficiosidad y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante, tras once años de derrotero judicial. "

Asimismo, se requirió la elaboración de un informe a cargo de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas de la Procuración General de la Nación, de cuyas conclusiones puede extraerse que "Según ha podido describir, esta conducta por parte de los restantes herederos [los denunciados], se enmarca en una continuidad histórica de su familia en cuanto a qué funciones y roles se les asigna a la mujeres, a quienes se les anulan

las posibilidades de participar de la gestión del acervo familiar y se les confiscan sus derechos hereditarios para ser administrados por otros, que deciden por ellas, como ser el ejemplo de las tías abuelas de Dolores y la prima Teresa Sol. [...] En este contexto y conforme las expresiones vertidas por la entrevistada, no sería la primera mujer de la familia en atravesar una situación de discriminación económica en razón de género, pero si la primera en reaccionar ante estas situaciones, identificando por ello el pago de altos costes por reivindicar su individualidad en oposición a las etiquetas, los roles y los estereotipos de género"

Continúa las profesionales afirmando que "se identifica una situación de <<alarma permanente>> ante las amenazas de ser <<aniquilada>>, lo cual ha repercutido en pérdidas significativas de cualquier otro proyecto vital, tanto retrospectiva, como prospectivamente. Así por ejemplo la ruptura conyugal, las condiciones no adecuadas de subsistencia de sus hijxs en relación con el capital económico del que debería gozar, la imposibilidad de realizar proyectos personales de estudios por la imposibilidad de afrontar el costo económico, como la falta de atención y concentración para desarrollarlos, las amistades que toman distancia o se alejan por miedo a represalias, la expulsión de su territorio natal de Entre Ríos que, según refiere, se le ha intentado imponer como condición para negociar lo que le correspondería económica y materialmente en la herencia. Estas pérdidas subjetivas que se localizan como consecuencias de las acciones de socavamiento que realizan los demandados para aleccionar y normalizar a la denunciante, deben ser leídas de manera contextualizada, no sólo por el género, sino también por la clase y una situación de privilegios socio-económicos. En reiteradas oportunidades se refirió a la importancia que le daba y le da en su vida al matrimonio, a la constitución de la familia propia y a la crianza de sus hijxs, como así también a sostener un estilo de vida y el acceso a una educación que reconoce como perteneciente a sus valores"

Finalizó el informe de la DOVIC, expresando que "se podría identificar que en las oportunidades en las que ha tenido que <<elegir>> en el marco de este conflicto, sus decisiones han sido tomadas en un contexto complejo, con opciones propuestas por los denunciados y que para ella representaban decidir el mal menor. Estas conductas podrían entonces no estar basadas en una real autonomía, contando con todas las libertades y posibilidades para desarrollar un proyecto vital propio"(....)

En lo que sigue, la resolución se dedica al tratamiento de la incompetencia (en razón de la materia) para entender en el asunto por parte de ese Tribunal, y en consecuencia dispone remitir la causa al Juzgado Federal de Paraná, donde actualmente se encuentra radicada (atendiendo además a garantizar el pleno ejercicio de los principios de celeridad y economía procesal, de defensa en juicio, y asimismo evitar riesgos para la pesquisa que eventuales demoras puedan

ocasionar).-

En cuanto al encuadre legal de los hechos denunciados, determina que encuentran su encuadre legal dentro de las previsiones del artículo 168 del Código Penal, el cual prevé que "Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos"

En autos, dicha infracción se encuentra cometida en función de lo dispuesto por la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, que en su artículo 5° prevé como tipo de violencia contra la mujer la económica y patrimonial, definiéndola como "La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo".

Para finalmente, en función de todo lo anterior, concluir: "En efecto, de la prueba producida, surgen importantes indicios que sugieren el accionar conjunto de Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, en perjuicio de la denunciante, y que han motivado el pedido de indagatoria formulado por el Sr. Agente Fiscal Dr. Delgado quien, luego de su extenso análisis de la cuestión, concluyó que "La denunciante, desde 2009 hasta la hora presente fracasó en sus intentos de hacer valer el derecho a peticionar a las autoridades contenido en el artículo 14 de la ley fundamental. [...] Todas ellas trataron de disuadir su reclamo invocando el prestigio social y el capital político y simbólico de su familia. Esa suerte de cemento impidió que los reclamos de Dolores Etchevehere tengan otra respuesta que el paso del tiempo, que la aplicación formal de reglas, que mensajes formalmente informales de parte de funcionarios públicos e incluso de sus abogados, junto a la presentación de pruebas falsas -como el documento que firmó en Entre Ríos mientras estaba en Buenos Aires- A la vez, ello prolongó su asfixia económica y se tradujo en un poder asimétrico dirigido a conseguir un acuerdo sucesorio a medida de los imputados. Tal circunstancia, por lo demás, se ve ratificada por los aportes de la fiscalía específica del Ministerio Público Fiscal y por la Dovic. La fuente de esas vicisitudes es su familia de sangre. La beneficiaria también. Tales prácticas en su conjunto constituyen un mecanismo de disciplinamiento que persigue el objetivo

de torcer su voluntad para que acepte acuerdos que, desde una posición de asimetría, diseña su familia de sangre y que implican un menoscabo de sus derechos hereditarios. En esas prácticas que, en otras palabras, significan el uso particular de las instituciones públicas para la madre y los hermanos de Dolores Etchehevere yace la intimidación que cercena su voluntad y que se traduce en una situación de angustia económica. Dicho con más claridad. Frente al fracaso de las instancias institucionales y la prolongación de la situación de precariedad económica, la alternativa es suscribir los acuerdos privados que afectan sus derechos" (el destacado está en el original).-

vi.- Bajo estas premisas conceptuales y herramientas metodológicas -que nos han permitido contextualizar el marco legal y convencional y el marco teórico bajo el cual habrá que evaluarse la situación de las personas imputadas-, sumado a los antecedentes judiciales citados que guardan relación directa con el presente conflicto -que, entre otros aspectos, dedican su tratamiento a la cuestión de género invocada por la mujer acusada-, en lo que sigue analizaré las distintas probanzas arrojadas a la causa, para determinar si el hecho en cuestión se encuentra -o no- acreditado con el grado intelectual de certeza positiva que se requiere en esta instancia, y también para analizar si el contenido del relato de Dolores ETCHEVEHERE acerca de los hechos atribuidos es razonable y coherente.-

Previo a ingresar de lleno en la merituación de las pruebas producidas durante el plenario, vale recordar y tener especialmente en cuenta ciertas cuestiones.-

a- En primer lugar, que -como ya dije antes- en atención a la naturaleza y a las características de la conducta típica que seleccionó la acusación para subsumir la conducta de las personas imputadas -usurpación por despojo, art. 181 inc. 1 del CP- todo aquello relativo a la titularidad, legitimidad y naturaleza jurídica del derecho que se invoca para con el bien inmueble resulta irrelevante, pues, lo que se protege es la relación o situación fáctica, efectiva y de hecho en entre el sujeto y el bien inmueble, es decir que la ley protege a la que persona detenta un poder tal sobre la cosa (más allá de la legitimidad o no del título invocado, del carácter precario o no), frente a quien lo despoja total o parcialmente -mediante uno de los medios típicos taxativamente previstos por el legislador- de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él. Traducido ello al presente caso, como también mencioné antes, no está discutido (y está probado) que la entidad "Las Margaritas" S.A. ejercía la posesión y tenencia del establecimiento rural "Casa Nueva" que integraba -junto con otros- su patrimonio, para el día 15/10/2020.-

b- En segundo orden, siendo el tipo penal de la usurpación un *delito instantáneo de efectos permanentes*, según la doctrina ampliamente mayoritaria el despojo usurpador *se consuma cuando se produce la invasión del inmueble*

constitutiva de la ocupación, por lo que los actos posteriores a la consumación no son un medio usado para despojar (Cfr. D'Alessio, Código Penal de la Nación comentado y anotado, 2° ed. actualizada y ampliada, La Ley, pág. 827).-

En igual sentido se expide Buompadre (Código Penal Parte Especial, Director Rubén E. Figari, Tomo II, Thomson Reuters - La Ley) al sostener que el delito es instantáneo y se consume con el despojo, vale decir, en el momento en que se priva a otro del goce efectivo del inmueble. (pág. 416) y Chiara Díaz (Código Penal y normas complementarias, comentado, anotado y concordado, Nova Tesis, Tomo IV), según el cual el delito se consume en el momento mismo del despojo deja de producir *sus efectos* cuando dicho despojo cesa, citando jurisprudencia donde se resolvió que el despojo es un delito instantáneo de efectos permanentes ya que el estado de desposesión que crea no puede ser imputado como consumación, sino *como un efecto* de ésta (pág.557).-

En esa misma línea, Nuñez (Tratado de Derecho Penal, Tomo IV Marcos Lerner Editora, Córdoba) sostiene que la usurpación por despojo es un delito instantáneo de efectos permanentes, el delito se consume en el momento en que desplegados los medios que lo vuelven punible, se realiza el despojo y agrega que existiendo el despojo, vale decir, la ocupación con desplazamiento del sujeto pasivo, a los efectos de la consumación del delito, carece de importancia la mayor o menor duración de ese efecto material del delito. (pág. 497/498).-

Así las cosas, corresponde -a los efectos de verificar la tipicidad de la conducta- hacer hincapié y poner especial énfasis en el momento en que Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA procedieron a la ocupación del establecimiento "Casa Nueva" (concretamente el día 15/10/2020 alrededor de las 11:00 horas) y no en los acontecimientos ocurridos con posterioridad a dicha fecha de ingreso al predio, pues dichos actos -sean cuales fueran- forman parte *de los efectos* permanentes que son posteriores a la consumación del hecho en cuanto tal.-

c- Aquí haré un paréntesis ante las especiales circunstancias que rodearon los hechos del caso, que se encuentran contenidos en la descripción de la hipótesis imputativa. Durante el desarrollo del debate las partes -tanto acusadores como defensa técnica- invirtieron gran parte de sus esfuerzos en esclarecer una serie de extremos fácticos ocurridos entre el 15 y el 29 de octubre de 2020 que fue el día en que se procedió al desalojo del predio por disposición judicial, en el marco de una medida cautelar -reintegro de inmuebles-.-

Ahora bien, insisto, si bien los acontecimientos que tuvieron lugar durante ese lapso pueden ser útiles para dar cuenta del contexto en el cual se produjeron *los efectos* del acto consumado el 15/10/2020 (y eventualmente determinar la sanción penal en caso de corresponder), tales hechos no agregan ni restan nada de relevancia a la hora de determinar la configuración en sí de la conducta típica

de la usurpación por despojo, que se produce por la invasión del inmueble mediante alguno de los medios comisivos expresamente previstos.-

Al respecto, cabe agregar que en atención a las características de las personas involucradas en el presente conflicto, también se acreditó durante el juicio que **la cuestión fue tomando una trascendencia mediática inusitada** -que quizás no se recuerde cabalmente dado el elongado tiempo transcurrido desde el 15/10/2020- y que en consecuencia la conflictividad y la agresividad de la situación fue ascendiendo en una escalada de violencia que era muy difícil de prever de antemano.-

Esta cobertura mediática obedeció, muy probablemente, a que Dolores ETCHEVEHERE -al momento de proceder a la ocupación del predio rural "Casa Nueva"- llegó acompañada de Ernesto Facundo TABOADA y de un grupo de personas oriundas de Buenos Aires, que estaban identificadas con el denominado "Proyecto Artigas" desarrollado por el abogado Juan GRABOIS, una personalidad conocida en el ámbito de la economía social y en la escena política nacional (es además licenciado en ciencias sociales, escritor, dirigente social y político argentino, es fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Frente Patria Grande. Además, es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); mientras que quienes resistieron la ocupación del predio fueron los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián ETCHEVEHERE junto con su madre Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL, siendo que el primero también es una personalidad conocida a nivel nacional en el ámbito de la política y de la actividad agropecuaria (pues es abogado y productor agropecuario argentino, fue presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017, fue Ministro de Agroindustria de la Nación durante el gobierno Mauricio MACRI).-

Tales circunstancias, sumada a la particular conflictividad familiar subyacente que fue antes descripta en detalle, originada a partir del fallecimiento del causante Luis Félix ETCHEVEHERE- determinaron que la ocupación de "Casa Nueva" estuviera atravesada por un enfrentamiento político e ideológico relacionado con el modo de desarrollar la actividad productiva, en el que se disputaban dos modelos productivos antagónicos (uno basado en la propiedad privada y otro en la comunidad de bienes, por plantearlo de forma simplificada), con el desarrollo de la economía social, y en definitiva con una determinada forma de distribuir los recursos en una sociedad.-

También ha sido acreditado que la escalada de violencia se vio acompañada por una convocatoria de vecinos y de productores rurales que se solidarizaron con los miembros del directorio de "Las Margaritas" S.A., y se apostaron en la tranquera de ingreso al establecimiento, se concentraron allí durante los días posteriores al ingreso de modo permanente, con vehículos, camiones, tractores y

que en un momento determinado colocaron un candado y cadenas en la puerta de ingreso hasta que un día determinado impidieron que ingresaran nuevas personas al predio, habilitando únicamente la salida de quienes se encontraban en el interior, previa requisita personal e identificación vehicular exhaustiva por parte del personal policial interviniente, conforme se encuentra constatado en las respectivas actas incorporadas como prueba a la causa (los pormenores de este extremo han sido valorados en detalle por el Dr. CARBALLO al momento de dictar el sobreseimiento de Dolores ETCHEVEHERE en orden al delito de desobediencia judicial, resolución que fue anteriormente transcrita en su parte pertinente).-

En igual sentido, esta situación extraordinaria demandó que se dispusiera de un "cordón" policial conformado por unos ciento cincuenta (150) efectivos policiales entre el interior y el exterior del inmueble, de modo de prevenir que la situación se agravara, que se dieran enfrentamientos entre los sectores involucrados, a través de los cuales se abastecieron de alimentos a las personas que ocupaban el predio cuando ya no tenían provisiones suficientes. Tal fue la escalada de violencia, que el **Juez Raúl FLORES debió dictar -en fecha 23/10/2020 y a solicitud de la Fiscalía interviniente- medidas de protección a favor de Dolores ETCHEVEHERE** (y personas allegadas) hacia sus hermanos y su madre, a los fines de resguardar su integridad y la de aquellas personas que estaban ocupando el inmueble, a raíz de la denuncia radicada por la aquí imputada.-

Para mayor abundamiento, voy a transcribir las partes pertinentes de esta resolución, que contienen los antecedentes fácticos y los fundamentos jurídicos en que se basó su despacho favorable a lo requerido por la representante de la acusación pública:

"En el presente legajo caratulado "ETCHEVEHERE DOLORES S/ SU DENUNCIA - EXTORSIÓN EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO" IPP S/Nº, Leg. OGA Nº 1932-O, venidos a despacho para resolver; y,

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante escrito de fecha 23/10/2020 a las 12:54hs, la Fiscal actuante Dr. María Constanza BESSA -Fiscal Aux, N° 1 Int.- solicita la fijación de Medidas de Protección Inhibitorias y/u Ordenatorias (arts. 73, 76 y 79 del C.P.P.E.R.), en favor de la Sra. Dolores ETCHEVEHERE DNI N° 20.189.984 con domicilio en Establecimiento Casa Nueva, Santa Elena, Dpto. La Paz -Entre Ríos; todo conforme art. 76 del C.P.P. y art. 26 de la ley de violencia de género, Ley Nacional N° 26485, y ley prov. de adhesión N° 10058.-

2.- Que, las medidas solicitadas son imponer medidas de protección Inhibitorias y/u Ordenatorias (Art. 73 y 76 del C.P.P.E.R.) en beneficio de la Sra. Dolores ETCHEVEHERE; las que deberán ser cumplidas por LUIS MIGUEL ETCHEVEHERE, JUAN DIEGO ETCHEVEHERE, ARTURO SEBASTIÁN ETCHEVEHERE Y

LEONOR BARBERO MARCIAL VIUDA DE ETCHEVEHERE, por el plazo de TREINTA (30) días consistente en: a) CESE de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia DOLORES ETCHEVEHERE y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona. b) PROHIBICION de ACERCAMIENTO al Casco del ESTABLECIMIENTO RURAL CASA NUEVA, sito en localidad de Santa Elena, Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos; lugar donde se encuentra actualmente la Sra. DOLORES ETCHEVEHERE; debiendo respetar el cordón policial preventivo, ubicado en el ingreso sobre Ruta Provincial N° 48.. c) PROHIBICION de ACERCAMIENTO a cualquier lugar público y/o privado en que DOLORES ETCHEVEHERE y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella se encuentren. e) Prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio.-

3.- Que manifiesta la Sra. Fiscal que el legajo fiscal se inició por escrito presentado vía correo electrónico de esta Unidad Fiscal, por la Sra. DOLORES ETCHEVEHERE, Documento Nacional Identidad 20.189.984, con domicilio en Establecimiento Casa Nueva, Santa Elena, Dpto. La Paz -Entre Ríos-, en contra de sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, y de su madre Leonor Barbero Marcial viuda de Etchevehere; y que sin perjuicio de los hechos denunciados, y constando en el mismo escrito por la Sra. Etchevehere al que hice referencia, que los hechos habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la denuncia es presentada ante los Tribunales con jurisdicción allí; y a los fines de realizar averiguaciones previas es que se dispuso la remisión de Nota al Juzgado Correccional y Criminal N° 3 de CABA que se remitan copias de la misma.

Que en el día de la fecha, la Sra. DOLORES ETCHEVEHERE, mediante la Dra. Daniela Guadalupe Verón, remite escrito vía correo electrónico a esta Unidad Fiscal, poniendo en conocimiento y denunciando hechos nuevos de los que fue víctima, y señalando como autor de los mismos a su hermano Luis Miguel Etchevehere, y a personas allegadas a él, quienes inclusive así se identifican al acercarse a la denunciante y exponer sus dichos.

Agregando que esa Fiscalía tomo conocimiento que además esta Fiscalía tomó conocimiento que en el día de la fecha, la Oficina de Gestión de Audiencias recibió mediante correo electrónico, la presentación de HABEAS CORPUS COLECTIVO, relacionado en forma directa con los hechos denunciados por la Sra. DOLORES ETCHEVEHERE, y la convocatoria por parte de los denunciados a manifestarse con camionetas, tractores y jinetes en la Ruta N° 48.-

4.- Que la manifiesta la Sra. Fiscal que en el caso de referencia, el pedido

de manifiesta por los hechos denunciado por la Sra. Dolores ETCHEVEHERE de fecha 20/10/2020 y por escrito del día de la fecha donde se amplían los hechos denunciados, y se ponen en conocimiento dos hechos intimidatorios concretos, acaecidos en esta jurisdicción; y dice que en lo sustancial la denunciante relata:

"Como es de público y notorio conocimiento he sido víctima de violencia por parte de mi familia, la cual ya he denunciado judicialmente en reiteradas oportunidades. Desde que falleció mi padre, Luis Félix Etchevehere, en el año 2009, mis hermanos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, por mi condición de ser mujer, me han excluido de todos los negocios de la familia. Desde el día de la muerte de mi padre no recibí un centavo jamás, ni siquiera tuve bancarización de ningún tipo ni poseo bienes de ninguna clase. Me han expulsado de la casa que me correspondía en Paraná y que había sido construida por mi padre para cada uno de mis hermanos, y asignadas por él expresamente a cada uno de sus hijos. Prácticamente sin forma de garantizar el sustento de mis tres hijos, imposibilitada de cubrir los gastos de su educación, cursando una enfermedad, y luego de meses de extorsiones, presiones y amenazas que me dejaron literalmente en la calle, me vi forzada a firmar un convenio nulo, con cláusulas absolutamente leoninas y abusivas, que pretendían despojarme prácticamente por completo de mis derechos sobre la herencia. El miércoles 21 de octubre alrededor de las 20:43 hs fui hostigada, amedrentada y amenazada por un grupo de personas, las cuales se presentaron alegando venir a pedido y en nombre de Luis Miguel Etchevehere, intimándome, mediante violencia verbal y psicológica, a retirarme de mi propio domicilio. Durante el día de hoy, 22 de octubre de 2020 se encuentra estacionada una camioneta en la entrada, impidiendo el ingreso y salida del campo. Esto me genera una sensación de tensión, nerviosismo y miedo, con toda la gente que públicamente se puede constatar que se encuentra apostada en la puerta de entrada. Además mis hijos también fueron víctimas de esta violencia, ya que les patearon la puerta del departamento y les dijeron que tenían las horas contadas. Es un edificio nuevo y lograron entrar por la puerta principal hasta llegar a su departamento. En el mismo momento en que se escribe esta solicitud, se desarrolla un conflicto violento de índole machista que puede involucrar gente armada de conformidad a los audios que el propio grupo encabezado por Luis Miguel Etchevehere, mi hermano, difundió. Audios que hacen mención a camionetas, jinetes, tractores y un discurso de violencia en que tratan a quienes a mis allegados como "Son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Perdé cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado" "Mandá algún guapo con ganas de pegarle a un negro de mierda de esos que odiamos tanto", integrantes de las corporaciones agropecuarias que se concentraron en el ingreso de la estancia sin permitir mi circulación y de las personas allegadas".

5.- Que los hechos antes descriptos se encuadran -a priori- por la unidad fiscal en un caso en un caso de VIOLENCIA DE GÉNERO, Ley 26.485, y asimismo en tipos penales que serán determinados mediante la presente investigación, pero que, sin dudas, se tratan de hechos intimidatorios y/o amenazantes contra la denunciante y el grupo de personas allegadas a la misma que se encuentran en el Establecimiento Casa Nueva.-

7.- Por último adjunta la fiscal actuante video donde, al decir de la Fiscal, se puede apreciar el hecho mencionado el párrafo precedente, al que hace referencia la denunciante; donde se pueden escuchar que estas personas aún no identificadas, le ofrecen a Dolores Etchevehere y a las personas que se encuentran con ella en el predio "un salvoconducto", y solucionar "ese problema de forma pacífica", no emitiendo contestación cuando la denunciante les pregunta cuáles serían los otros modos posibles de solución. Adjuntando asimismo un archivo de audio en que se pueden apreciar varias voces diferentes - de personas aún no identificadas-, que aparentemente se dirigen a JUAN DIEGO ETCHEVEHERE, y que ofrecen presentarse en el establecimiento rural para "sacar a los intrusos", que irán directamente al campo, que ingresarán por las distintas entradas o partes del mismo -evitando así el cordón de las fuerzas de seguridad-, diciendo además que "más de uno se sale de la vaina por ir armado"; amenazando que irán a sacarlos, mediante violencia, del lugar supuestamente usurpado.-

RESUELVO:

1) DISPONER MEDIDAS DE PROTECCIÓN, (Arts. 73 inc. b) y j), y 76 del C.P.P.E.R. y art. 26 de la Ley de Violencia de Género, Ley Nacional Nº 26485, y Ley Provincial de adhesión Nº 10058) en beneficio de Dolores ETCHEVEHERE con domicilio actual en Establecimiento Casa Nueva, Santa Elena, Dpto. La Paz -Entre Ríos-; las que deberán ser cumplidas por: Luis Miguel ETCHEVEHERE, D.N.I. Nº 14.718.347, domiciliado en Los Vascos Nº 861 de Paraná; Juan Diego ETCHEVEHERE, D.N.I. Nº 24.264.829, domiciliado en Los Vascos Nº 861 de Paraná; Sra. LEONOR MARÍA MAGDALENA MARCIAL BARBERO DE ETCHEVEHERE, con domicilio en calle Los Vascos Nº 811 de Paraná; y por ARTURO SEBASTIÁN ETCHEVEHERE, DNI 17.615.942, domiciliado en calle Los Vascos Nº 883 de Paraná (E.R.); por el plazo TREINTA (30), -a partir del día de la fecha y hasta el 22/11/2020 a las 11:00hs, consistentes en lo siguiente: 1.- CESE de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia DOLORES ETCHEVEHERE y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona. 2.- PROHIBICION de ACERCAMIENTO al Casco del ESTABLECIMIENTO RURAL CASA NUEVA, sito en localidad de Santa Elena, Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos; lugar donde se encuentra actualmente la Sra. DOLORES ETCHEVEHERE;

debiendo respetar el cordón policial preventivo, ubicado en el ingreso sobre Ruta Provincial N° 48. 3.- la PROHIBICION de ACERCAMIENTO a cualquier lugar público y/o privado en que DOLORES ETCHEVEHERE y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella se encuentren. 4.- Prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio radial, televisivo y/o redes sociales.-

II) Líbrese Oficio Comisaría N° 17 de Paraná (E.R.), a fin de que procedan a notificar a: Luis Miguel ETCHEVEHERE; Juan Diego ETCHEVEHERE, Leonor María Magdalena MARCIAL BARBERO DE ETCHEVEHERE, y a Arturo Sebastián ETCHEVEHERE; de la presente resolución, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, incurrirán en el delito de desobediencia judicial previsto en el art. 239 del Código Penal, a la vez que su incumplimiento será evaluado negativamente en caso de que debiera ser indagado por los hechos que motivaron el inicio de la presente investigación.-

d- Hechas estas aclaraciones, habiendo precisado así cuál es el núcleo de la conducta atribuida y de la tipicidad penal seleccionada para subsumirla, en lo que sigue analizaré si las pruebas rendidas permiten verificar -con el grado de certeza positiva que requiere toda condena- que el hecho existió conforme se encuentra descrito en la intimación y que las personas imputadas son sus co-autoras.-

En esa labor, advierto que la redacción del hecho contiene una serie de extremos que son ajenos a la configuración de la conducta típica de la usurpación por despojo -invasión del inmueble- mediante el empleo de violencia y amenazas. Concretamente, me refiero a todo aquello acontecido los días posteriores al ingreso y ocupación del inmueble, a saber: haber habitado las instalaciones hasta el 29/10/2020, haber realizado trabajos en la tierra, modificando al explotación ejercida sobre el establecimiento, haberle comunicado a los empleados Ángel MARTINEZ, Ramona RODRIGUEZ y Osmar BARRETO los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo e intimidándolos (hechos que, como antes señalé, serían a todo evento útiles para la determinación de la sanción punitiva en caso de corresponder). Ello, más allá de la verificación de si tales extremos fácticos se encuentran o no acreditados en el presente caso en base a la prueba rendida, sobre lo que volveré más adelante.-

Despejado ello, advierto que tampoco la cronología de los acontecimientos sucedió del modo en que se encuentra narrado el hecho intimado. Me explico.

Las pruebas rendidas, valoradas conforme la sana crítica racional y de manera integral, da cuenta de que **los hechos ocurrieron de la siguiente manera:**

El día 15/10/2020 alrededor de las 11:00 horas, Dolores ETCHEVEHERE se hizo presente en el predio rural "Casa Nueva" junto con su abogado y representante Ernesto Facundo TABOADA, junto con otras personas que en total conformaban un grupo de veinte (20) personas. El testigo Ángel Roberto MARTINEZ fue el único de los testigos presenciales que estimó, a lo sumo, esta cantidad de personas, siendo que Ramona RODRIGUEZ nada dijo al respecto, dijo no poder precisar un número de personas, más allá de que mencionó a las cinco personas que estaban en su casa cuando intercambiaba unas palabras con las personas imputadas. Quizás hubieran arrojado claridad sobre este extremo los testimonios de Osmar BARRETO (la pareja de RODRIGUEZ para ese entonces, quien fue la primera persona que recibió a Dolores), el de Miriam (la pareja de MARTINEZ, que lo llamó por teléfono mientras estaba en el campo recorriendo, al momento del ingreso de las personas al predio) o bien de LENCINA (el tambero que habló con Dolores en el interior de la casa principal de la estancia y además fue mencionado por Mariano RUBIOLLO como uno de los empleados encargados del tambo de la estancia). Sin embargo, desconozco las razones por las cuales los acusadores omitieron convocar -oportunamente- a declarar a estas personas cuyas versiones, probablemente a mi modo de ver, hubieran sido útiles y relevantes a la hora de esclarecer la dinámica de los acontecimientos.-

Dicho ello, tengo por acreditado que -a lo sumo- Dolores ETCHEVEHERE ingresó junto con Ernesto Facundo TABOADA al predio "Casa Nueva" acompañados de un grupo de personas que en total, conformaban veinte (20) personas, lo que dista, y mucho, de las cuarenta (40) personas que menciona la acusación en el hecho intimado. En nada obsta a esta conclusión el hecho de que se haya constatado la presencia de treinta y seis (36) personas al momento del desalojo (el 29/10/2020), quienes fueron requisadas personalmente y así como también sus vehículos, además debidamente identificadas, porque como dijo Ramona RODRIGUEZ desde el ingreso al predio del 15/10/2020 "*se veía continuamente que entraban y salían y cada vez más personas*" lo que explica que, al menos hasta que los hermanos y la madre de Dolores ETCHEVEHERE decidieran encadenar y cerrar con candado la tranquera de ingreso al establecimiento (hecho que tuvo lugar al tercer o cuarto día después del ingreso, como lo declaró Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL), existió un flujo de personas, lo que hace perfectamente posible que el número inicial de veinte (20) personas al día del ingreso se haya visto incrementado durante esos días posteriores, como dije hasta el bloqueo del ingreso dispuesto unilateralmente por la denunciante y sus tres hijos varones.-

En igual sentido, Juan Diego y Luis Miguel ETCHEVEHERE también declararon que -una vez que se hicieron presentes en el lugar- veían que entraban y salían automóviles, lo que refuerza que hubo un flujo de personas hasta el día

en que decidieron bloquear el ingreso de nuevos ocupantes.-

Continúo con la cronología de los hechos.-

En esas circunstancias, Dolores ingresó por la tranquera principal del predio rural y se dirigió hacia donde estaba la casa de los caseros de la estancia, siendo recibida en primer término por Osmar BARRETO, por entonces esposo de Ramona RODRIGUEZ, la empleada que estaba cocinando en el interior de su casa. Seguidamente, Osmar BARRETO le avisó a Ramona RODRIGUEZ sobre la presencia de Dolores en el lugar y la acompañó hasta el lugar donde estaba la casera, quienes luego de saludarse -abrazo mediante- mantuvieron una conversación en el interior de la casa, de la que participaron Dolores ETCHEVEHERE, Ernesto Facundo TABOADA, estando allí presentes tres personas más (es decir eran cinco en total en esa escena) mientras que las restantes aguardaban en el exterior de la finca, junto a la tranquera de ingreso.-

Por eso, tampoco es, en rigor, cierto que -como reza el hecho intimado- las cuarenta personas se dirigieron hacia Ramona RODRIGUEZ y le exigieron la entrega de las llaves de la casa principal bajo amenazas, ni tampoco que ante su negativa a ingresaron luego a la casa de la empleada y tomaron un grupo de llaves que estaban colgadas en el interior de dicha vivienda.-

Mucho menos que hayan ejercido violencia física hacia Ramona RODRIGUEZ, o que hayan empleado armas de fuego como forma de intimidar a los empleados del establecimiento, como refieren en su relato -sin ningún elemento objetivo que le de sustento- Juan Diego y Luis Miguel ETCHEVEHERE, y Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL al radicar la denuncia que diera origen a la presente causa. Insisto, la empleada que presencié esa escena negó rotundamente estos extremos, lo que me conduce a desecharlos de plano.-

Siguiendo con la cronología de los acontecimientos, se encuentra acreditado que en esas circunstancias, Dolores ETCHEVEHERE le pidió a Ramona - a quien ya conocía pues habían compartido momentos en la ciudad de Paraná, cuando Ramona era la empleada de Luis Miguel ETCHEVEHERE y Dolores iba de visita junto con su hijos cuando eran niños- que le hiciera entrega de las llaves de la casa principal del casco de la estancia, a lo que Ramona le dijo que tenía que pedir autorización a sus hermanos. Ante ello, Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA le dijeron que si no les entregaba las llaves se tenía que retirar del lugar en unos quince o veinte minutos, a la vez que conversaron sobre cuánto cobraba Ramona por trabajar en el lugar, ofreciéndole los imputados una mejora en su salario en caso de decidir quedarse en el lugar junto con ellos (esta última escena se encuentra videograbada y fue reproducida por al Defensa Técnica en el juicio ante el Tribunal).-

Entonces, Ramona decidió llamar por teléfono primero a Juan Diego ETCHEVEHERE y luego a Luis Miguel ETCHEVEHERE -sus superiores- para ponerlos

al corriente de la situación, y en ese contexto es que Ernesto Facundo TABOADA toma el teléfono celular de la mano de la empleada y le dice al primero *"que ellos iban a mandar ahí y que ellos eran como dueños, que se iban a quedar ahí"* (así lo dijo textualmente la testigo RODRIGUEZ), y posteriormente Ramona toma el teléfono pero se corta la comunicación.-

Cabe apuntar que los términos de la conversación telefónica mantenida entre Ernesto Facundo TABOADA y Juan Diego ETCHEVEHERE -primero- y luego con Luis Miguel ETCHEVEHERE se asimila más a lo que dijo el imputado al ejercer su defensa material (quien -entre otras cuestiones- refirió que el ingreso y ocupación del predio rural obedecía a la necesidad de su representada de hacer visible su situación y de entablar una negociación en relación al reclamo que venía realizando por sus derechos sucesorios) que a la versión que brindó Juan Diego ETCHEVEHERE al prestar declaración testimonial, quien concretamente expresó: *"Ramona estaba como una personas totalmente exaltada, estado de nervios totales, conmoción total, estaba casi llorando, me dice que ingresaron un montón de personas en carpas autos, algo terrible, se están instalando en todos lados. Una voz masculina, fuerte e intimidatoria tomó el teléfono y dice "¿vos quien sos?"* (ante lo cual él se presenta como el administrador del establecimiento y socio de la entidad) *con voz fuerte intimidatoria y agresividad me dice "yo no te tengo por que dar explicaciones, soy el nuevo dueño del establecimiento Casa Nueva, no tenés nada que ver con esto", "pasale el siguiente mensaje a Luis Miguel ETCHEVEHERE: soy Facundo TABOADA, socio de Juan GRABOIS, este es un mensaje directo hacia él y su familia, vinimos a tomar el campo, este campo es nuestro, está tomado, no es de ustedes, pasó a ser nuestro, haceme el favor de no aparecer más por acá, anota mi nombre"* de forma amenazante altanera y violenta, *me dio a entender que actuaba en forma coordinada con su socio Juan GRABOIS....(seguidamente) Le devolvió el teléfono a Ramona y le daba órdenes, estaba en una situación de intimidación, que era lo que quería dejar claro en todo momento, que ejercía el total del poder hacia todos."*, declaración que sorprende por su extrema claridad expositiva, su nivel de detalle y la memoria extraordinaria y descomunal del testigo -quien inclusive parece haber percibido, a la distancia, mejor las cosas que quienes presenciaron la escena- que no hacen más que atentar contra su credibilidad y objetividad.

Tampoco es posible dar crédito a lo que declaró Luis Miguel ETCHEVEHERE respecto de la conversación telefónica que él mantuvo con TABOADA (recordemos que el testigo refirió que tomó conocimiento del hecho porque ese día 15/10/2020 tenía dos o tres llamadas perdidas de parte de Ramona y cuando devolvió el llamado *"me dice muy exaltada y nerviosa "mire entró gente al campo, de afuera" con la voz entrecortada, y en ese momento se escucha un intercambio de palabras, y una persona con voz masculina dice ¿quien sos? Vení que te voy a*

matar, ahora el campo es nuestro.")-.

Además, las conversaciones telefónicas narrada por los testigos contrastan fuertemente con la declaración testimonial de Ramona RODRIGUEZ, quien no dijo nada semejante sobre un estado anímico de esas características al momento de la conversación con los imputados, mientras que lo que dijo haber escuchado de las conversaciones telefónicas difiere mucho de lo narrado por Juan Diego y Luis Miguel ETCHEVEHERE.-

Tan es así, que ni siquiera los representantes de la acusación pública y privada hicieron alguna mención a estas supuestas conversaciones telefónicas al meritar la prueba en la etapa de la discusión final.-

Prosigo con la cronología de los hechos.-

Ha sido probado que en ese instante, Dolores ETCHEVEHERE vio unas llaves colgadas en la pared y las tomó (aunque esas llaves no eran las que permitían abrir las puertas de la casa principal del casco) y se dirigió hacia dicha dependencia, a la cual ingresó por una puerta ventana lateral, *que abrió sin forzar*, para conducirse luego a la habitación que fue siempre su dormitorio, donde pernoctó los días posteriores. En esto sí se verifica la descripción fáctica intimada que expresa "*habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma*", que se da de bruces con lo declarado por Juan Diego y Luis Miguel ETCHEVEHERE quienes mencionaron que se ejerció fuerza y violencia sobre las cerraduras y puertas de ese inmueble para poder ingresar.-

Simultáneamente, Miriam (cuyos demás datos se desconocen pues no fue convocada por la acusación para declarar como testigo), la mujer de Ángel Roberto MARTINEZ, el capataz del campo que en ese momento se encontraba en el campo de recorrida ocupándose de los animales, lo llamó por teléfono y le advirtió sobre la presencia de esas personas en el lugar, ante lo cual MARTINEZ a su vez llamó a Juan Diego ETCHEVEHERE y le comunicó tal situación, aunque sin dar muchas precisiones porque él no estaba presente en el casco de la estancia en ese momento, para luego una vez que regresó al casco de la estancia mantener nuevas comunicaciones para ponerlo al corriente de lo que estaba sucediendo allí.-

Ahora bien, hasta aquí tenemos el modo en que ha sido acreditado *el ingreso* al predio por parte de las dos personas imputadas como integrantes de un grupo de como máximo veinte (20) personas y es aquí donde corresponde detenernos y hacer hincapié a la hora de verificar si las pruebas permiten afirmar que efectivamente se configuró la acción típica.-

e- A la luz de las anteriores consideraciones, para un mejor orden metodológico analizaré la acción del despojo -por invasión del inmueble- y luego el medio comisivo (amenazas y violencias) atribuido por la acusación a las personas imputadas.-

En cuanto a la conducta de haber llevado a cabo el **despojo** que prevé la norma penal, la Defensa Técnica fijó su postura en el alegato de apertura y luego la ratificó en la discusión final, en el sentido de no controvertir que el despojo existió en cuanto tal, sin embargo descartó -siempre según su tesis- que se hayan empleados los medios comisivos previstos expresa y taxativamente por el legislador, concluyendo su razonamiento en que la conducta es, por esos fundamentos, atípica.-

Siguiendo las reglas del proceso penal, de corte adversarial y acusatorio, corresponde -en principio- tener ello por sentado, y en consecuencia proseguir con el análisis probatorio tendiente a verificar si se encuentra probado que se emplearon amenazas y violencias para provocar el despojo por invasión del inmueble, para finalmente determinar si existe o no en el caso una conducta típica y penalmente relevante.-

Ahora bien, sin perjuicio de ello, no puedo dejar de mencionar que existen autores en doctrina nacional que -en las circunstancias probadas del presente caso- también llegan a poner en tela de juicio si se configuró el despojo por invasión del inmueble en cuanto tal. Veamos.

Nos enseña D´Alessio (Código Penal de la Nación comentado y anotado, Tomo II, Parte Especial, La Ley) que la acción típica de despojar tiene un sentido de sacar, de desplazar total o parcialmente al sujeto pasivo de la ocupación del inmueble o impedirle que continúe realizando los actos propios de su ocupación tal como los venía ejecutando.-

En una línea más restrictiva, Núñez, en su Tratado de Derecho Penal, explica que el despojo consiste en la privación de la ocupación del inmueble a su tenedor, poseedor o cuasi-poseedor, éstos o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación, exige el desapoderamiento del terreno tenido o poseído, o sobre el cual se ejerce el derecho real. *No bastan los actos que, sin excluir la tenencia, posesión o cuasi-posesión del suelo, importan limitaciones circunscriptas a obstaculizar o disminuir el goce pleno del inmueble; ni siquiera si esas limitaciones privan de lo edificado o construido sobre el terreno. En estos casos, el sujeto pasivo conserva el inmueble, aunque en condiciones que turban el ejercicio de su tenencia, posesión o cuasi-posesión.* (Tratado de Derecho Penal, Marcos Lerner Editora, Córdoba, pág. 485). El maestro cordobés hace así hincapié en el concepto de privación como determinante a la hora de conceptualizar el despojo típico, lo que -aplicado a los hechos probados del caso concreto- nos conduciría a descartar ya de antemano el despojo en sí mismo.-

Similar criterio siguen Carlos Froment y Belen Cassani (encargados de la parte pertinente del Código Penal y normas complementarias - Análisis doctrinal y jurisprudencial de Baigún y Zaffaroni, Hammurabi, Tomo 7, página 723 y ss.), al

referir con cita de Donna, que el despojo tiene el sentido de quitar o sacar la ocupación del inmueble o impedirla total o parcialmente, en cuanto refiere que *"...tanto puede haber despojo desplazando al sujeto pasivo o impidiéndole que el sujeto pasivo realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando"* (pág. 745). También refieren -al tratar las modalidades del despojo- que *"la invasión y posterior ocupación del inmueble debe implicar, asimismo, la posibilidad de ejercicio de un poder de hecho sobre ésta y la privación al sujeto pasivo de su derecho de uso y goce. Si esto no ocurre y el efecto resulta ser otro, como puede ser una simple violación de domicilio, no se configurará el delito de usurpación."* (pág. 746).-

Donna (en su obra Derecho Penal Parte Especial, Rubinzal Culzoni Editores, Tomo II B) en sentido similar sostiene *"Comete despojo aquel que mediante un acto de violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad priva la posesión, tenencia o cuasiposesión de un bien inmueble (...) Por ende, y en otras palabras, "consiste en la privación de la ocupación del inmueble a su tenedor, poseedor o cuasiposeedor. Éstos o sus representantes deben resultar desplazados o excluidos de su ocupación"*. (pág. 733). Prosigue, y afirma que *"el acto que debe realizar el sujeto activo del delito generalmente es el de invadir, entrar a un inmueble que posee otro y quien está ausente. Además, debe entrar para ocupar dicho inmueble. También se puede dar el caso del que expulsa al poseedor y toma su lugar en el inmueble"* (pág. 734).-

Continúa desarrollando el concepto en este sentido, al sostener que el despojo exige el desapoderamiento del terreno tenido o poseído, siendo insuficientes los actos que limiten u obstaculicen el goce pleno del inmueble, al menos para la forma delictiva. Agrega el autor que para que se complete el despojo, el sujeto debe actuar despojando y lograr el efecto del despojo, es decir que *el concepto del despojo en el delito de usurpación se caracteriza por una doble consecuencia: por un lado, el tenedor debe resultar desplazado, por otra el usurpador debe haber realizado esa exclusión por medio de actos que lo habiliten a permanecer en la ocupación, es decir, que debe estar en condiciones de subrogar a la víctima* (pág. 734, 735).-

Recordemos que según surge de los testimonios de dos de los empleados presentes al momento del ingreso -los únicos que, inexplicablemente, fueron citados a juicio por las partes acusadoras- MARTINEZ y RODRIGUEZ, las personas imputadas *no los excluyeron del predio, ni les imposibilitaron que continuaran realizando sus labores tal como las venían haciendo con anterioridad*, siendo que las únicas "limitaciones" o "molestias" referidas por Ramona RODRIGUEZ, consistentes en no permitirle ingresar a limpiar la casa principal (pues de esto se encargaría Dolores ETCHEVEHERE y quienes la acompañaban en el lugar) una restricción absolutamente irrelevante a los fines de tener por configurada la

tipicidad penal enrostrada. Nada más lejos que lo declarado por Juan Diego, Luis Miguel ETCHEVEHERE y Mariano RUBIOLLO.-

RODRIGUEZ fue muy clara y categórica al declarar cuando dijo que *nunca recibió malos tratos* durante los días que duró la ocupación, en igual sentido que MARTINEZ quien dijo, al ser preguntado sobre cómo siguió la vida cotidiana luego del ingreso al predio, *"yo los vi ese día y no los vi más, seguí trabajando con la ganadería y con la hacienda. Seguí haciendo mi trabajo libremente no hubo limitación"*, respondiendo luego a la Defensa que en ningún momento recibió un trato violento ni amenazante, que siempre hubo un trato cordial.-

Cabe poner especialmente de resalto que esta declaración de MARTINEZ, insisto, testigo presencial inmediatamente después del momento del ingreso, y en cierta manera objetivo (teniendo en cuenta que es subordinado jerárquico de los denunciados, para quien trabajaba al momento de los hechos), difiere y mucho con lo relatado por Mariano RUBIOLLO, cuya parcialidad y subjetividad frente al caso queda evidenciada desde el momento mismo en que reviste la calidad de "co-administrador" del establecimiento, tal como se lo consigna en la ampliación de denuncia formulada por el Querellante particular, sumado a la afinidad que ha quedado claramente manifestada para con la madre y los hermanos de Dolores ETCHEVEHERE (es amigo desde la infancia de Juan Diego ETCHEVEHERE, pues vivió durante un año y medio en su adolescencia junto con la familia en la misma vivienda, porque su padre era bancario y lo habían afectado a otra ciudad y él tenía que continuar con sus estudios).-

Recordemos al respecto que Mariano RUBIOLLO escenificó un episodio - ocurrido al tercer o cuarto día después del ingreso, lo que tiene que ser tenido en cuenta para, en su caso, restarle relevancia a la hora de configurar el despojo típico- que calificó como una situación de "intimidación y de violencia" en circunstancias en que se hizo presente en el campo "Casa Nueva" para llevar una bomba de vacío que se había roto en el tambo, en el cual refirió haber solicitado auxilio al personal policial que estaba en el portón de ingreso al predio, no obstante lo cual ingresó por sus propios medios, y dijo haber sido increpado, cuestionado, interpelado, intimidado por las personas que estaban allí presentes, aunque -más allá de ello- igualmente pudo llevar el repuesto para ser colocado por los empleados del lugar, para continuar con las actividades de ordeño del ganado vacuno, para luego verse "obligado" a retirarse sin poder continuar con las demás tareas de rutina porque se sintió incómodo, amenazado e intimidado por los ocupantes del inmueble. Insisto, MARTINEZ no dijo nada semejante sobre una situación como la narrada por el amigo de los socios de "Las Margaritas" S.A. y administradores de "Casa Nueva".-

Por lo demás, lo que refirió Mariano RUBIOLLO al relatar las actividades productivas del establecimiento que según sus dichos "se paralizaron" desde el

15/10/2020 hasta el 29/10/2020 (controles, aplicaciones, fumigaciones, y demás tareas propias de la agricultura y ganadería que se desarrollaban en el campo "Casa Nueva"), agregando que todo se vio alterado y tuvo como consecuencia un impacto concreto en la marcha normal de los procesos productivos, tampoco encuentra sustento probatorio alguno.-

En definitiva, las anteriores consideraciones me conducen a concluir que sería incluso viable poner seriamente en duda si el 15/10/2020 existió un verdadero acto de despojo, no obstante lo cual, para no quebrar las reglas del sistema acusatorio, continuaré con el análisis de los medios comisivos.-

f- Corresponde en lo sucesivo ingresar en el análisis de las pruebas rendidas para determinar si las personas acusadas emplearon, al momento del despojo por invasión u ocupación del inmueble- los **medios comisivos** (amenazas y violencias) que se encuentran expresa y taxativamente previstos en el catálogo represivo.-

Este es, en definitiva, **el núcleo de la controversia**, porque como dije la Defensa se allanó y aceptó reconocer que sus asistidos despojaron el inmueble, es decir que ingresaron y lo ocuparon, y en el marco de esa estrategia concentró sus esfuerzos en cuestionar que haya existido el empleo de violencia y amenazas al ingreso al predio.-

En base a las consideraciones que he venido realizando anteriormente, de las cuales es posible inferir algún tipo de adelanto sobre la conclusión a la que arribaré sobre este punto, debo dejar expresamente aclarado que coincido en un todo con la hipótesis de la Defensa Técnica, pues no ha sido acreditado -con el grado de certeza positiva que requiere toda sentencia de condena- que Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA hayan utilizado los medios comisivos típicos que se le atribuyeron -violencia y amenazas- para ingresar y ocupar el predio de "Casa Nueva" el día 15/10/2020.-

Vale recordar que la Fiscalía, no sin esfuerzo, intentó, aunque sin éxito, presentar un "*contexto intimidatorio*" que caracterizó por el hecho de haberse presentado los acusados junto con cuarenta (40) personas -lo que como antes dije no fue así-, quienes -siempre a su criterio- intimidaron a los empleados que estaban en ese momento en el establecimiento, los amenazaron y ejercieron violencia para ingresar y establecerse en el inmueble.-

Yerra la acusación pública al razonar que la cantidad de personas que ingresaron en el predio surge de una "simple operación matemática" que a su criterio consiste en contabilizar, por un lado las personas que ingresaron con los acusados el 15/10/2020, sumado a las veinte (20) personas requisadas e identificadas el 23/10/2020 al salir del predio y finalmente agregando las treinta y seis (36) personas requisadas e identificadas el día 29/10/2020 que se llevó a cabo el desalojo. Si bien ya lo expliqué lo reitero: hasta que la madre y los

hermanos de la acusada decidieron bloquear la entrada al establecimiento rural, existió un flujo de personas que entraban y salían, lo que echa por tierra certeza a la que pretende arribar la fiscalía después de una "simple operación matemática", no siendo un razonamiento lógico ni coherente a los fines de arrojar certezas sobre este extremo.-

Otro dato que da cuenta del ingreso y egreso de personas al predio -que echa por tierra el cálculo numérico que realizó la Fiscalía- es el hecho de que, por ejemplo, la testigo Gabriela Dana CARPINETTI REBORA (abogada, por entonces funcionaria pública, Directora Nacional de Promoción y Acceso a la Justicia) durante la última semana de octubre de 2020 ingresó al predio, se entrevistó personalmente con Dolores ETCHEVEHERE (asistió a requerimiento de ella quien la puso al corriente de su situación por vía telefónica) salió del lugar y luego se hizo presente en Tribunales para entrevistarse con los fiscales e intervino en la audiencia ante el Juez de Garantías, lo que -nuevamente- da cuenta de que había un flujo de personas que ingresaban y egresaban del lugar.-

Por lo demás, tampoco se ha probado con grado de certeza que Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA hayan *amenazado o intimidado a los empleados* del lugar, ni en el ingreso ni posteriormente -como con desacierto técnico y metodológico reza el hecho intimado- porque si bien existió una conversación entre la primera y Ramona RODRIGUEZ personalmente, y luego vía telefónica entre su abogado, Juan Diego y Luis Miguel ETCHEVEHERE, lo cierto, real y concreto es que ese intercambio si bien puede haber sido tenso -en particular cuando la casera les dijo que previo a entregar las llaves o autorizar el ingreso debía consultar a sus superiores, a lo que los acusados le dijeron que en ese caso ella tendría que retirarse del lugar en unos quince o veinte minutos- pero no trascendió ni fue más allá de eso, a tal punto que Dolores igualmente decidió ingresar a la casa principal por la puerta del costado del inmueble, *sin ejercer fuerza ni violencia* sobre algún objeto, abriendo el mosquitero y luego la puerta ventana para dejar sus pertenencias en la habitación donde ella solía dormir cuando iba a pasar los veranos junto con sus hijos y su grupo familiar.-

Recordemos además, que Ramona terminó reconociendo -una vez que se le refrescó la memoria con la reproducción de la entrevista mantenida ante la Fiscal el día después del hecho y del video ofrecido como prueba por la defensa- donde puede verse que primero se saludan con un abrazo y que luego Dolores le pregunta cuánto le estaban pagando a ella y a su pareja por su trabajo en el lugar, tras lo cual le dice que esa situación mejoraría *en el caso en que ellos decidieran permanecer en el lugar* junto con ella y con las personas que la acompañaban (lo que revela que también se les dió la opción de quedarse en el lugar, como en definitiva terminó sucediendo).-

Ello, sin dejar de mencionar que también pudimos ver en la reproducción de

la entrevista tomada por la Fiscal interviniente a Ramona RODRIGUEZ, que se le leyó la denuncia radicada por la presidenta de la firma -lo cual es, al menos llamativo porque contaminó la declaración de quien para ese entonces aún era la empleada de los denunciantes, con todo lo que ello implica en términos de subordinación en una relación laboral de dependencia jerárquica- en la que puede advertirse una exageración y un sobredimensionamiento deliberado de los hechos en cuestión, pues la exposición allí contenida no se corresponde con la realidad de los hechos (se mencionan armas de fuego, ejercicio de violencia física hacia la empleada, y otros extremos que no hacen más de dejar en claro un especial interés en perjudicar la situación de las personas sindicadas y en expulsarlas de inmediato del lugar).-

En este contexto, entonces surge el interrogante cuya respuesta a esta altura resulta obvia: ¿es coherente, racional y posible afirmar que este intercambio de palabras, sin violencia física ni verbal, es susceptible de configurar una amenaza seria, idónea y con entidad suficiente como para causar en sus destinatarios un temor cierto como producto del anuncio de un mal grave e inminente -sea hacia su persona o hacia terceras personas- que se encuentra dentro de la esfera de dominio y de gobernabilidad de sus emisores, que tenga el efecto de vencer la resistencia que los empleados de la estancia hubieran opuesto para evitar el ingreso y la ocupación de Dolores ETCHEVEHERE (hija menor y hermana menor de los administradores del establecimiento, a quien la casera conocía desde el año 2005) y su abogado de confianza, el día 15/10/2020 en horas de la mañana? Lógicamente, a la luz de los hechos probados y en el contexto de su ocurrencia, la negativa se impone.-

Tan es así, que como ha sido probado, ni RODRIGUEZ ni MARTINEZ, ni otro empleado de los que vivían en el predio, o de los que asistían frecuentemente para realizar las labores productivas que allí se desarrollaban, fue expulsado o excluído del lugar, porque -reitero- los únicos dos testigos citados, a pesar de que se acreditó que al menos cuatro presenciaron el momento del ingreso- dijeron que permanecieron en el lugar durante los días posteriores y hasta el día del desalojo sin mayores inconvenientes, continuando con su labor cotidiana. Ello refuerza que no existieron amenazas, y que todo continuó -al menos en el interior del predio- de forma pacífica, cordial y armoniosa.-

También se hizo referencia por la parte acusadora, a los fines de reconstruir -forzadamente- el supuesto "contexto intimidatorio" de "irrupción masiva de personas" y estado de "permanente acuartelamiento" de la instalación de "puestos de vigilancia" en diferentes localizaciones del predio mediante los cuales las personas que ocuparon el inmueble controlaban el ingreso y el egreso de personas en el predio. Este extremo tampoco se encuentra suficientemente probado, al contrario, lo que quedó probado fue que los hermanos y la madre de

Dolores fueron quienes decidieron -unilateral, arbitrariamente, y sin ningún respaldo institucional ni legal-, tres o cuatro días después de la ocupación, a colocar un candado y a encadenar la tranquera de ingreso al predio, tal como los propios testigos de la parte acusadora refirieron al declarar, bloqueando -de hecho- el ingreso de nuevas personas y autorizando únicamente el egreso de quienes estaban en su interior.-

Por otro lado, tampoco se encuentra probado que los ocupantes hayan organizado la "toma" como la denominaron los testigos de la acusación, en base a una premeditación y a una logística extraordinaria, como lo han pretendido plantear los testigos de esa parte. En el debate se escuchó que habrían utilizado herramientas tecnológicas de alto costo, como drones, inhibidores de señales de teléfonos celulares y de internet, cámaras de filmación de alta sofisticación, automotores de alta gama con vidrios polarizados, traffics y combis, todo lo cual daría cuenta de un nivel de organización, de logística y de recursos elevados, que formarían parte de un plan premeditado para ocupar por la fuerza el predio y mantenerse allí dentro. Ahora bien, lo cierto es que las pruebas producidas no dan cuenta de un grado tal de espectacularidad, porque lo que se puede ver de las filmaciones del desalojo y de las constataciones realizadas por funcionarios policiales, además de los testimonios rendidos es que los ocupantes se trasladaban en automotores sencillos, varios de los cuales inclusive presentaban dificultades para salir del predio porque el camino estaba anegado como producto de la lluvia, y al momento de ser requisados los vehículos y las pertenencias de las personas se puede ver que llevaban consigo objetos de cuidado personal, vestimentas, alimentos, carpas, sillones, pero no hay ningún solo registro entre las pruebas que permita evidenciar aparatos de tecnología y sofisticación como los que han enunciado los testigos de la acusación.-

Fue claro al respecto Gustavo Horacio MASLEIN Jefe de la Policía de la Provincia para ese entonces, que intervino en el procedimiento del desalojo, al manifestar que se llevo a cabo sin violencia, que se notificó la medida y se realizó sin que nadie opusiera resistencia, que se hizo un chequeo de los elementos, eran elementos personales y herramientas para huerta y trabajo. Agregó que en el lugar *no había personas haciendo guardias*, sino un gran número de ruralistas que estaban acompañando a la familia ETCHEVEHERE, Y entidades que agrupan al campo. Remarcó que en el interior del predio *no había gente apostada*, por lo que entraron de forma normal. Además, relató que había un total de treinta y cinco (35) a cuarenta (40) personas quienes que fueron identificadas y un total de seis (6) o siete (7) vehículos de los cuales se tomaron los datos y se plasmó en el acta. El funcionario reconoció que si bien presumían que pudiera haber armas, sin embargo *no encontramos ninguna. Solo prendas personales y herramientas que habían traído para trabajar la tierra.-*

Quizás los denunciantes -para sostener esas afirmaciones- tomaron como referencia la única cámara de filmación que puede verse en la videograbación de la requisa y acta de constatación del 23/10/2020 donde uno de los automóviles (un Nissan Tida) es identificado como el perteneciente a un medio de la ciudad de Rosario, "La Prensa Express" junto con sus ocupantes (periodistas y camarógrafos), quienes -naturalmente- tenían una cámara de filmar para realizar la cobertura periodística del hecho que ya había tomado dimensiones inusitadas a nivel de difusión mediática como lo mencioné antes. Esto además, da cuenta que estas cinco personas no eran parte de las que ingresaron con los acusados, porque habían ido a realizar su trabajo al lugar.-

Habiendo llegado a este punto de análisis, como anteriormente referí, todos aquellos hechos que habrían sucedido después del día del ingreso y hasta el 29/10/2020 que se procedió al desalojo de los ocupantes, no son relevantes para tener por configurada la tipicidad de la conducta de la usurpación por despojo por invasión del inmueble mediante el empleo de violencias o amenazas.-

La doctrina es unánime sobre este aspecto. Veamos.

D'Alessio, en la obra citada (págs. 825 a 828) nos enseña que para consumar el despojo en cualquiera de los modos señalados en el tipo penal, y que la acción sea típica, tiene que perpetrárselo por alguno de los medios taxativamente enunciados en la ley, y refiere -como también lo dije antes- que tratándose de un delito instantáneo de efectos permanentes los actos posteriores a la consumación no son un medio utilizado para despojar (con cita de Fontán Balestra).-

En igual sentido, Buompadre (Código Penal Parte Especial, Tomo II, La Ley, Director Rubén E. Figari, pág. 412 y ss), en referencia a los medios típicos sostiene que los medios comisivos previstos por la ley tienen que haber sido empleados para consumar el despojo.-

También Chiara Díaz (Código Penal y normas complementarias, comentado anotado y concordado, Nova Tesis Editorial, Tomo IV) cita jurisprudencia en tal sentido donde se determinó que el despojo es un delito instantáneo de efectos permanentes ya que el estado de desposesión que crea no puede ser imputado como consumación, sino como un efecto de ésta. No debe olvidarse que una vez consumado, lo que ocurre posteriormente no influye para restarle efecto (pág. 557). Interpretado en sentido contrario en este caso, los hechos ocurridos con posterioridad, como trabajar la tierra o imponer molestias mínimas a los ocupantes no tienen efecto para configurar la conducta típica que el legislador exige al momento de ingreso al predio.-

En un sentido aún más restrictivo, Nuñez (obra citada, pág. 488) refiere que la violencia funciona como el medio *eficazmente* utilizado por el autor para ocupar el inmueble o para mantenerse en su ocupación. *No basta, por lo tanto,*

que la violencia haya simplemente acompañado de cualquier manera a la ejecución de delito.-

Finalmente, y siempre en similar sentido, en la obra citada de Baigún y Zaffaroni queda explicitado al tratar los medios comisivos (pág. 747), que la taxatividad señalada implica que, en caso de que el despojo se realice por otros medios distintos a los previstos en la ley, el hecho será atípico en relación a la figura penal de la usurpación. A ello debe agregarse que los medios deben ser empleados "para" lograr la consumación del delito, pues, como bien expresa Creus, *"...si las situaciones de violencia, amenazas, son concomitantes con el despojo, pero no fueron los medios para llevarlo a cabo, no se habrá cometido la usurpación..."*. En el mismo sentido expresa Fontán Balestra que *"Los medios enunciados han de haber sido empleados para consumir el despojo, y no para mantenerse en la posesión o tenencia ya logradas antes por otros medios. No distinguir con claridad esos aspectos conduce a atribuir tipicidad a actos que no la tienen, a transformar la usurpación en un delito permanente".-*

Resulta muy ilustrativa al respecto, y aplicable plenamente a los hechos probados de este caso concreto, una cita de jurisprudencia que se encuentra en esta última obra (pág. 781/782), donde puede leerse cuanto sigue: *"La sola presencia de quien procedió al despojo y su negativa a desocuparlo constituyen circunstancias fácticas que no se subsumen en la figura penal de la usurpación, pues ni el más amplio discernimiento de la expresión violencia física o de las amenazas (aspecto moral de la violencia) alcanzan a cubrir esta situación material. Una interpretación tan extensiva de la violencia moral que llegue a afirmar su configuración allí donde sólo hay potencialidad de uso de ella por parte de la imputada contradice todos los principios rectores de la interpretación de las normas del Derecho penal"*. (voto en disidencia del doctor Carlos Böhm, SC Mendoza, Sala II, 12/11/03 "R., G.B.", LLGran Cuyo, 2004-382).-

g- Finalmente, haré mención a otras pruebas que, al igual que los testimonios de MARTINEZ y RODRIGUEZ (y a diferencia de los testimonios de Juan Diego, Luis Miguel ETCHEVEHERE, Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL y Mariano RUBIOLLO cuya subjetividad dada por su interés directo en el asunto del cual son parte involucrada ha quedado evidenciada) resultan objetivas a los fines de reconstruir los hechos del caso.-

Concretamente me refiero al contenido del **Acta de Constatación del 16/10/2020**, labrada por funcionarios policiales en el predio "Casa Nueva" con testigos hábiles a tal efecto. En esto último me voy a detener, porque según surge de este instrumento público incorporado como prueba a la causa, resulta harto elocuente -a la hora de determinar el grado de violencia que habrían ejercido los acusados junto con las personas que los acompañaban- el hecho de que los testigos de acta son *José Nicolás CAROPRESI* y *Eitan SLOMKA*, dos de las personas

oriundas de Buenos Aires que acompañaron a Dolores ETCHEVEHERE a ingresar al establecimiento rural. Este dato no es menor, porque da cuenta a las claras de que existía una buena predisposición por parte de estas personas, uno de los cuales -de hecho- declaró en el juicio como testigo de la Defensa mientras que el otro no compareció porque las partes desistieron de su testimonio luego de iniciado el debate, cuya colaboración con los procedimientos policiales ordenados por la Fiscalía interviniente ha quedado evidenciada y plasmada en este instrumento público. En dicha acta de constatación se consigna que se les notifica a Dolores ETCHEVEHERE, Ernesto Facundo TABOADA y al ingeniero Lautaro LAZZARINI LEVERATTO (no imputado en la causa) cuál es el motivo de la diligencia y los actos a llevar a cabo en el marco de la medida, e ingresando en su contenido, se deja asentado que constataron carpas y vehículos, y entre las consideraciones realizadas por TABOADA puede leerse cuanto sigue:

"El señor Facundo Taboada quiere efectuar las siguientes manifestaciones que por hechos relacionados con la recuperación pacífica de la posesión del campo por parte de la heredera indivisa estafado por Luis Miguel Etchevehere, Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere y la denunciante Mabel Leonor Barbero, se encuentran en trámite numerosas investigaciones judiciales tanto en la jurisdicción de Entre Ríos como en la justicia criminal y correccional federal, donde tramitan la denuncia por violencia económica, extensión, corrupción y abuso de poder, mientras ejercía como ministro de la nación con intervención del juzgado N° 3, Daniel Rafecas y con intervención de la fiscalía a cargo del Dr. Delgado, en esta investigación se solicito la copia certificada de los expedientes que tramitan en Entre Ríos y en virtud del comportamiento autoritario y mafioso del resto de la familia Etchevehere, verificados por la existencia de numerosas investigaciones que lo vinculan con la trata de personas, numerosas estafas y extorsiones con modo operandis que están vinculados con escribanías de Entre Ríos en las que se presionaba y amenazaba, incluso con armas de fuego a personas en estado de necesidad, como los hermanos Cornejo que estuvieron esclavizados más de 40 años, entre muchos otros ejemplos que se pueden referir; Es que solicitamos a la justicia federal que proteja en primer lugar a los hijos de Dolores que permanecen en Buenos Aires para lo que se estableció consigna policial en su domicilio, y asimismo que proteja a Dolores Etchevehere y a todos los integrantes del proyecto Artigas, mediante intervención de fuerzas federales aquí en la Provincia de Entre Ríos.

Lo que ocurre es que acorralado por delitos gravísimos de ejecución continuada que se vienen ejecutando desde hace décadas y cuya impunidad, resulta imposible sostener; Luis Miguel Etchevehere y sus abogados y algún fiscal servil de Entre Ríos, estructuraron una estrategia frente al conflicto, consistente en generar en base a noticias falsas difundidas por medio masivos de

comunicación aliados la sensación de que se está desplegando una situación de extrema violencia que incluye la portación de armas de fuego (circunstancias absolutamente falsas que están completamente video filmadas, por lo que su prueba no tiene dificultad alguna, con el objetivo de justificar acciones violentas en perjuicio de DOLORES ETCHEVEHERE de sus hijos y de los integrantes del proyecto Artigas. Es lo mismo que ya hicieron durante el gobierno de Macri, cuando inventaron la existencia de un grupo de guerrilleros mapuches, que según sus dichos estaban fuertemente armados y amenazaban la soberanía Nacional, lo que resulto de eso fue que nunca pudo exhibirse una sola prueba existente de armas y del grupo guerrillero, pero resultaron muertos dos jovencitos que fueron asesinados cobardemente por la espalda por personal de Prefectura para generar esa sensación de la existencia de una situación de extrema violencia que justificaría una acción de respuesta igualmente violenta y posiblemente fatal utilizaron el mismo método que están utilizando ahora la difusión de noticias escandalosamente falsas y la estructuración de causa penales armadas en base a esas noticias falsas, sin ninguna prueba, como lo que están armando ahora, inventando una historia fantástica de amenazas y violencia sobre una pobre casera a la que los Etchevehere le escribieron la declaración la obligaron a sostenerla bajo amenazas de todo tipo. En virtud de todo esto, que constituye un riesgo grave para la integridad Psicosfísica y las vida de Dolores Etchevehere de los Artigas, manifestamos que responsabilizamos a las autoridades judiciales que intervienen caso. En virtud de ellos solicitamos que en coordinación con el fiscal Federal Delgado a quien ya le fue solicitada también esta protección se estructure de forma conjunta una comitiva de fuerzas de seguridad que solo podrán ingresar, permanecer o salir de la estancia, "CASA NUEVA", aquellas personas que tengan la autorización de la heredera indivisa que ejerce pacíficamente la posesión de su propiedad, ello a los fines de evitar que bajo el ropaje de trabajadores del campo o proveedores o personas relacionada con la actividad relacionada al campo, terminen ingresando personas con la intención de generar algún daño o realizar algún hecho dentro del campo, armado con la intención de generar esas noticias falsas que justifiquen asesinato. La situación es delicada, un corrupto mafioso y delincuente acostumbrado a decir, hacer lo que quiere, sin mostrar el más mínimo respeto por la Ley, está acorralado por la imposibilidad de seguir ocultando sus crímenes, un mafioso impune acorralado es una situación muy arriesgosa de allí que resulte urgente extremar las medidas de seguridad. Asimismo se deja expresa constancia del vergonzoso estado de deterioro abandono y descuido de los bienes de la sucesión que de forma fraudulenta vinieron administrando los otros familiares Etchevehere, dejamos expresa constancia a que el presente pedido de establecer un perímetro bajo control de la poseedora legítima, pacífica de la finca de ningún modo va a

efectuar ningún proceso productivo de los que se están desplegando actualmente lo que significa que quienes necesiten ingresar permanecer o salir de la finca para continuar con las actividades productivas podrán hacerlo sin problemas pero deberán acreditar su identidad y la actividad que desempeña."

De este instrumento público surge que el imputado Ernesto Facundo TABOADA solicita expresamente dejar asentadas estas manifestaciones, relacionadas con su rol de abogado de confianza de Dolores ETCHEVEHERE, donde realiza una serie de consideraciones relacionadas con la numerosa cantidad de expedientes judiciales en trámites relacionados con la conflictividad familiar a la que he referido más de una vez, y quien además deja expresamente consignado que no interferirán en el normal y pacífico desarrollo productivo del establecimiento. Todo esto guarda estricta relación de correspondencia con lo declarado por TABOADA al momento de ejercer su defensa material durante el debate, a la vez que echa por tierra la tesis de la acusación pública y privada en lo que refiere a la obstaculización y a la interferencia por parte de los ocupantes del normal desarrollo de las actividades productivas del establecimiento, mediante intimidación de las personas encargadas de realizar tales labores agrícolas, ganaderas y tamberas.-

Además, se incorporó como prueba otra **Acta de Constatación del día siguiente, 17/10/2020**, en la cual oficiaron de testigos de acta Ángel Roberto MARTINEZ (el capataz) y Fabián OLIVETTO, este último domiciliado en CABA, es decir que también forma parte de las personas que acompañaron a la acusada a ingresar al predio. Nuevamente, este elemento de prueba -objetivo e indiscutible- da cuenta junto con el anterior que el clima de esos días en el interior del predio no era de una hostilidad y amedrentamiento permanentes, como lo han pretendido presentar los acusadores, sino que existía cierta armonía y cordialidad, al menos en el interior de la finca rural, que da sustento a lo declarado por los testigos de la Defensa en este punto.-

Cabe apuntar en relación a esto que vengo diciendo, que las funcionarias policiales que declararon durante el juicio Stella Maris DENIS, Gimena María Macarena VELÁZQUEZ y Annalise María Nahir DIETERLE, (Alberto Javier GENREBERT, María Mercedes BOLOGNINI) quienes intervinieron en el diligenciamiento de las distintas medidas (constataciones, registros, desalojo) dijeron que no advirtieron ninguna situación de violencia, en sentido concordante con los dichos de MASLEIN.-

Finalmente, teniendo a la vista el **Acta de Desalojo del día 29/10/2020** y los siete DVDs acompañados en los cuales se registró el diligenciamiento de esta medida, puedo advertir que el personal policial interviniente requisó exhaustiva y minuciosamente a las personas y a los automóviles que estaban en el interior del predio, lo cual permite descartar de plano que esas personas hayan hurtado

bienes muebles o demás elementos de propiedad de la familia ETCHEVEHERE, porque es lógico que ello hubiera sido fácilmente advertido por el personal policial al momento de realizar la requisita personal y vehicular.-

Por lo demás, tampoco existe un acta de constatación de cuál fue el estado en que quedaron los diferentes inmuebles (casa principal, casa de empleados, galpón, oficinas, tambo, etcétera) y sus inmediaciones, lo que traduce una nueva omisión por parte de la acusación a la hora de llevar a cabo medidas tendientes a acreditar tales extremos. Sin perjuicio de que tampoco se atribuyeron a los acusados tales daños, robos o hurtos de tales bienes, lo cierto es que tampoco ello ha sido probado, surgiendo únicamente del contenido de las declaraciones de los hermanos y de la madre de Dolores ETCHEVEHERE, cuya subjetividad y parcialidad frente resultan más que evidentes a tenor de la conflictividad subyacente al hecho en cuestión, a la cual ya he hecho referencia con anterioridad. Ello, por el contrario fue negado por la testigo Ramona MARTINEZ, quien únicamente refirió a un desorden generalizado de la residencia principal de la estancia, y a la faltante de algunos alimentos de la despensa que los ocupantes habrían consumido durante su estadía en el predio, lo que a esta altura del análisis resulta a todas luces irrelevante.-

h.- Hasta aquí tenemos un cuadro probatorio que, merituado y analizado integralmente de acuerdo al método de la sana crítica racional, me conduce -por lo menos- a poner seriamente en duda que Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA al momento ingresar y ocupar el establecimiento rural "Casa Nueva" el 15/10/2020 hayan ejecutado el despojo que exige la figura típica de usurpación por despojo -por invasión del inmueble- mediante el empleo de violencia y amenazas. Esta situación de duda insuperable, no ha sido disipada por la acusación, quien tiene la responsabilidad de la iniciativa probatoria tendiente a descubrir la verdad sobre los extremos de la imputación delictiva (Cfr. art. 252 CPPER).-

En definitiva, existe una situación de duda insuperable respecto de la configuración de la acción típica que prevé el legislador en la figura del art. 181 inc. 1 del CP, circunstancia que que impide arribar al estado intelectual de certeza positiva que se requiere para condenar a una persona.-

Por las consideraciones antes expuestas, habiendo arribado a este punto del análisis y merituación integral de las probanzas colectadas puedo sostener, a modo de conclusión, que a partir de la conjunción de la prueba incorporada válidamente al juicio y los testimonios que se han producido en el debate no es razonable sostener con certeza que las personas acusadas hayan cometido la conducta típica que exige la norma penal en cuestión, subsistiendo una situación de duda aún en esa instancia.-

Muy por el contrario, la versión que han brindado las personas acusadas

sobre los hechos al ejercer su defensa material se encuentran corroboradas por un número considerable de elementos probatorios (que han sido exhaustivamente analizados antes) que -valorados en conjunto- me conducen a un estado de duda que torna imposible arribar a un pronunciamiento condenatorio.

Tiene dicho sobre el referido principio la Cámara de Casación Penal, Sala I: *"La máxima "in dubio pro reo" deriva del principio de inocencia (Art. 18 C.N.) que le proporciona su justificación político- jurídica, pues sólo en su virtud se puede admitir que la duda, en lugar de perjudicar al reo, lo beneficie. Es al órgano público predispuesto (Ministerio Fiscal) a quien compete destruir aquél "status" de inocencia, acreditando acabadamente la culpabilidad del incurso. Si aquél fracasa en su intento y no logra probar fehacientemente la existencia del hecho y la participación punible del imputado, el estado de inocencia reconocido por el ordenamiento legal se mantiene, prevaleciendo sobre las pruebas que, si en un momento lo pusieron en tela de juicio, carecieron luego de envergadura para destruirlo legalmente".-* ("GALIZZI, Sergio Daniel - GOBO, María Belén S/ HURTO SIMPLE - PECULADO CULPOSO - RECURSO DE CASACION" (Legajo N° 185/14, del 05/11/2015).-

Este cuadro de orfandad probatoria e indicios de carácter anfibológico hacen que aún subsista en esta instancia la duda razonable -en lo que refiere a la relevancia típica de la conducta realizada por parte de las personas acusadas- lo que torna imposible derribar el estado constitucional de inocencia.-

En mérito a lo anteriormente expuesto, no encuentro entre las probanzas colectadas elementos de convicción con aptitud suficiente como para hacer madurar en el plano intelectual el estado de certeza positiva (estado mental necesario para dictar un veredicto condenatorio), por lo que corresponde dictar su absolución de Dolores ETCHEVEHERE y de Ernesto Facundo TABOADA por el beneficio de la duda.-

i.- Desde luego, que -si bien es una obviedad aclararlo- **lo aquí resuelto en modo alguno implica convalidar el ejercicio y la utilización de vías de hecho para la resolución de los conflictos**, pues como es sabido, en un Estado Democrático de Derecho existen vías y cursos de acción institucionales y legales que resultan aptas, adecuadas y eficaces para tal fin, que se encuentran reguladas por las normas que rigen la interacción social. Aclaro esto, debido a que en el trámite de la presente causa se ha hecho alusión a las "tomas" o "usurpaciones" de terrenos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional por parte de grupos de personas que no respetarían la propiedad privada como derecho de raigambre constitucional y convencional. Ello en modo alguno obsta a concluir que las concretas y particularísimas circunstancias del presente caso (a las que he hecho mención ya en distintas oportunidades) disten, y mucho, de fenómenos de esas características, y en tal sentido no pueden ser asimilados ni parangonados al

solo efecto de causar impresión, exageración o darle al conflicto una entidad que no tiene, pretendiendo así sobredimensionarlo por vía de la retórica.-

j.- Por otro lado, considero adecuado y oportuno hacer algunas reflexiones relacionadas con **la forma en que se ha llevado el trámite de la Investigación Penal Preparatoria** durante el presente proceso.-

De las circunstancias probadas, surgen una serie de hechos que deben llamarnos la atención como operadores del sistema, pues operan a modo de "alertas" o "alarmas" que nos conducen a reflexionar acerca de si en el trámite y la gestión del caso existen sesgos de género, si se dispensó un trato procesal igualitario a las personas involucradas en el conflicto, y si se aplicó la perspectiva de género y el deber de actuar con debida diligencia reforzada conforme lo imponen las normas legales, constitucionales y convencionales vigentes.-

Además, y sin ánimo de quebrar las reglas del sistema acusatorio de corte adversarial que nos rige, me permito destacar algunas omisiones del Ministerio Público Fiscal en el diligenciamiento de medidas investigativas que -posiblemente- podrían haber sido útiles para echar luz sobre los hechos y en tal sentido aportar a su esclarecimiento:

En efecto, paso a enumerar algunos de estos hechos y actos procesales que -como advertencias- nos interpelan a reflexionar sobre este punto:

-La acusación pública decidió -sin mayores explicaciones- imputar el hecho únicamente a dos personas, siendo que intentó acreditar que al menos se encontraban acompañadas de unas cuarenta personas al momento del ingreso (más allá de que a la postre eso no se probó, lo que no incide en la decisión política- criminal de atribuir el hecho a algunas o a todas las personas en cuestión desde el inicio de la causa, o bien con el avance de la investigación).-

-La frase contenida en el último párrafo de la intimación (*Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.*.) contiene un sesgo, pues -al parecer- revela un posicionamiento y una toma de postura de antemano respecto de la cuestión fonal que gira en torno a los derechos la acusada sobre el predio ocupado, lo que como ya dije nada tiene de relevante para dilucidar el presente caso.-

Este modo de proceder se asemeja bastante a lo que los especialistas identifican como un sesgo de género, manifestado en aquellos casos en los que nos encontramos ante una *acusación con elementos ajenos al tipo penal*, para impresionar, sobredimensionar la conducta o causar efecto en perjuicio de las personas acusadas.-

-La acusación pública no decidió iniciar causa ni imputar formalmente el hecho de desobediencia judicial que habría sido cometido por Luis Miguel, Juan

Diego y Arturo Sebastián ETCHEVEHERE y Leonor María Magdalena BARBERO MARCIAL, luego de incumplir reiteradamente las medidas de protección que les fueron impuestas por resolución judicial del 23/10/2020, lo cual se encuentra sumariamente acreditado a tenor del contenido de dicha manda judicial y de la resolución del juez de garantías al dictar el auto de remisión a juicio donde sobreseyó a la acusada del delito de desobediencia judicial.-

-La acusación pública no investigó ni tramitó la denuncia de violencia y desobediencia judicial que realizó el juez que tiene a cargo el trámite del juicio sucesorio, con posterioridad a los hechos del 23 y 26 de diciembre de 2020 cuando había asignado a la acusada una de las viviendas de calle Los Vascos de esta ciudad, para luego retrotraer la medida precisamente en función de la violencia ejercida por parte de Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián ETCHEVEHERE contra su hermana menor Dolores ETCHEVEHERE.

-La acusación pública decidió mantener sometidas a proceso penal a las dos personas acusadas durante un elongado tiempo, si tenemos en cuenta que la causa se originó el 15/10/2020 y que el juicio oral se realizó hace pocos días. Esta decisión fue tomada sin analizar, o sin analizar con la profundidad que se requiere, la aplicación de salidas alternativas para resolver la situación procesal de los acusados, quienes podrían haber accedido a tales instancias no adversariales (conciliación, mediación, suspensión del juicio a prueba) si tenemos en cuenta que el delito atribuido no es grave y que ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales condenatorios. Confirma este punto, el hecho de que recién un par de días hábiles antes al comienzo del debate, la Defensa Técnica y la Querrela presentaron al Tribunal una solicitud de suspensión del juicio por haber arribado a un acuerdo en base a salidas alternativas al juicio oral (conciliación en el caso de Ernesto Facundo TABOADA y suspensión del juicio a prueba para el caso de Dolores ETCHEVEHERE), lo cual fue desestimado de plano por este Tribunal por resultar improcedente por extemporáneo.-

-Ni la acusación pública ni la privada hicieron mención alguna durante el debate a la cuestión de género invocada por la Defensa Técnica y por Dolores ETCHEVEHERE desde un primer momento de la investigación. Si esta situación fue invocada merece, al menos un tratamiento para refutarla o para asignarle la relevancia que cada parte estime corresponder en cada caso (me refiero, en caso de ser admitida, la decisión de qué efecto jurídico asignarle dentro de la teoría del delito sea como causa de exclusión de la acción, causa de justificación, de exculpación, eximente, atenuante de pena, etcétera).-

-Como ya dije antes, la acusación pública decidió no citar a debate -sin dar ninguna explicación- a tres testigos que hubieran sido, muy probablemente, claves para dilucidar los hechos, me refiero concretamente a Miriam (la pareja de MARTINEZ), Osmar BARRETO (por entonces pareja de RODRIGUEZ) y LENCINA

(trabajador del tambo de "Casa Nueva).-

Así voto.-

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL SR. VOCAL, DR. LABRIOLA DIJO:

La conclusión desinriminatoria alcanzada por este tribunal, me exime de expedirme sobre esta cuestión.-

Así voto.

A LA CUARTA CUESTION, EL SR. VOCAL, DR. LABRIOLA DIJO:

i.- La conclusión desinriminatoria alcanzada por este tribunal, me exime de expedirme sobre la pena a aplicar.-

ii.- Ahora bien, corresponde hacer en esta instancia algunas consideraciones referidas a la actuación de la parte querellante en los alegatos de clausura.-

Para mayor claridad, voy a transcribir algunos fragmentos que contienen las frases y razonamientos esbozados por el querellante durante su intervención en la etapa de discusión final, que resultan ser -por lo menos- llamativos por su trato discriminatorio y sesgado hacia Dolores ETCHEVEHERE, que no hacen más que reforzar y reafirmar la violencia de género que ella, en su condición de única hija mujer y la menor de la familia, ha venido denunciando invocando, y en más de un caso acreditando.-

De las expresiones del Dr. PAGLIOTTO surge cuanto sigue:"Quiero que se grave lo que estoy diciendo. Bueno entonces no dejemos pasar algunas cosas. *Por ejemplo, hay una cuestión que a mi me llamó la atención, porque dice Dolores yo subsistí apenas en estos 16 años. **La verdad que me hubiera encantado ser un subsistente que mando a mis cuatro hijos a un colegio que a plata de hoy la secundaria están cerca de 800.000 pesos. Tengo los informes.** De la misma manera que ella mostró fotos, cuando esto se haga público yo también tengo los informes de "El Molino" y el "Buen Aire", colegio **para milis y pilis, para niños bien.** Por supuesto que quedó alguna deuda, porque tengo los informes para el juicio civil. Tampoco se dijo a ver por qué no se ataca la venta de unos hermosos lotes de Concordia que le dejaron casi 350.000 dólares y que tengo la escritura. Todo eso está en el famoso juicio de nulidad. (...). Esto sí lo tengo que decir porque va a ser a su consideración respecto a si ella tenía o no derechos. Si tan nulo, si tan apretada y tan extorsionada y coaccionada estuvo cuando la obligaron a hacer ese convenio dice ella, genérico donde ella desistía de las acciones penales, se repartían, se obligaba a la escisión societaria ahora como yo voy a ceder acciones o un contrato que está viciado? Por eso le pregunté al Dr. Julio Federik, al Dr. Leopoldo Lambruschini, al Dr. Averó, ustedes la vieron? Y me dijeron "pero por favor, si es hija de íntimos amigos, no lo hubiera permitido nunca y no tomo casos de personas extorsionadas, no vi la extorsión, no vi se pida la nulidad donde está clarito la plata, los testigos, y cuanto se cobro por*

otras propiedades o ganado vacuno u otro tipo de semovientes”.

(...) Y yo también podría mostrar las fotos, donde hay en el verano del 2009 una paz y una armonía, abrazada **con el hermano que la azotaba a palos, Sebastián**. Y hay otra cosa que es innegable. Yo jamás nombraría padrino de un hijo a alguien que me ha tenido a los azotes. Uno es padrino del otro, ella es madrina de otro. Dice que la criaron en un hogar de clase, casi sintiéndose avergonzada del comportamiento de su padre. Yo tengo una foto acá que está el presidente Menem en su casa. Hoy no se lo quise preguntar pero **yo quisiera saber cuánto hace que la señora no trabaja, que tiene un tenía un marido el Sr. Guiraldes, porque los padres no tienen la obligación de mantenernos, pero además quiero agregarle algo que tiene un vínculo directo con esta causa que sigue viviendo en la casa de su madre, porque le quiero aclarar que el piso sexto del coqueto barrio (de Recoleta) lo compró y al quinto lo heredó porque la madre la señora Barbero Marcial tiene tanto o más dinero su familia.** (...)

Y ya había a demostrar que esto no es la conspiración, yo puedo escribir el libro, frente a “Sola” **yo hubiera escrito “Todo el mundo contra Dolores” porque el anterior abogado, el Dr. Del Carril es acreedor por sumas enormes de honorarios que la señora le debe. Entonces está llena de embargos. Y de los peritos porque a todos se les debe.”**

Con lo que he seleccionado y resaltado es más que suficiente para dar tratamiento a este asunto. Las expresiones vertidas por el Dr. PAGLIOTTO direccionadas de modo directo y personal a Dolores ETCHEVEHERE -algunas con ironía, algunas más o menos sutiles y otras sin disimular su agresividad- revelan, analizadas en contexto y de manera integral, un trato violento y discriminatorio, y contienen de modo subyacente determinados sesgos patriarcales, como por ejemplo, se sostiene que si sus hijos van a un colegio privado ella no tendría motivos para reclamar por sus derechos, si la relación con su hermano Sebastián "fuera tan conflictiva" no se explica cómo pudo haberlo nombrado padrino de su hijo, a la vez que deja entrever que Dolores "nunca trabajó" es decir que sería holgazana y siempre vivió de la "fortuna" familiar o "mantenida" por su marido Guiraldes, haciendo además un juicio de valor negativo sobre su situación patrimonial, mencionando que estaría "llena de embargos" por no cumplir con los compromisos económicos asumidos, reforzando así la idea de que la mujer no tiene capacidad suficiente para administrar recursos, tarea que vendría asignada - de antemano- para los varones. -

Nada de esto resulta tolerable ni admisible, porque el temperamento del querellante se opone abiertamente a lo que las normas legales, constitucionales y convencionales establecen en materia de violencia de género y discriminación hacia las mujeres.-

Así, dentro del marco razonable y respetuoso en el que debe transcurrir el proceso penal, las partes podrán no compartir los argumentos de la contra parte, y para tales supuestos es el propio ordenamiento el que prevé las formas de plantear tal desacuerdo; pero tal facultad dista sobremanera de que, amparado bajo ese ropaje, se puedan realizar afirmaciones que contengan un trato violento y discriminatorio hacia la acusada por su condición de mujer. Lo cuestionable, además, es que muchos de estos señalamientos son solo livianas formulaciones efectistas que se quedan en la mera alegación - nutridas por los sesgos y prejuicios de género latentes que subyacen a esas expresiones.-

La Sala I de la Cámara de Casación de la provincia ha fijado una nutrida jurisprudencia en orden al diálogo racional que debe mediar en el proceso y en la actividad judicial; y en tal sentido resulta reprochable todo temperamento que vulnere el ambiente de orden y respeto en el que debe desarrollarse la actividad judicial.-

Por ello de conformidad con la potestad impuesta por el art. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Dec.-ley Nº 6902/82, ratif, por Ley Nº 7504) corresponde aplicar al Dr. PAGLIOTTO la sanción de PREVENCIÓN (cfme. art. 9 inc. 4 ap. "a", ley citada) recomendándole que mantenga el decoro en el trato para dirigirse a las personas acusadas del mismo modo que exigiría para sí en el ámbito de los Tribunales, y que adecúe sus intervenciones a las normas convencionales, constitucionales y legales vigentes en materia de violencia contra la mujer.-

iii.- Corresponde imponer las costas de oficio -arts. 584 y 585 CPPER.-

vi.- En cuanto a los honorarios profesionales, no corresponde regular la labor profesional de los letrados y la letrada intervinientes, en razón de no haberlo peticionado expresamente -Art. 1 y 97 de la Ley Nº 7046.-

Así voto.-

A mérito de lo expuesto, resuelvo dictar la siguiente

S E N T E N C I A :

I.- ABSOLVER de culpa y cargo a Dolores ETCHEVEHERE y Ernesto Facundo TABOADA, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por el delito de USURPACION previsto en el art. 181 inc. 1 del Código Penal, en calidad de CO-AUTORES -(art. 45 del Cód. Penal) que les fuera atribuido, por el beneficio de la duda.-

II.- APLICAR la sanción de PREVENCIÓN al Dr. Rubén PAGLIOTTO (cfme. art. 9 inc. 4 ap. "a", Dec.-ley Nº 6902/82, ratif, por Ley Nº 7504) recomendándole que mantenga el decoro en el trato para dirigirse a las personas acusadas del mismo modo que exigiría para sí en el ámbito de los Tribunales, y que adecúe sus intervenciones a las normas convencionales, constitucionales y legales vigentes en materia de violencia contra la mujer.-

III.- DECLARAR las costas de oficio -arts. 584 y 585 CPPER.-

IV.- NO REGULAR los honorarios profesionales de los letrados y la letrada intervinientes, en razón de no haberlo petitionado expresamente (art. 97 inc. 1 del Decreto Ley 7046/82 ratificado por ley 7503).-

V.- COMUNICAR la presente, sólo en su parte dispositiva al Juzgado de Instrucción interviniente, Jefatura de la Policía de Entre Ríos, Área de Antecedentes Judiciales del Superior Tribunal de Justicia, Junta Electoral Municipal, Juzgado Electoral y Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, y demás organismos que corresponda.-

VI. FIJAR la audiencia del día **LUNES 12 DE MAYO DE 2025 a las 12.00** horas a efectos de dar lectura íntegra al presente documento sentencial.-

VII. PROTOCOLÍCESE, regístrese, líbrense los despachos del caso y oportunamente, archívese.-

Dr. Gervasio Labriola
-Vocal de Juicios y Apelaciones Nº5-